

**INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE DECLARA IMPRESCRIPTIBLES LOS DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES.**

---

**BOLETÍN N° 6956-07(S)**

**HONORABLE CÁMARA:**

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia suma, el proyecto de la referencia, iniciado en moción de los senadores que se indica: Jaime Quintana Leal; Ximena Rincón González; Fulvio Rossi Ciocca (ex) y Patricio Walker Prieto (ex).

**CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.**

**1) La idea matriz o fundamental del proyecto** es establecer la imprescriptibilidad de la acción penal para perseguir a los responsables de crímenes o simples delitos sexuales, cuando la víctima sea un menor de edad.

**2) Normas de quórum especial.**

No tiene.

**3) Normas que requieren trámite de Hacienda.**

No hay.

**4) Aprobación de proyecto en general.**

La idea de legislar fue aprobada por el voto unánime de los diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Luciano Cruz-Coke; Marcos Ilabaca (por el señor Díaz); Erika Olivera (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez; Tomás Hirsch; René Saffirio; Leonardo Soto.

**5) Se designó Diputado Informante al señor Gabriel Boric.**

**I.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN.**

En los fundamentos de esta iniciativa, sus autores recuerdan que el día 31 de agosto del año 2007 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 20.207, que estableció que la prescripción de los delitos sexuales contra menores se computará desde el día en que la víctima alcance la mayoría de edad.

Indican que dicha normativa tuvo su origen en una Moción -Boletín N° 3.786-07- presentada el día 19 de enero de 2005 por diputados miembros de la Bancada de Renovación Nacional, a cuyo trámite legislativo se incorporó otra Moción -Boletín N° 3.799-07-, presentada con posterioridad, el día 3 de marzo de 2005.

Precisan que dichas disposiciones supusieron un avance muy significativo en contra de la pedofilia, ya que muchos de los delitos perpetrados contra menores quedaban en la más completa impunidad, dado que, cuando los menores alcanzaban la mayoría de edad, y podían, en consecuencia, ejercer las acciones penales por sí mismos, sin necesidad de hacerlo a través de sus representantes legales, tales ilícitos se encontraban prescritos y, en consecuencia, extinguida toda responsabilidad de carácter penal y también las acciones civiles.

Seguidamente, manifiestan que la realidad social muestra que, en múltiples ocasiones, las víctimas sólo se atreven a denunciar los delitos de connotación sexual que padecieron muchos años después de haber alcanzado la mayoría de edad, encontrándose, en todos estos casos, prescritas las acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad.

Indican que estos delitos son especialmente graves, ya que provocan serios trastornos en la personalidad de la víctima. Agregan que detrás de todo abusador, hay un niño abusado, significando con ello que, probablemente, en un patrón normal de conducta humana, que una persona que ha sido abusada en su niñez, seguramente repetirá tal conducta con otros niños, incluso con los suyos propios. De igual forma, añaden, que aún en el caso de las personas resilientes, el daño que provoca un abuso sexual es inconmensurable, que genera todo tipo de problemas para vivir y desarrollar su sexualidad, con lamentables consecuencias en otros ámbitos de su vida.

Por tales razones, expresan que los delitos sexuales perpetrados contra menores de edad constituyen acciones tan reprochables que no deberían prescribir una vez que ha transcurrido cierto lapso de tiempo. Agregan que los delitos sexuales contra menores no son los únicos que no deberían prescribir en nuestro sistema.

Explican que la institución de la prescripción se basa en la necesidad de vivir en un estado de paz, subyaciendo en ella la idea de que cuando las personas no ejercen durante cierto tiempo sus derechos, es porque han renunciado a ellos. Esta idea, sin embargo, admite varias e importantes excepciones, como ocurre en el ámbito penal en materia de delitos de lesa humanidad, que, en virtud de su entidad, no prescriben, pudiendo, además, ser perseguidos y juzgados en cualquier parte del mundo.

Señalan que no es razonable entender que una víctima de un delito sexual, cuando era menor de edad, renunció a sus derechos en este ámbito por no haber ejercido la respectiva acción penal una vez haya alcanzado la adultez.

El texto del proyecto se estructura en un artículo único que sustituye el artículo 369 quáter del Código Penal por otro que establece que los delitos

previstos en los dos párrafos anteriores (párrafo 5°, de la violación; y 6°, del estupro y otros delitos sexuales del Título VII, del Libro II del Código Penal) serán imprescriptibles.

## **II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.**

El artículo 1°:

Agrega un nuevo artículo 94 bis al Código Penal, estableciendo un catálogo de delitos respecto a los cuales no prescribirá la acción penal, cuales son los crímenes y simples delitos descritos y sancionados en el artículo 142, inciso final, en relación con la violación; los artículos 150 B y 150 E, ambos en relación con los artículos 361, 362 y 365 bis; los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter; el artículo 411 quáter en relación con la explotación sexual; y el artículo 433, N° 1, en relación con la violación, cuando al momento de la perpetración del hecho la víctima fuere menor de edad.

Suprime el artículo 369 quáter del Código Penal, norma que establece un régimen especial para el inicio del plazo de prescripción de la acción penal para los delitos previstos en los dos párrafos anteriores al párrafo en que se ubica la norma derogada, esto es los que regulan los delitos de violación y estupro y otros delitos sexuales, de tal manera que el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima de tales delitos, al momento que cumpla 18 años.

Agrega un artículo 369 quinquies, el cual dispone que tratándose de los delitos del catálogo del nuevo artículo 94 bis se considerarán delitos de acción pública previa instancia particular y se regirán por lo dispuesto en el artículo 54 del Código Procesal Penal desde que el ofendido por el delito haya cumplido los dieciocho años de edad, si no se ha ejercido antes la acción penal.

Por ello, dispone que siendo delitos de acción pública previa instancia particular, el Ministerio Público no podrá actuar de oficio en los términos del inciso cuarto del artículo 54 del Código Procesal Penal, cuando el ofendido pueda libremente denunciar estos ilícitos a la justicia, al Ministerio Público o a la policía.

El artículo 2°, establece que tratándose de los delitos establecidos del mencionado catálogo del artículo 94 bis, la acción civil reparatoria podrá ser deducida por una sola vez, en contra del imputado o del responsable del hecho ajeno, transcurrido el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, entendiéndose renovada la acción civil, cumpliéndose las condiciones señaladas en los dos artículos siguientes.

El artículo 3°, dispone que se entenderá renovada la acción civil reparatoria en contra del imputado por los delitos señalados en el artículo anterior,

si la demanda es interpuesta por la víctima, en los términos que la norma consigna, le aplica en su procedimiento las normas del Código Procesal Penal, en particular, las contenidas en el Párrafo 2° del Título III del Libro Primero, en todo lo que no sea modificado en este artículo. También establece otras hipótesis en las cuales se entiende renovada la acción civil reparatoria.

El artículo 4°, regula la renovación de la acción civil contra el responsable por el hecho ajeno.

El artículo 5°, norma que las disposiciones de esta ley no tendrán aplicación respecto de los delitos perpetrados por adolescentes, sujetos a la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Finalmente, un artículo transitorio, regla que para los hechos delictivos cometidos con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente el artículo 369 quáter del Código Penal.

### **III. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR**

#### **Sesión N° 92 de 16 de abril de 2019.**

El diputado **Walker (Presidente)** dio inicio a la tramitación del proyecto en tabla.

El señor **Juan José Ossa, Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S)**, expuso con el apoyo de una [presentación](#) en PowerPoint.

Señaló que es un proyecto hermoso tanto en su contenido como porque permitió constatar que cuando se trabaja unido se puede salir adelante, en el que han jugado un rol fundamental las senadoras Carolina Goic y Ximena Rincón, los senadores Jaime Quintana y Patricio Walker, y el diputado Matías Walker.

El proyecto establece la **imprescriptibilidad** de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes a fin de reconocer legalmente que el estatuto actual de prescripción es insuficiente porque se trata de delitos que tienen varias particularidades, pero una muy relevante, cual es, que muchas veces quienes los han sufrido no quieren en un determinado momento hacer una denuncia o no pueden hacerlo por el daño psicológico que se les ha causado.

El proyecto somete diversos delitos a este régimen y establece una nueva regulación de la **legitimación activa**, puesto que el régimen actual establece que se trata de delitos de acción penal pública y el proyecto prescribe que una vez que la víctima cumple la mayoría de edad pasa a ser delito de acción penal privada previa instancia particular, de modo que desde ese momento la decisión de hacer la denuncia la tiene solo aquel que sufrió el daño, con lo que se combina la importancia en la sociedad de

perseguir estos delitos con el respeto a la decisión de las víctimas. Por eso se dice que la acción es imprescriptible para la víctima.

El proyecto además establece un régimen de **responsabilidad civil** tanto contra el imputado como contra los terceros responsables del hecho ajeno, como por ejemplo el caso de instituciones que han encubierto o no han sido lo suficientemente diligentes o valientes para efectos de denunciar los ilícitos que bajo su amparo se pueden haber cometido.

En cuanto a la posible **aplicación retroactiva** de la imprescriptibilidad comentó que se dio un largo debate en el Senado al respecto. Se hizo un esfuerzo muy relevante para dotar a la imprescriptibilidad de ese efecto, todos los actores quisieron que así fuera, pero primó el temor de una eventual declaración de inconstitucionalidad por aplicación del principio pro reo consagrado en la Constitución, ante lo cual se optó por dejar ese debate para futuras legislaciones en pos de que esta regulación propuesta entre en vigor lo más pronto posible.

Finalmente, comentó que esto se enmarca dentro de una agenda del Ejecutivo y del Legislativo en materia de infancia y en materia específica de delitos sexuales, por ejemplo, con el proyecto de ley de entrevistas videograbadas que se está implementando, el de perfeccionamiento del registro de pedófilos que avanza rápidamente, y el que se presentará prontamente que pretende excluir a los ofensores sexuales de menores de rebajas de condena.

El señor **Sebastián Valenzuela, Jefe de la División Jurídica del Ministerio**, comentó que desde lo técnico el proyecto presenta varias complejidades y particularidades, que partió hace muchos años, el año 2010 con una moción parlamentaria, que ha tenido una tramitación larga e intensa en el último año, a la que el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva.

Este proyecto intenta acercar el derecho con la realidad, abordando la regla especial de prescriptibilidad contemplada en el artículo 369 quáter del Código Penal, según la cual “En los delitos previstos en los dos párrafos anteriores, el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima, al momento que cumpla 18 años.”, incorporada el año 2007 como avance significativo pero que sigue siendo muy restrictiva.

Todas las premisas aprendidas desde lo jurídico respecto de la prescripción se desdibujan ante esta realidad tan particular.


El fundamento del proyecto será profundizado por los invitados Vinka Jackson y James Hamilton, quienes han logrado documentar y justificar por qué las reglas de prescripción no abordan adecuadamente la materia.

Lo que subyace al tratamiento especial no tiene que ver con la gravedad de los delitos sino si es legítimo o no que la ley presuma que una víctima a los 18 años está en condiciones de denunciar, porque eso es lo que hoy subyace a nuestra regulación vigente, pasados 5 o 10 años según corresponde, lo que sigue es denegación de justicia.

Comentó que lo anterior orientó el debate durante el primer trámite constitucional de modo que se eliminaron algunos delitos que estaban originalmente en el catálogo, como la comercialización de material pornográfico infantil que más allá de su gravedad no acompaña el fenómeno que fundamenta este trato, y se amplió a otros delitos, fuera del párrafo de los delitos sexuales.

En cuanto a la **imprescriptibilidad** precisó que no hay cuestionamientos para establecer la imprescriptibilidad del delito, pues es una cuestión legal y no constitucional, es una decisión del legislador y no del constituyente donde regular las reglas que rigen la prescripción, de hecho, es una institución llena de reglas especiales.

Se abordaron tres argumentos principales en contra de la imprescriptibilidad:



## Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

### III. IMPRESCRIPTIBILIDAD PENAL

No hay cuestionamientos para establecer la imprescriptibilidad del delito, pues es una cuestión legal y no constitucional

ARGUMENTOS CONTRA LA IMPRESCRIPTIBILIDAD:	RESPUESTA:
<input type="checkbox"/> Atenta en contra de la garantía que tiene el imputado de ser juzgado en un PLAZO RAZONABLE (art. 19 N°3 inc. 6° CPR)	<input checked="" type="checkbox"/> Es una garantía del imputado a ser oído y juzgado sin dilaciones indebidas <u>desde el momento en que el proceso se inicia en su contra</u> (Corte IDH).
<input type="checkbox"/> La destrucción por el transcurso del tiempo de los EFECTOS MORALES DEL DELITO en la sociedad.	<input checked="" type="checkbox"/> Si subsiste la alarma social a consecuencia del ilícito cometido, no se cumple con la causa de la institución de la prescripción, y el hecho debe perseguirse y sancionarse.
<input type="checkbox"/> Falta de MEDIOS DE PRUEBA que permitan acreditar la comisión de los ilícitos	<input checked="" type="checkbox"/> Los delitos de carácter sexual son per se complejos de acreditar.

**FUNDAMENTO:** DEVELACIÓN TARDÍA. Fenómeno victimológico que fundamenta este tratamiento especial

Estos tres temas se discutieron en el Senado, pero ninguno de ellos fue capaz de derribar la voluntad del Senado donde hubo unanimidad en las Comisiones y en la Sala para aprobar el proyecto.

Con el proyecto se reconoce un principio que la misma jurisprudencia ha ido recogiendo, esto es que “al impedido no le corre plazo”, por cuanto se ha dicho en el contexto del recurso de protección que el plazo para accionar se inicia no necesariamente cuando ocurre el acto agravante sino que desde que se manifiesta el daño que puede ser posterior, y es la misma lógica la que plantea el proyecto.


En línea con lo anterior se ha sugerido establecer que el plazo de prescripción corra en estos casos desde que la víctima manifiesta el daño, alternativa por la que han optado algunos países, sin embargo, el inconveniente de esa fórmula es que en el caso

de denuncia la discusión se centra no en el hecho en sí, sino en desde cuando la víctima estaba capacitada para denunciar.

En cuanto a la **legitimación activa**, precisó que la regla actual relativa a delitos sexuales contra menores de edad es que son de acción penal pública, y el proyecto mantiene eso en tanto la víctima sea menor de edad, y precisa y limita el impulso de la acción penal, únicamente a la víctima, cuando ésta haya alcanzado la mayoría de edad, pasando desde ese instante, desde una acción penal pública a una acción previa instancia particular.





En lo relativo a la **retroactividad** de la imprescriptibilidad comentó que fue otro punto profundamente debatido en el Senado, sin embargo, luego de toda la discusión, fue desechada esa opción.


Los argumentos que se desarrollaron fueron los siguientes:



## Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

### IV. RETROACTIVIDAD PENAL

	<p><b>ASPECTOS CONSTITUCIONALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principio de irretroactividad de la ley penal (art. 19 N°3 inc. 8°). Tesis mayoritaria.</li> <li>• Aplicación del art. 369 quáter (año 2007) por parte de los Tribunales de Justicia.</li> </ul>
	<p><b>ASPECTOS PROCESALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normas procesales que le otorgarían al imputado una especie de derecho preferente para ampararse en un plazo procesal más favorable.</li> </ul>
	<p><b>ASPECTOS LEGALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificaciones legales respecto de delitos sexuales. En los últimos años las leyes 19.617 (1999), 19.874 (2003), 19.927 (2004), 20.480 (2010), 20.507 (2011), 20.526 (2011), 20.594 (2012), 20.685 (2013).</li> </ul>
	<p><b>ASPECTOS OPERATIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inaplicabilidad por inconstitucionalidad (TC). Riesgo de afectación en los procesos de reparación.</li> <li>• Situación de procesos previos terminados por No Inicio. ¿Reapertura? Art. 76 CPR. Incentivo perverso.</li> <li>• Capacidad del sistema de poder llevar con éxito las investigaciones.</li> </ul>



Respecto de la **renovación de la acción civil** comentó que la propuesta es la siguiente:

**V. RENOVACIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL**

Nuevo estatuto legal, que admite la renovación de la acción civil indemnizatoria, transcurrido el plazo de prescripción del artículo 2332 del Código Civil.  
Con esto se amplían las posibilidades de reparación de la víctima.

<p><b>Condiciones de la Renovación de la Acción Civil contra imputado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prescripción de la Acción Civil</li> <li>✓ La existencia de un proceso penal</li> <li>✓ La existencia de una formalización previa</li> <li>✓ Sólo por la víctima directa</li> </ul>	<p><b>Condiciones de la Renovación contra tercero civilmente responsable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sentencia condenatoria contra autor del daño</li> <li>✓ Acción civil sea deducida por la víctima por los hechos que fundan la condena penal</li> <li>✓ Plazo de 60 días desde que la sentencia condenatoria penal se encuentre ejecutoriada (procedimiento ordinario).</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Situaciones Especiales de Renovación:**  
Términos extraordinarios sin pronunciamiento del fondo (Abreviado, salida alternativa, suspensión o término)  
Háyase o no interpuesto demanda civil:

↓

60 días para acudir a sede civil (procedimiento sumario)

El proyecto además opta por excluir de la aplicación de este régimen de imprescriptibilidad al **imputado que es menor de edad** dado que atentaría contra la Convención de los Derechos del Niños hacer subsistir a perpetuidad la Responsabilidad Penal de un hecho cometido como adolescente y pierde sentido la aplicación de la pena, considerando el fin preventivo especial, máxime si han transcurridos varios años o décadas y no ha cometido más delitos.

Finalmente, contiene una **norma transitoria** que prescribe que para los hechos delictivos cometidos con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente el artículo 369 quáter del Código Penal, como una forma de solucionar eventuales problemas de interpretación que podrían surgir, evitando que pudiera pervivir el sistema anterior a la dictación de dicha disposición.

**1.- Exposición del señor James Hamilton.** El señor Hamilton expuso con el apoyo de una [presentación](#) en PowerPoint.

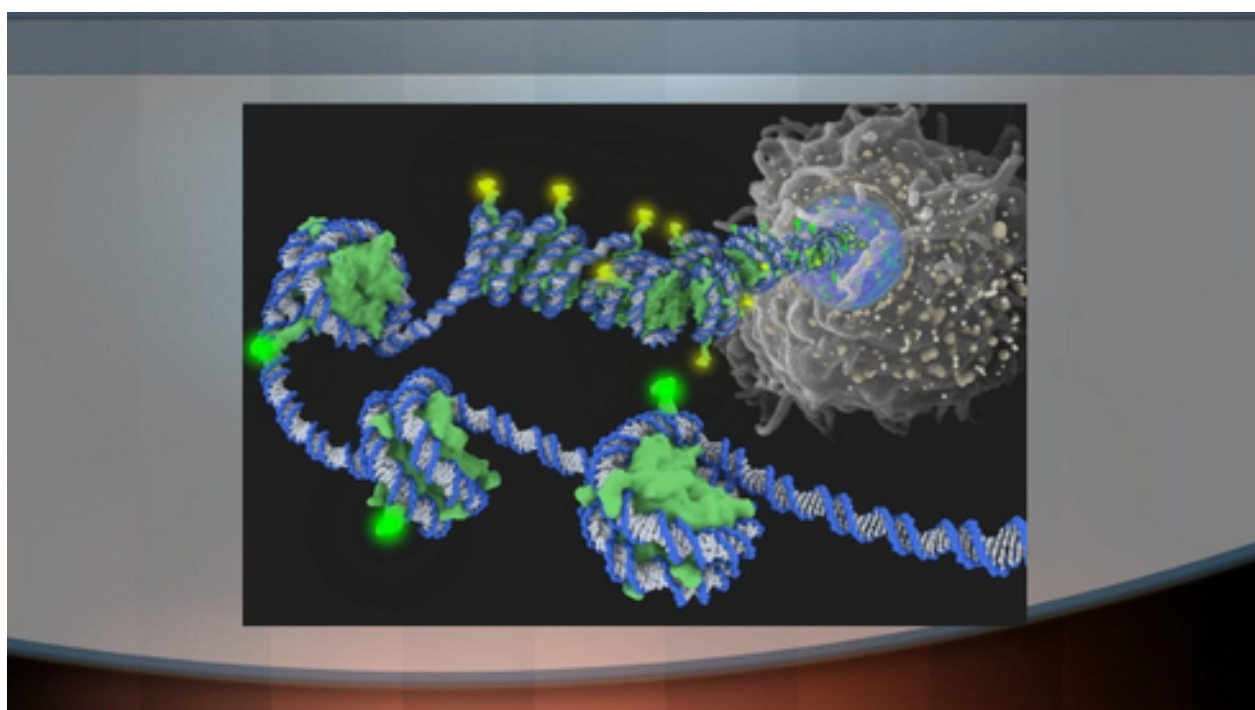
El señor **Hamilton** se refirió a la teoría del estrés tóxico.

Señaló que el objeto de su exposición era cambiar la visión de lo que ocurre a los seres humanos en situaciones que antiguamente se consideraban comunes y eran aceptadas, pero que han dado lugar a muchos de los problemas actuales, como la delincuencia, embarazo adolescente, salud, etcétera.

En concreto, lo que hoy se conoce sobre el peso del ambiente en la expectativa de vida de los seres humanos, la epigenética, la respuesta de alarma, muerte celular y atrofia cerebral, estrés postraumático tóxico, eventos adversos de infancia o ACE, y memoria y relato.

Respecto del **peso del ambiente en la expectativa de vida de las personas**, señaló que la expectativa de muerte depende en más del 70 % del ambiente (epigenética) y menos del 30 % de la genética original ancestral (doble hebra de DNA). Lo anterior se basa en un trabajo publicado en la revista "Science" el año pasado, una de las más importantes del mundo, de investigadores de Harvard con un muestreo de 13 millones de individuos y 5 generaciones.

Explicó que el "cerebro" de la célula no está en el núcleo sino que en la membrana celular que interactúa con todas las sustancias que pasan por el torrente sanguíneo durante toda la vida del ser humano, desde la embriogénesis. La membrana celular cuenta con receptores que son los elementos sensoriales de la célula, y al recibir cualquier información la membrana se conecta con el núcleo.



Con la presente lámina explicó que aquello enrollado es el ADN, y que lo verde se llama histonas, proteínas que hacen que el ADN se enrolle e interactúan con la membrana celular permitiendo desenrollar o no donde se encuentra la información, y puede ocurrir que no se pueda ejecutar esa acción, que no estén las proteínas que permitan desenrollar esa información, como que no estuviera disponible la información de una vacuna cuando es necesario que el cuerpo reaccione.

Así, en gemelos idénticos, dadas las distintas situaciones que han vivenciado, reaccionen diferente, que aparezcan rasgos epigenéticos, gemelos idénticos genéticamente, pero uno padece de cáncer o un síndrome metabólico y el otro no, tal como muestra la siguiente imagen.



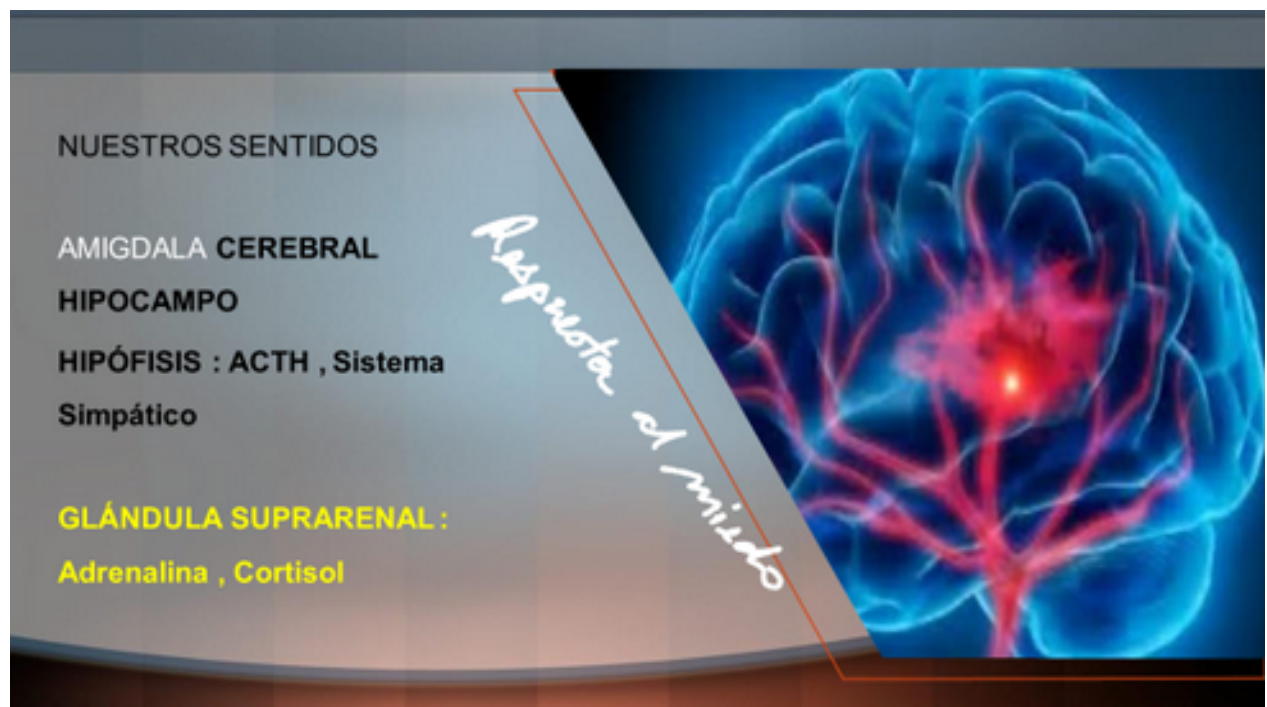
La imagen de la derecha muestra dos gemelas dadas en adopción, donde la que sufrió bullying, abuso, creció en un barrio pobre, y desarrolló síndrome metabólico. No es que eso la haya enfermado, sino que le quitaron la capacidad de resistir a éste.

Uno de los elementos más potentes de epigenética que existen, que hacen que el ADN se exprese o no se exprese, son dos sustancias que empiezan a correr en el cuerpo del embrión desde el principio, el cortisol y la adrenalina, así, si una mujer está embarazada y su pareja la golpea va a tener permanentes niveles de estas sustancias en el cuerpo, lo cual demuestra que ese niño o niña ya nace con un hándicap en contra y en condiciones adversas con más probabilidades de enfermedades. Lo mismo ocurriría si la mamá tuvo algún familiar con alguna enfermedad durante el embarazo o subió considerablemente de peso. Todo ello se llama transformaciones epigenéticas.

Por su parte, el mecanismo de la adrenalina es asimilable a tener que repetir constantemente una experiencia altamente estresante que puede o no ocurrir, como tener que pasar por un callejón sabiendo que el perro de una casa, que es muy bravo, pueda escapar. Eso activa la liberación de un volumen enorme de adrenalina y cortisol. Como reacción puntual es normal y esperable, y se acaba el estrés cuando acaba la situación, queda en "off". El problema se genera cuando hay que pasar permanentemente por esa situación, lo que en la infancia daña una zona llamada amígdala, que es la que inhibe la reacción, la que produce el "off", de modo que la reacción de alarma queda prendida en el niño, el cortisol y la adrenalina, lo que va generando un daño progresivo biológico por un proceso epigenético, que no es psicológico ni psiquiátrico, sino que físico, químico y orgánico que hizo que esas sustancias destruyeran parte de su cerebro. Mientras más pequeño es el niño, más dramática la situación. Se activa en el cerebro una muerte celular programada, se adelanta, y afecta áreas de regulación central.

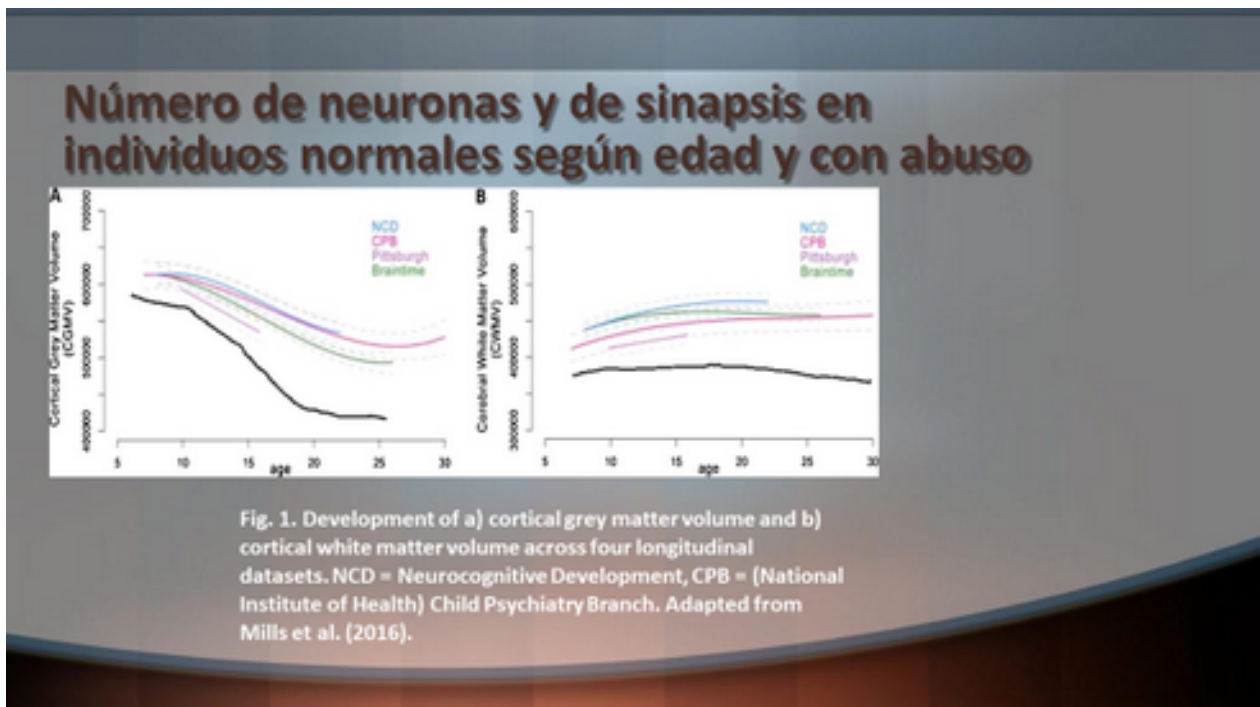
Este fenómeno se denomina estrés tóxico, porque no es el estrés postraumático de la guerra que es reversible, sino que genera daños irreversibles porque están los niños en desarrollo, ese niño no va a alcanzar nunca el real potencial que tenía. Se trata de un estado de alerta permanente que retroalimenta un sistema de estrés que tiene que aprender a ser inhibido.

Imagen de la amígdala que queda en “on” permanentemente, y desencadena efectos en el hipotálamo, en la glándula pituitaria, en la corteza prefrontal, etc.:



La materia gris crece hasta los 8 años y luego parte la “poda neuronal”, caen las neuronas y aumentan las interconexiones.

La siguiente imagen muestra a la izquierda la curva de la poda neuronal y a la derecha la del aumento de las interconexiones. En ambos casos la línea negra muestra cómo influye sustancialmente el abuso en ambas curvas. Independientemente que pueda haber resiliencia, los niños abusados quedan dañados de por vida, respecto de lo que pudieron haber sido. Es una amputación de sus capacidades reales. Esto tiene sustento bibliográfico abundante.



En niños y adolescentes se va dañando la **corteza prefrontal** que es la que regula todo, falta de regulación, disminución de planificación, inhibición de conductas de riesgo, disminución de coordinación. Todo eso se produce en casos de niños y preadolescentes sometidos a eventos adversos de infancia y a abuso, y eso explica que el 90% de los crímenes con violencia provienen de gente que salió del Sename.

Agregó que el mayor productor de violencia en el país es el Estado de Chile, y lo ha sido históricamente desprotegiendo a los niños, porque esos niños pierden su inhibición, se exponen al riesgo, se ponen violentos, se exponen a la droga y a la sexualidad.

Niños expuestos a esta situación, si no son identificados, tienen un hándicap en contra que aquellos que han crecido en condiciones adecuadas.

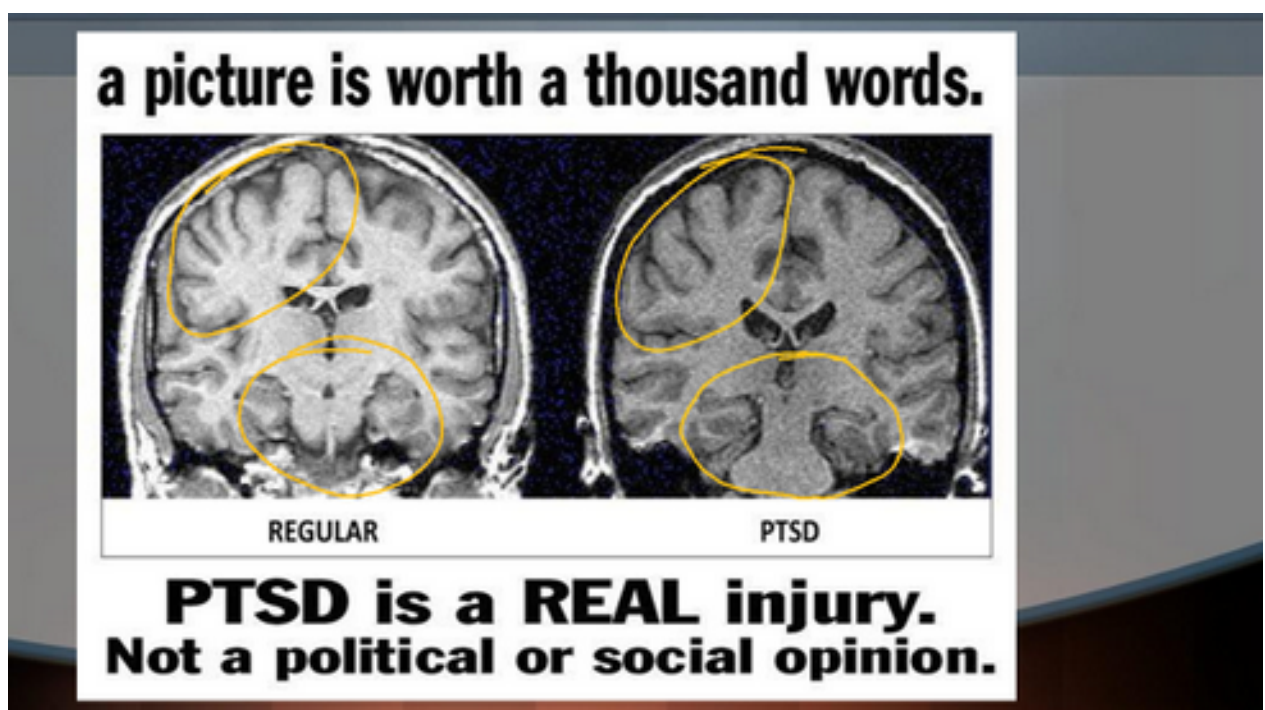
En cuanto al **hipocampo** explicó que tiene que ver con el tiempo y el espacio, se daña en la mente lo relativo a la ubicación témporo espacial de ellos mismos, así, cuando ocurre el evento traumático queda impreso en la memoria pero gracias a este mecanismo de defensa queda escindido de la corteza cerebral, que es la que hace que aparezca la memoria de manera inmediata, y es por ello que ocurre el fenómeno de los desencadenantes, porque para que la persona recuerde tiene que tener un evento que le haga reminiscencia, que le reconecte su corteza con su zona hipotalámica, momento en que comienzan los “flash back” y empiezan a recuperar la historia.

Estas áreas del cerebro dañadas, hipocampo y la memoria témporo espacial, la amígdala y el bloqueo de la respuesta de cese de la alarma, y la corteza prefrontal y la disminución de la planificación, inhibición de conductas de riesgo y disminución de coordinación, generan una incapacidad de evaluación de la realidad y de los roles, así

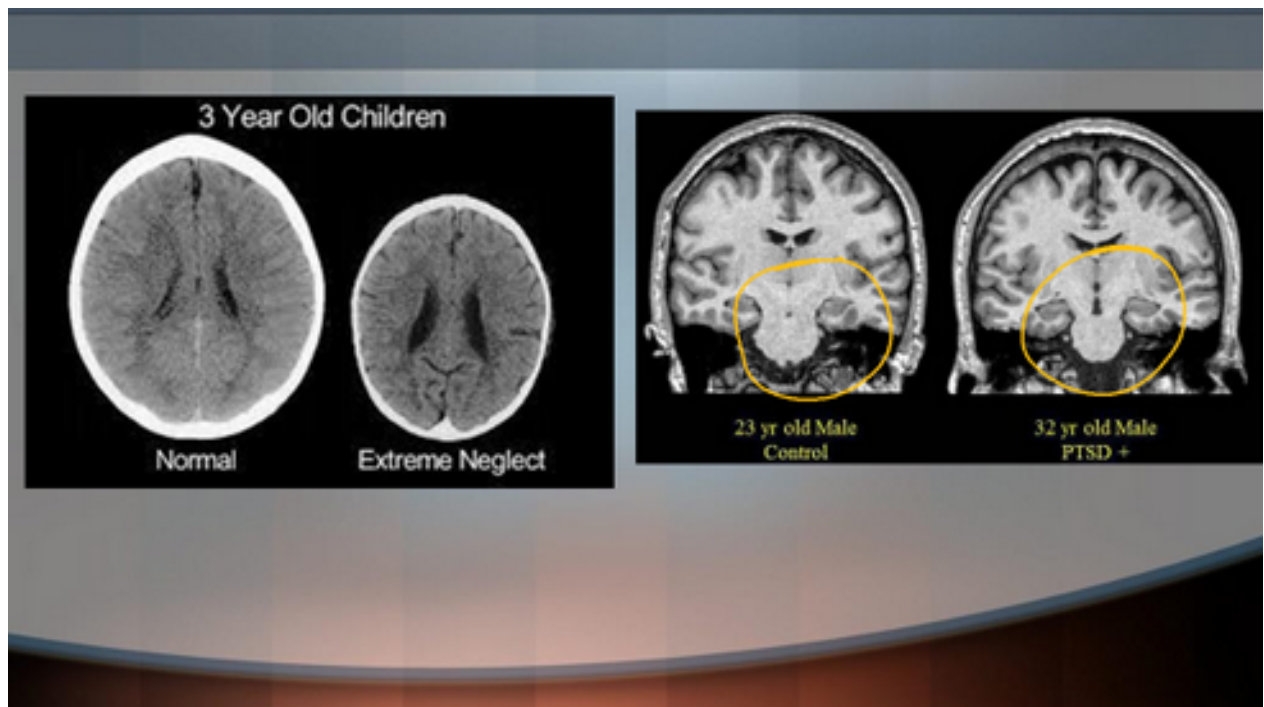
como confusión de si los hechos ocurrieron o están ocurriendo, imposibilidad de resistir o liberarse, el daño persiste y aumenta.

Hay investigaciones que demuestran las diferencias que existen entre niños que han sido estimulados adecuadamente y que mantienen su nivel socioeconómico en el tiempo que mantienen su nivel de CI, y los que no, los que están en pobreza bajan entre un 40 y 50% su capacidad cognitiva intelectual, y ello porque justo en la época de la poda neuronal empiezan a morir las neuronas producto de los niveles de cortisol y adrenalina.

Señaló que hay otro estudio norteamericano con más de 1.800 sujetos, cifra considerable, donde la mitad de ellos había sufrido estrés postraumático crónico en adultos. La imagen muestra las diferencias entre los cerebros de ambos grupos, donde el de la derecha muestra la caída del volumen cerebral.



Explicó que lo anterior en adultos es recuperable, pero en niños se aplica el concepto de **estrés tóxico** que no se puede recuperar porque se cruza con la poda neuronal normal de la adolescencia, nunca va a ser el mismo niño que debió haber sido, aun con intervención.



El Síndrome de Estrés Post Traumático es un deterioro medible en las habilidades cognitivas como la atención, aprendizaje, memoria prospectiva, planificación y capacidad de resolución de problemas, y daña los ejes neuroendocrino e inmunológico, inflamación crónica de todos los sistemas corporales. Son comunes los casos de hipotiroidismo en mujeres y asma en niños, porque el centro regulador neuroendocrino está en el cerebro, en la hipófisis que controla la tiroides, el crecimiento, la inmunidad y genera un estado inflamatorio permanente que genera a su vez muerte celular.

Por su parte, el **Estrés Tóxico** se define como un estado de estrés inflamatorio durante períodos del desarrollo del sujeto generando daño orgánico cerebral y sistémico irreversible y persistente. Justamente lo persistente es lo que lo diferencia, porque ataca no en la adultez sino en una etapa de desarrollo clave.

Los eventos adversos de infancia, ACE por sus siglas en inglés, dentro de los cuales está el abuso que representa como un 30 o 40% de ellos, tienen consecuencia para toda la vida porque afectan las fundaciones de la salud física y luego mental.

Hay un estudio del Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta, USA, que trató de buscar las causas de la obesidad, encuestando a 17.000 personas. La encuesta recaía sobre la incidencia de eventos adversos en la infancia de distintas categorías, psicológica, física, sexual, drogadicción o alcoholismo o enfermedades mentales o encarcelación de personas con las que vivían. El resultado fue sorprendente, en el 52% de los casos habían sufrido al menos un evento adverso de infancia, y un 16% 4 o más. Lo anterior se correlaciona de modo que mientras más ACE, se multiplican las enfermedades y los factores de riesgo.

Las personas con 4 o más ACE tienen una expectativa de vida menor en 20 años. Producto de estos estudios incluso hay países que han implementado políticas públicas de lucha contra los eventos adversos de infancia, como Escocia.

Los factores que acrecientan este daño dicen relación con la edad y la dependencia, porque generan confusión y disociación, encapsulamiento de la experiencia del abuso y perpetuación del daño, por eso es tóxico en el niño.

Cuando se trata de abuso es más dañino aun, porque por lo general el abusador está dentro de la casa y abusan día tras día, lo que en la soledad y la confusión constituye una tortura o aun peor, porque en el caso de tortura no es tan difícil entender que el otro es el que está mal, aquí la primera respuesta de la víctima es sentirse culpable, y así puede estar toda su vida.

Este daño no para, está la "bala en el cuerpo", está ocurriendo, y cuando es demasiado intenso, se hereda hasta por tres generaciones, queda en el espermio y en el óvulo.

#### **El abuso sexual infantil y adolescente:**

- Altera irremediablemente el cerebro mediante daño directo y mantiene memoria epigenética (se puede heredar).
- Altera la psique del individuo y altera su interpretación del tiempo y espacio.
- La memoria se mantiene, el relato y la interpretación mejora con el tiempo, con la intervención terapéutica y la resiliencia.
- El daño es permanente y progresivo pero tratable con intervención.
- Es un asesinato en evolución.
- Las pruebas se fortalecen con el tiempo.
- Las víctimas tienen derecho al tiempo pues su tiempo no depende de nosotros.
- Es una tortura permanente.

El daño que produce no se circunscribe al momento del acto, sigue, no solo en el individuo sino que también en la sociedad, en la familia que trata de armar, todo lo destruye.

La víctima, producto de la confusión y la disociación, se queda en la culpa, y para pasar de culpable a descubrirse víctima puede que no ocurra nunca, pero si ocurre, pueden pasar 33 años de promedio en Australia, y no tiene que ver con la capacidad de la víctima sino con el nivel de daño y las circunstancias. Para pasar de culpa a víctima es necesario que eso sea enseñado, que alguien lo ame, lo quiera, descubrirse como persona querible y no como desecho. Luego, el trabajo desde reconocerse víctima a ser sobreviviente, el trabajo es muy largo y arduo, psicoanálisis de varias veces por semana.

La víctima está imposibilitada medicamente, biológico y psiquiátricamente, de ejercer su derecho ante la ley. Este es un problema de la víctima y no de la ley o las teorías del Derecho.

Antes, durante o después de la ley no cambian las condiciones de la víctima, porque la víctima va a tener condiciones peores que el concepto pro reo, eso es inadmisibles, no hay concepto pro víctima, en circunstancias que está afectado su derecho a la vida (elevadísima tasa de suicidios), su integridad física y psíquica (daño cerebral y neuronal, endocrino y autoinmune).

Según la Convención de los Derechos del Niño el Estado es el responsable cuando ocurre maltrato proveniente de los padres, cuidadores legales o cualquier otra persona, el Estado es el responsable de toda la infancia en Chile, y no solo del Sename.

Por su parte, la Constitución dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y cabe preguntarse dónde están los derechos de las víctimas que están incapacitadas medicamente de ejercer su derecho de justicia, que es parte de su reparación, si no hay alguien que le diga que es verdad, que fue abusado, se bloquea el proceso de reparación y de salud.

Además la Constitución garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y nos detenemos en un artículo que se refiere a la pena, mientras tanto las víctimas están ahí. Esto está bloqueando una verdad gigantesca.

El abuso sexual infantil y adolescente es un crimen imprescriptible, de lesa humanidad, y su impunidad, falta de prevención y tratamiento corroe las raíces de nuestra sociedad y sólo gatilla su muerte programada.

Nadie puede quedar fuera ya que sería una enorme injusticia y contra la esencia de la Constitución.

**2.- Exposición de la señora Vinka Jackson.** La señora Jackson expuso con el apoyo de una [presentación](#) en PowerPoint.

La señora **Jackson** comentó que todos los argumentos jurídicos le resultan incomprensibles, es como considerar que una idea es más importante que un grupo de personas que pasaron por una experiencia horrible y no han podido tener reparación.

Exhibió un video para destacar la idea de que los niños ven desde un cierto lugar la realidad, desde donde es imposible decodificar o entenderse como víctimas de alguien que los cuida o comprender que en ello está envuelto un concepto como el de crimen, incluso se manifiestan a través de dibujos sin darse cuenta de lo que se trata.

Para lograr una ley como la que se pretende, con todos los desafíos que representa, necesita situarse desde este lugar.

Un cerebro dedicado a crecer, a aprender, a relacionarse, explorar, descubrir, adquirir conocimientos y herramientas para la vida.



ASI y trauma ASI: Un cerebro ocupado en sobrevivir, silenciar, en sortear o evitar (en lo posible) peligros, amenazas y daños, desviando energía psíquica, física, biológica, necesaria para su crecimiento y desarrollo saludable. Impacto masivo.



Cada día, más de 50 niños, niñas y adolescentes son abusados sexualmente en Chile.

Yinka Jackson, ps. U. de Chile NYU

El cerebro de un niño debe estar destinado a crecer, a aprender, a relacionarse, explorar, descubrir, adquirir conocimientos y herramientas para la vida.

El cerebro de un niño que sufre abuso sexual está ocupado en sobrevivir, silenciar, en sortear o evitar (en lo posible) peligros, amenazas y daños, desviando energía psíquica, física, biológica, necesaria para su crecimiento y desarrollo saludable. Impacto masivo.

Es tan dramático que hay niños que con tal de no estar a la expectativa del abuso que viene, lo buscan para poder disminuir la alerta y seguir en lo que corresponde, seguir siendo niño.

Desde las cifras, comentó que hay más de 50 denuncias diarias en Chile, y no hay que olvidar que la proporción de denuncias de delitos sexuales según PNUD en Latinoamérica es de un 9% aproximadamente, y en Chile es cercano al 2%, dentro de ese porcentaje, cerca de un 70% son delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

Comentó que siempre repite la misma frase, se necesita de todo un pueblo para criar a un niño, pero también para permitir ese abuso, porque el niño va al colegio, al pediatra, interactúa con sus vecinos, pero las señales no son vistas, todo malestar se debe atender, no solo las grandes señales.

Este tipo de delitos no pueden ser comprendidos por el niño en tanto crimen, no puede entenderse como víctima y no puede entender al perpetrador tampoco como victimario, pero no quiere decir que por esta incapacidad de hacer una develación, de contar una historia o hacer una denuncia no hay estado el cuerpo y el sistema de ese niño hablando desde pequeño, así, pese a que un niño pequeño no sabe lo que está pasando, pueden vivir la experiencia pero no la conocen, el cuerpo reclama frente al abuso sexual, aun cuando no entienda la irrupción de lo sexual adulto, el cuerpo sabe que no le toca vivirlo y por eso hay sintomatología que aparece aun cuando no sea clara.

Nunca el silencio es absoluto, y eso es bueno saberlo como víctima. Son muchos los casos de niños problemáticos en el colegio, o niñas muy autoexigentes académicamente, donde se observa detrás una situación de abuso.

Respecto de las limitaciones en la denuncia d abuso sexual, comentó que 1 de cada 7 niños va a develar o su abuso va a ser detectado de pequeño, 6 de cada 7 víctimas va a pasar a la adultez, y muchas no van a hablar nunca.

Es un fenómeno tremendamente complejo por la inmadurez, el impacto del trauma, el estrés toxico, ya demás, porque incluso en las mejores condiciones, la capacidad narrativa del ser humano demora 12 años en desarrollarse, y hasta los menores errores en el relato del niño pueden ser utilizados para desestimar su testimonio.

Hay una serie de factores externos que considerar, más allá de las características del niño, como por ejemplo la lealtad familiar que afecta al niño y hace que se retracte o silencia cuando observa que la consecuencia de lo que ha contado puede ser la cárcel para un ser querido, y ello sin necesidad de que esté intimidado, sino que por la sola complejidad del abuso o carreras de pregrado que no tratan este tema y hace que se falle en el diagnóstico.

Por eso es pulverizante a nivel neurológico, psíquico, ético, porque se mete en lo profundo de los afectos y el cuidado. Los niños necesitan cuidadores.

Cuando finalmente se dan las condiciones para que la víctima elabore su relato en un contexto seguro, que puede ser llevado a la justicia, se encuentra con el muro de la prescripción o con las dificultades presentes en el mismo sistema judicial con la prueba. Sin perjuicio que el argumento de la prueba no puede ser un argumento para no escuchar a las víctimas. Esto equivale a la impunidad de facto.

Esto excede lo legal y es muy importante, porque durante años se entendió la ´sicoterapia como algo que ocurría en una relación íntima y reducida, donde el reparar ciertos daños o heridas morales iba de la mano de solo una persona o de la víctima y de su familia, sin embargo se entiende hoy que en la reparación es muy importante el valor del colectivo, es decir, tiene que ocurrir con los otros, no basta contarle la historia al psicólogo. Si fuera del entorno de la terapia se escucha que los niños mienten o fantasean, que las mujeres son vengativas, que han pasado tantos años, resulta difícil que se produzca la reparación, en términos de saber que en el ligar que se vive este tema está tratando de dar con todas las respuestas que sean necesarias.

El abuso sexual infantil es un gran fracaso del cuidado como especie humana, y cuando por años nos negamos a hablarlo, es un fracaso colectivo del cuidado.

El proceso mismo de la discusión de esta ley aporta a la reparación del trauma. A una víctima que pasó por todo el proceso de develación y psicoterapia, el hecho de saber que no puede ir a la justicia, es un daño, aun cuando no quiera ir a la justicia.

Recordó que el esfuerzo por la retroactividad tomó muchos meses en el Senado y no se llegó a ninguna conclusión que no fuera descorazonadora, sin embargo, había

que pensar en que cada día que no se legislaba había más víctimas que iban quedando fuera de la imprescriptibilidad.

Hay tres áreas que no se pueden olvidar, como el apoyo en prevención, apoyo en salud de las víctimas por los altísimos costos de la terapia, y en el tema de la justicia es necesario el establecimiento de la verdad, de modo que si no se puede resolver en el corto plazo el tema de la retroactividad hay que ver opciones como por ejemplo la creación de comisiones donde estos temas se traten y se dé cabida a la voz de los sobrevivientes y se permita entender mejor como se da la el fenómeno del abuso sexual infantil.

Una vez finalizadas las exposiciones el diputado **Walker (Presidente)** invitó al señor Hamilton y a la señora Jackson a participar durante todo el debate de este proyecto, solicitó a los miembros de la Comisión que propusieran nuevos invitados y puso en **votación en general** el proyecto. Señaló que junto con fundamentar su voto los diputados podían hacer las consultas que estimaran pertinentes a los invitados.

El diputado **Alessandri** señaló que votaría a favor en general el proyecto de ley y agradeció a los invitados sus intervenciones. Señaló que la propuesta le parecía robusta y fuerte para los casos futuros, y que de las exposiciones le había impresionado conocer respecto de las modificaciones cerebrales que producen este tipo de situaciones.

El diputado **Boric** comentó que el efecto socio ambiental en la salud de los niños y de los seres humanos en general no es una novedad, el mismo Salvador Allende ya lo decía en su tesis doctoral en 1936 y es algo de lo que como sociedad no hemos sido capaces de hacernos cargo. Estos problemas tienen que ver con la sociedad que hemos construido y no pueden reducirse a aspectos individuales.

Agradeció el trabajo de los expositores que han hecho el esfuerzo de recorrer todo Chile con una vocación de justicia muy profunda.

El hecho de que existan cerca de 50 denuncias diarias permite tratar de imaginar cuanto sufrimiento se está acumulando en el tiempo en la sociedad, es inconmensurable.

Este proyecto es una dimensión de la solución al asunto, por lo que votará favorablemente la idea de legislar, pero no es la única. Es necesario que exista un plan nacional de prevención de abusos, pero en el país claramente la salud mental no es una prioridad.

Previó que es importante detenerse en la discusión particular pues se plantea un diagnóstico muy claro y una solución específica para ese diagnóstico, pero hay una discusión legítima y específica respecto del carácter moral de la facultad punitiva del Estado y cuál es la función que le atribuimos a la pena. Probablemente ahí no habrá coincidencia, pero es importante preguntarse sobre ello para la densidad del proyecto.

El diputado **Cruz-Coke** agradeció a los expositores por la claridad de sus planteamientos y anunció que votaría a favor pues están muy comprometido con este proyecto pues si hay algo aberrante respecto de la infancia es pensar en delitos sexuales con las consecuencias que producen, mutilación de vida, de sueños de esperanza.

Parte de la conversación va a versar, al igual que en el Senado, sobre la retroactividad y la imprescriptibilidad, instó a que el debate enriquezca el proyecto y que se disminuya al máximo este tipo de delitos.

El diputado **Ilabaca** agradeció las exposiciones de los invitados y señaló que si hay una deuda que Chile tiene con muchas personas es la que dice relación con los delitos de carácter sexual cometidos contra niños. Señaló que votaba a favor en general.

La diputada **Olivera** agradeció la exposición de los invitados y comentó que a raíz de una experiencia personal está muy agradecida de que este tema se esté votando porque durante muchos años se ha escuchado que no se puede avanzar, que los casos están prescritos, que no hay forma, y cada vez que se recibe ese tipo de respuestas es un golpe muy fuerte. Le emociona ver que personas como los invitados han dado una gran lucha por muchas víctimas que han pasado por estas situaciones. Esto se puede superar pero no olvidar, y leyes como estas dan más fuerza a los sobrevivientes para seguir superándose. Es una lucha que hay que dar por los miles de niños que fuimos abusados y violados.

El diputado **Fuenzalida** agradeció a los invitados sus exposiciones y adelantó que votaría a favor en general el proyecto.

El trabajo de los expositores ha motivado a muchas personas a denunciar, produce un efecto multiplicador en la sociedad civil.

La ley va a ayudar a que esto no quede en la impunidad, la justicia tiene un rol de reparación, trae cierta paz, pero es fundamental el rol de la sociedad civil en que las personas se atrevan a denunciar.

El diputado **Gutiérrez** precisó que la ley contempla el olvido del hecho punible por el paso del tiempo, y ello es una forma que tiene el Estado de renunciar al ejercicio de la acción penal de la pena, son las casuales de extinción de responsabilidad penal.

Uno se pregunta si en este tipo de ilícitos tiene que operar esta renunciabilidad del Estado, y esa es la pregunta que hay que intentar responder.

Comentó que este tema le recordaba la lucha que han dado las agrupaciones de víctimas de delitos de lesa humanidad porque el presidente Frei mandó un proyecto de ley en 1994 intentando que no prescribiera la acción penal en esos casos, aprobando una Convención Internacional. Enfatizó la necesidad de coherencia en este caso, pues la derecha se ha negado a votar a favor de que esos delitos sean imprescriptibles.

Se manifestó a favor de la idea de legislar, pero instó a detenerse en la figura del victimario, que muchas veces ha sido víctima del Sename.

El diputado **Hirsch** señaló que el proyecto trata de crímenes terribles, como lo son también los de lesa humanidad, con víctimas menores, que han sido incapaces de denunciar por diversos motivos.

Si bien este proyecto busca hacer justicia, jamás se va a lograr reparar el daño causado completamente.

Tiene dudas respecto de cómo se puede lograr eficacia jurídica luego de transcurrido tanto tiempo, 30 años en algunos casos, y si eso no puede generar una expectativa que luego se vuelva en contra de la misma víctima por la imposibilidad de probar los hechos después de tanto tiempo.

Preguntó cómo evitar que el catálogo de la imprescriptibilidad no se habrá para otros delitos una vez que ha sido abierto. Comentó que para evitar ello se puede tener presente la experiencia alemana, donde se incorporó este tipo de delitos como delito de lesa humanidad.

Instó a estudiar cuál puede ser el mejor camino, porque si bien el daño, tal como se ha señalado en las exposiciones, es real, el mismo se produce en otros casos, como un niño que vio torturar a sus padres, o un adulto que vio fusilar a su pareja. No se trata de equiparar cosas, pero hay situaciones como los delitos de lesa humanidad, en que es válido preguntarse cómo esos delitos van a prescribir y no los del proyecto.

Adelantó que votaba a favor, pero que hay un tema de fondo no resuelto, que es cómo se protege a los niños como sociedad, como se evita esto, frente a una sociedad que dado el número de casos, en el fondo valida estas situaciones. Es una sociedad violenta, en la cual el victimario es víctima también de todo un sistema. Es necesario lograr un cambio más de fondo, como se puede avanzar hacia reducir estos casos.

El diputado **Saffirio** precisó que desde el comienzo de la discusión de esta ley, hace años, recordó que empezando su carrera de derecho el profesor Máximo Pacheco lo instaba a abandonar el derecho cuando se enfrentaran a un dilema ético entre el derecho y la justicia. Si se asume que las instituciones del derecho no son capaces de adecuarse a una realidad, que es distinta de la época en que fue concebida, se transforma la norma en un dogma. No se puede ser esclavo de un dogma si eso implica abandonar la necesidad de hacer justicia.

Votó a favor la idea de legislar y pidió celeridad en la tramitación del proyecto porque el tiempo corre a favor de los pedófilos, abusadores y violadores, cada día que pasa hay 50 casos más que no gozarán de imprescriptibilidad.

El diputado **Soto, don Leonardo**, recordó que el proyecto lleva 9 años en el Congreso, pero que la Cámara de Diputados suele ser más permeable a estos proyectos.

Este proyecto habla de ciertos delitos que tienen que tener un tratamiento especial, no se agotan con el tiempo, tienen un efecto moral que no se acaba nunca, por lo que es lógico que tampoco se acabe su persecución. Votó a favor del proyecto, es una forma de hacerse cargo de una realidad que nadie veía hace años.

El diputado **Walker (Presidente)** recordó que hace justo un año pidieron al Ministro de Justicia, junto a la señora Jackson y el señor Hamilton, que se incluyera este proyecto dentro de las prioridades del Ejecutivo, y que patrocinaran la indicación que planteaba la imprescriptibilidad total y no solo el aumento del plazo de prescripción. La decisión del Ejecutivo fue muy importante.

Los fundamentos del derecho al tiempo han sido muy bien expuestos por los expositores, pero hay temas que hay que ir dilucidando durante la discusión particular,

como si la irretroactividad alcanza o no a la investigación, si la renovación de la acción civil requiere necesariamente la formalización de la investigación.

### **VOTACIÓN EN GENERAL**

Sometido a votación **en general** el proyecto de ley fue **aprobado** por unanimidad. (11-0-0)

Votaron **a favor** las señoras y señores diputados Matías Walker (Presidente), Jorge Alessandri, Gabriel Boric, Luciano Cruz-Coke, Marcos Illabaca en reemplazo del diputado Diaz, Erika Olivera en reemplazo de Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Tomas Hirsch, Rene Saffirio y Leonardo Soto.

### **Sesión N° 96 de 24 de abril de 2019.**

La Comisión recibió las siguientes exposiciones:

#### **1.- Señora María Luisa Montenegro, Defensora de la Niñez subrogante.**

La señora **Montenegro** explicó que sin perjuicio de su intervención dejaría [por escrito](#) la posición de la Defensoría de la Niñez respecto del proyecto.

Precisó que el objetivo de la presentación era hacer observaciones al proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores.

Como Defensoría de la Niñez celebran la rapidez que ha cobrado la tramitación del proyecto, se trata de un proyecto respecto del cual nadie puede estar en contra, cumple con todos los estándares internacionales y con las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes en este momento.

Precisó que el proyecto tiene tres ámbitos distintos: la imprescriptibilidad de la acción penal, la renovación de la acción civil reparatoria y una norma específica respecto de los niños infractores de ley o responsabilidad penal adolescente.

Se trata de un proyecto muy importante para los niños, niñas y adolescentes por cuanto son un grupo vulnerable que por su estado de desarrollo necesitan de una protección especial, que gozan de ciertos derechos que son particularmente específicos y que derivan de su propia condición.

Destacó que en este caso además se trata de una doble vulnerabilidad porque se trata de niños y de niños afectados en la esfera su sexualidad, niños, y además son víctimas.

En relación a la protección especial que requieren los niños el proyecto se basa en la falta de herramientas que tienen los niños para el acceso a la justicia.

Este tratamiento que tienen que tener los niños por su condición vulnerable siempre se traduce en que todo lo que se hace como sociedad en relación a los niños

tiene que tener en consideración su interés superior, que contempla tres ámbitos: derecho sustantivo, principio jurídico interpretativo fundamental y norma de procedimiento.

Como derecho sustantivo se busca que el interés superior sea considerado como primordial para los niños y que se puede aplicar directamente a ellos.

Como principio jurídico interpretativo fundamental quiere decir que si hay una norma que pueda tener dos o más interpretaciones siempre se tiene que elegir la que vaya con el mejor interés superior del niño.

Como norma de procedimiento implica que cada vez que se toma una decisión administrativa, judicial o de cualquier ámbito tiene que justificarse por qué se tomó esa decisión y cuáles son las repercusiones que tiene sobre un niño.

Respecto del proyecto, y en cuanto a la **imprescriptibilidad de la acción penal** en concreto, celebran el proyecto porque la prescripción de los delitos sexuales respecto de niños, niñas y adolescentes es un tema grave porque los niños, niñas y adolescentes tienen problemas de acceso a la justicia, además en el ámbito de los delitos sexuales los mismos adultos tienen dificultades para denunciarlos, con más razón un niño, considerando que más del 80% de los delitos sexuales están cometidos por personas que los niños conocen y esto puede implicar que los niños no se atrevan a denunciar o tengan presiones para no denunciar, no es raro que un niño denuncie años después de que ocurrió el hecho, o incluso cuando es adulto.

Por ello el Comité de los Derechos del Niño señala en las observaciones al Estado de Chile del 30 de octubre del 2015 que se debe promulgar una legislación que penalice los delitos sexuales, entre ellos la explotación sexual, cometidos contra niños que especifique que esos delitos no prescriben, es decir, que la acción penal no prescribe. El mismo Comité señala que hay que reforzar y ampliar masivamente las medidas destinadas a acabar con la violencia para ponerle fin de manera efectiva esas prácticas que dificultan el desarrollo a los niños. El hecho de no poder denunciar y de no poder ejercer los derechos también es una forma de violencia.

Recordó que las encuestas de polivictimización del año 2017 señalan que más del 26% de los niños dice haber sido víctima de agresión sexual y el 17% señala que fue dentro del último año. En el Senado, con ocasión de este proyecto, se dijo que uno de cada seis abusos son denunciados.

En cuanto a la **renovación de la acción civil** señaló que de lo que se observa en el proyecto está pensado como una reparación monetaria, lo que se valora en cuanto se establece un proceso restitutorio de derechos efectivos de los niños, es decir, que ellos puedan verse recuperados en esos derechos pero esa protección no es solamente una protección civil o monetaria. La protección a qué se refieren todos los ámbitos internacionales y nacionales es que se debe propender a una protección integral, lo que implica que al niño se le proteja, que cuando tenga una vulneración de sus derechos sea escuchado y se le restituya su derecho pero, además, que se le pueda proteger de una manera completa, es decir, con rehabilitación y puede ser también una medida monetaria o no. El proyecto requiere ciertas precisiones en este punto para resguardar los derechos de los niños.

En cuanto a la **responsabilidad para la adolescente** la Defensoría de la Niñez estima adecuado el proyecto de ley pues se trata de imputados que también en este caso son niños y la justicia penal adolescente es una justicia especial que se rige también por las normas de las necesidades de las personas que la reciben que también son niños, niñas y adolescentes. La responsabilidad penal adolescente no es solamente castigadora sino que también tiene que ser promotora, defensora y protectora de los niños, niñas y adolescentes.

Las **recomendaciones** de la Defensoría son las siguientes:

**1.-** Se valora la imprescriptibilidad de los delitos sexuales pero recomienda incorporar todos los delitos de índole sexual. Hay dos tipos penales que quedaron fuera, la violación con homicidio del artículo 372 bis, y la comercialización y exhibición de material pornográfico infantil del artículo 374 bis.

Respecto de la violación con homicidio se ha dicho que la investigación del delito puede ser evidente, pero ello no ocurriría si se descubre el cuerpo de un niño que fue víctima de ese delito más de 10 años después de su perpetración o si se trata de una comisión imperfecta, por cuanto en el último de los casos la doctrina no está conteste respecto de si es posible que se cometa en grado de frustración o tentativa quedando la decisión en manos del tribunal. En caso de que el homicidio quede frustrado parte de la doctrina estima que se debe perseguir separadamente, por una parte la violación consumada y por otra el homicidio frustrado. Si el tribunal dice que se trata de violación con homicidio quedaría fuera de la imprescriptibilidad cuando es peor que los dos delitos por separado.

En cuanto a la comercialización y exhibición de material pornográfico infantil se ha argumentado que no subyace el fenómeno victimológico que fundamenta el tratamiento especial, sin embargo ello no se condice con la protección integral de niños, niñas y adolescentes, donde también se ha infringido su esfera de resguardo en el ámbito de su sexualidad.

Señaló que la imprescriptibilidad va a generar tres estatutos distintos para un juez, el estatuto de los adultos, un estatuto con esta norma pero aplicable hacia futuro y el estatuto de esta norma aplicable hacia el pasado, pero no es la primera vez que esto va a ocurrir, ocurre cada vez que hay una reforma y no constituye un escollo para poder aplicar la imprescriptibilidad.

**2.-** La Defensoría recomienda cumplir con los tratados internacionales que Chile ha suscrito, en particular, la Convención de los Derechos del Niño que establece un estándar mínimo de protección para los niños y contempla su no discriminación y el derecho a ser oído, derecho que también implica que pueden ser oídos después, es decir, una efectivización de los derechos de los niños. Ello supone adecuar el ordenamiento jurídico poniendo en práctica las recomendaciones de los órganos internacionales.

**3.-** Recalcan que la obligación del Estado no sólo se limita a resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes sino que debe existir una protección integral a los mismos, ya que son sujetos de derechos y que esa protección debe abarcar un resguardo de sus derechos, pero también la restitución de los mismos y su reparación.

## **2.- Señor Helmut Kramer, vocero de la Red de Sobrevivientes Abuso Eclesiástico Chile.**

El señor **Kramer** expuso utilizando una [presentación](#) en PowerPoint y explicó que era miembro y vocero de la **Red de Sobrevivientes Abuso Eclesiástico**, red formada hace casi un año, dentro de cuyos objetivos se encuentra el lograr incidir en las políticas nacionales que tienen que ver con la prevención y combate del abuso sexual tomando medidas legislativas que apunten al término de éste.

Explicó que si bien esta invitación ha sido personal, su denuncia de abuso sexual constituye un crimen que se va repitiendo en cientos de hombres y mujeres que en su momento, siendo niños, niñas y adolescentes, sufrieron en esos lugares donde sus madres y padres los entregaron en confianza a colegios, iglesias, parroquias o ámbitos eclesiológicos.

Fueron abusados bajo el manto de la confianza no solo familiar sino también de la confianza que la sociedad puso en personas que terminaron siendo delincuentes sexuales, también padeciendo el encubrimiento sistemático de parte de la iglesia católica que durante décadas, al proteger a estos delincuentes cambiándolos una y otra vez de ciudades y de países, escondiéndolos de la justicia e incluso disfrazando esa impunidad bajo la apariencia de un castigo con la mal llamada justicia canónica.

La razón de exponer hoy esta realidad es porque no se entiende aún como un estado extranjero puede sentirse con la más absoluta libertad de poner el cuidado de nuestros niños, niñas y jóvenes en manos de abusadores y ante la más mínima denuncia cambiarlos de ciudad o simplemente sacarlos del país.

Como si ya no alcanzara que por efecto de estos mismos abusos y el entorno encubridor que los rodea se demoren hasta décadas en poder verbalizar el abuso sino que más encima una institución internacional, un estado extranjero, los esconde y ampara, y frente a esta realidad después les preguntan por qué se demoraron tanto en denunciar como si no tuvieran la sensación de estar luchando contra un enorme monstruo que sobrepasa y se burla de toda forma de legalidad en nuestro país.

Agregó que se han transformado en esclavos del silencio y el secreto de un abuso constante, sistemático, agresivo, castrador, que ha buscado denigrarlos, cosificarlos, elevando a los abusadores a sitios de un poder morboso, inmoral e ilegal.

Si el tiempo pasa ¿este delito aberrante acaso deja de ser inmoral, ilegal o deja de ser abuso sexual?

Después de todo lo que han vivido deberían estar siendo cuidados y atendidos por organismos del Estado en el camino de sanación pero con dolor se dan cuenta que las pesadillas de sus abusos se cruzan con un horror del presente, niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables en peligro actual, y es por eso es que reaccionan.

La sociedad va comprendiendo que el abuso eclesiológico no es un tema entre el abusador y la persona abusada, tampoco es un problema privado entre el denunciante

y la iglesia católica, sino que es una violación flagrante de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y adultos que deja secuelas que los han marcado de por vida. Lamentablemente este proceso de comprender y luego pasar a la acción parece excesivamente lento cuando de lo que aquí se trata es de infancias vulneradas.

El día 6 de abril expusieron esta situación en el Museo de la memoria y los derechos humanos entendiendo que más que un abuso sexual en sí ha sido una violación reiterada, sistemática, a través del tiempo, a los derechos humanos de cientos y cientos de chilenos, causando daños reiterados a una importante cantidad de personas de por vida, con secuelas que perduran más allá del momento mismo del abuso y con protección del Estado Vaticano. Presentaron allí lo que consideraron un regalo de su agrupación a la sociedad chilena, el primer mapa de abusadores en contexto eclesiástico de Chile con 260 casos aproximadamente, al que hay que incluir casos nuevos llegados posteriormente. Posicionándose en los puntos del mapa se parecían las fechas aproximadas de los abusos, las fechas en que por fin el denunciante sobreviviente logra empezar a verbalizar y las fechas de las primeras denuncias, ya sea ante la justicia canónica o ante la justicia chilena, como una forma de ir entendiendo y graficando el tiempo de demora de un sobreviviente en poder verbalizar y entender la situación que le ha tocado vivir.

Instó a contrastar las fechas de los abusos y las fechas de las denuncias, lo que permite apreciar claramente que por décadas callaron sus abusos y saben demasiado bien todo lo que se demora en salir del dolor, humillación, inclusive de la culpa absurda de haber sido abusados y recién ahí poder hablar.

Piden transformaciones profundas para acabar con el abuso en nuestra sociedad, este nunca más se logra con procesos educativos que sean encaminados a mejorar las relaciones interpersonales, que se acentúen en crear lazos basados en el amor, el respeto a la diversidad, respeto a todo ser humano y en relaciones no violentas, horizontales y profundamente solidarias que dejen atrás toda relación vertical y de poder entre los seres humanos ya que estas son las bases del abuso sexual.

La ciencia y el derecho comparado traen hasta nosotros el claro reconocimiento de la complejidad y particularidades de las secuelas de estos delitos en las víctimas, que se debe reconocer al sobreviviente en este sentido. Bajo dicha lógica se preguntan cómo puede ser posible que cuando pueden expresar en palabras lo que sufren el abusador se esconda detrás de un manto de encubrimiento legal que es la prescripción al delito sexual y solo basta que se diga que pasaron tantos años para que lo que sufrieron pierda absoluta validez ante la ley chilena, o acaso su palabra vale tanto que su relato debe ser silenciado una vez más, pasando a ser el Estado un cómplice de esta aberración.

Preguntan qué pasa cuando un proyecto de ley que se basa en el respeto a los miles de chilenos que han sufrido abuso sexual, violación a sus derechos más íntimos cuando se confronta con un sistema legal que en sus bases ampara la protección a delinquentes sexuales y termina desnudando ante la sociedad esta realidad. ¿Acaso es el proyecto de ley el que está mal cuando éste se basa en continuos estudios que existen sobre el peso que carga sobre su memoria un niño, una niña o un adolescente abusado

durante su vida? La respuesta a estas interrogantes debe ser la materialización de este proyecto en una ley de la República.

Y si llegamos a ser capaces de entender esto que para nosotros es básico, como una forma de luchar contra el abuso sexual a menores, mirando hacia el futuro, asumiendo que será válido desde el momento en que se apruebe esta ley y que por lo tanto solo será palpable en la sociedad años o a lo mejor décadas después de haber sido aprobada, ¿qué diferencia con los que fuimos abusados antes de que este proyecto sea ley, el poder demostrar el abuso?

Si en este momento solo basta que el abusador diga que el crimen está prescrito, en el caso contrario, ¿no basta nuestro relato, no basta nuestra realidad, no bastan los cuerpos abusados?, pero nos dicen: si es así, tendrían que ser juzgados bajos leyes antiguas, algunas que han perdido vigencia.

Nosotros y nosotras hemos desnudado esta realidad, hemos paseado una y mil veces por la prensa revictimizándonos, solo con la firme convicción de abrir conciencias. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, con todo lo duro que ha sido en nuestras vidas y las de nuestras familias. Hoy son ustedes los que deben dar el paso y como representantes de nuestra sociedad buscar las formas para destrabar toda esta situación, poniendo como única preocupación central al ser humano.

Nuestro derecho al tiempo, al momento congelado en que nuestros cuerpos son abusados, nuestro derecho a detener ese momento, es nuestro derecho a bloquearlo muchas veces porque nuestra conciencia no desea vernos sufrir. Nuestro derecho al tiempo es recordar en silencio por los años que sea necesario, en noches de pesadillas perturbadas y sudorosas, sus manos rasposas, sus manos asquerosas y lentamente ir las sacando de cada uno.

Nuestro derecho al tiempo, es el derecho a reconocer mi limpieza, mi no culpabilidad. Es el tiempo necesario para intentar comprender, entender, lo que no busqué, lo que no elegí. Entender que mi cuerpo rechazó, gritó en silencio, que mis ojos en ese momento te dijeron detente y tú, asqueroso abusador, no escuchaste. Nuestro derecho al tiempo, es el que necesitamos para poder empezar a hablar, lentamente, poco a poco, uno a uno, primero a esa persona que me acompaña, luego a otro, a la familia, amigos, amigas, parejas.

Nuestro Derecho al tiempo es el derecho que tenemos de esperar ese momento donde podemos decir: ¡necesito ayuda, ya no quiero ni puedo guardar esto dentro mío! Nuestro Derecho al tiempo, es el derecho que tengo, que tenemos, para poder reconocer que fuimos abusados, que sobrevivimos a un abusador. Es el tiempo que necesitamos para ponernos de pie y dejar de callar, y poder gritar, denunciar, acusar, buscar la justicia.

Necesitamos ese tiempo, que nos permita reconciliarnos con ese momento impuesto con fuerza. Necesitamos ese tiempo de comprensión y sanación interna. Y si ese tiempo demora años, entonces la justicia debe esperar esos años necesarios para poder tomar al agresor y juzgarlo.

Hoy necesitamos en Chile la aprobación de la ley que pone fin a la prescripción a los delitos de abuso sexual. Lo primero es el ser humano, valor central de una nueva cultura.

### **3.- Leonardo Estradé-Brancoli.**

El señor **Estradé-Brancoli** señaló que era necesario destacar que el abogado Hernan Fernández hace más de 20 años planteó este tema y que era necesario hacerle un reconocimiento.

Explicó que la motivación de haber solicitado esta audiencia es analizar ciertos aspectos constitucionales que se relacionan con estas materias que permiten inferir el porqué de la constitucionalidad de la imprescriptibilidad.

Señaló que era necesario no solo ir al texto positivo sino que a su fuente, a la Comisión constituyente porque en la nonagésima sesión Enrique Ortúzar planteó que cuando se comete un delito debe ser juzgado por la ley de cuando se cometió el delito, y Jaime Guzman reafirmó aquello. En definitiva fue eso lo que se aprobó, ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, salvo que la nueva ley favorezca al afectado.

Precisó que ello es así en cuanto a la pena en sí misma, lo que es una cuestión sustantiva.

En la misma centésima sesión Enrique Ortúzar se refiere la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y en relación al castigo de sus infracciones, es decir, la pena y los principios de aplicar. Jorge Ovalle dice que le parece correcto pero hablar de sus derechos porque hay un sentido de mayor personificación de este derecho. Ortúzar estuvo de acuerdo, precisando que hay acuerdo en lo fundamental, esto es, ningún derecho establecido en la Constitución o en la ley quedará sin protección judicial, y agrega que prefiere hablar de la violación de un derecho consagrado por la Constitución y que exige el amparo de los tribunales.

En la centésima tercera sesión Enrique Ortúzar plantea la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, que en definitiva es lo que se aprobó.

Señaló que se referiría a aspectos procesales como mención meramente ejemplar, y que en definitiva se acordó que se debe juzgar por el tribunal existente a la fecha de la comisión del hecho, que no puede haber comisiones especiales, que el hechor de un delito tiene derecho a la defensa, y que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa pública gratuito a efecto de ejercer la acción penal reconocida por la Constitución y las leyes. Observó que en esta última parte encontrábamos el principio in dubio pro víctima.

En la sesión octogésima séptima Enrique Evans se refiere al derecho a la vida y la integridad física, que están estrechamente vinculados, a lo que Enrique Ortúzar

sugiere agrega la integridad moral que a veces puede ser peor por los efectos que pueda tener que el de la integridad física. En definitiva, el texto positivo se refiere al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona.

Después de todos lo relatado por Vinka Jackson, James Hamilton y Helmut Kramer, no es necesario probar porqué las víctimas se demoran tanto en denunciar, de ahí el origen de la imprescriptibilidad y por qué es necesario establecer un plazo mayor aun respecto de delitos aparentemente más graves como el del homicidio y toda la gama de las lesiones.

Lo anterior porque en el caso del homicidio y toda la gama de las lesiones existe la conciencia de haber un hechor y una víctima, y como aquí se ha explicado latamente, al menos en los delitos sexuales contra menores, no necesariamente hay una conciencia respecto al menor, y cuando la adquiere el transcurso del tiempo ha sido demasiado prolongado, mucho más del plazo que le da la ley de prescripción aún con la última reforma que empieza a contarse desde los 18 años.

Existen los principios de protección y de igualdad, y para que puedan ser resguardados se requiere de un plazo mayor por todo lo que ya se ha dicho no sólo aquí sino que también en los medios de comunicación. Ese sería el fundamento jurídico de la constitucionalidad de este proyecto.

La prescripción es el transcurso del tiempo para dar certeza jurídica, y aunque podría haber un implícito perdón del ofendido, para que ello ocurra tiene que establecerse una conciencia de quién es sujeto activo y quién es sujeto pasivo y eso es lo que en delitos tales como la violación o el abuso sexual no existe, al menos respecto de menores y no porque pasa a ser mayor de edad se tendrá que dar.

Esta distinción es la clave en la búsqueda de lo que permite resguardar adecuadamente la integridad psíquica, pero si esta imprescriptibilidad rige de aquí para adelante se va a vulnerar el principio de protección y de igualdad porque no va a haber igualdad en relación a los hechos cometidos con anterioridad a la vigencia de la ley, entonces, para que haya una efectiva igualdad es factible y no sería inconstitucional plantear la imprescriptibilidad retroactivamente o, por lo menos, extender aún más el plazo vigente en la actualidad.

Estamos en el campo del legislador y la Constitución no impide que se pueda establecer efecto refractivo puesto que se trata de aspectos procesales, existe una suerte de *in dubio pro víctima*, y relacionando los principios de la integridad psíquica con el de la igualdad y la protección va mucho más acorde la imprescriptibilidad también con efecto retroactivo, o por lo menos una extensión mayor de la existente en la actualidad respecto del plazo de prescripción si éste se quisiera mantener.

#### **4.- Señor Enrique Aldunate.**

El señor **Aldunate** adelantó que su posición es contraria a una regla de imprescriptibilidad para esta clase de delitos porque nuestro sistema penal está estructurado sobre la base una regla general que es la de la prescripción de toda clase

de delitos y bajo esa regla tenemos plazos diferenciados, todo ello por razones de seguridad jurídica, como instituto que se ha establecido a lo largo de los códigos que han tenido una tradición continental y de los cuales el código chileno es tributario.

Se puede observar que si la regla general es la prescripción, no se puede desatender un conjunto de cuestiones vinculadas a este problema, tales como la discusión acerca de la naturaleza de prescripción, esto es, si tiene una naturaleza procesal o sustantiva.

Bajo esa perspectiva incluso en sistemas que tienen por regla general el sistema de prescripción se han planteado respecto de las limitaciones al ejercicio de acción penal como, por ejemplo, el caso de la criminalidad del Estado a partir de la segunda guerra mundial, en particular la discusión que se dio en Alemania el año 1965 cuando vencían los términos de la prescripción conforme al código penal alemán, de modo que todos los crímenes cometidos bajo el imperio del nazismo quedaban prescritos. Allí se discutió la naturaleza de la prescripción y se optó por una naturaleza procesal, es decir, no tiene una índole sustantiva por lo tanto la prohibición de aplicación retroactiva no le significaba impedimento alguno.

Como contrapartida, la posición mayoritaria de la doctrina se inclina por una posición sustantiva, es decir, la prescripción está dotada del alcance que tiene el principio de legalidad materialmente y como la referencia a la pena y a la legalidad de la pena impuesta atañe, por la magnitud de la pena que va asociada al delito, al de la prescripción, no podría aplicarse *ex post facto*, es decir, después del hecho, una regla que vaya en perjuicio o desfavorable al imputado.

Lo relevante es que hemos sacado a colación para discutir o revisar un principio de antigua data en los modelos codificados en que se asume por regla general la prescripción, un caso o un contexto de excepcionalidad que viene dado en el debate alemán del año 65 en el contexto de grave criminalidad del Estado.

Producto de ello surge una primera cuestión en el sentido de si puede entenderse que ciertos delitos contra la libertad sexual o contra la indemnidad sexual sean considerados crímenes contra la humanidad. La respuesta indudablemente es que no, pues hay un argumento positivo, de texto expreso en nuestra legislación, que desmiente esa afirmación y que significa considerar por ejemplo lo que plantea el artículo 1º de la ley 20.357 que tipifica los crímenes internacionales establece una regla en que no prescriben estos delitos, y los presupuestos para entender que estamos en presencia de un crimen contra la humanidad implican que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos.

Claramente lo que está en juego, o la expectativa legítima de las víctimas, es qué hacer cuando se han dado estas circunstancias y existen condiciones de impunidad por relaciones de prevalimiento de los autores.

Así, desde el punto de vista de los crímenes contra la humanidad existe todo un estatuto regulativo de esas cuestiones porque no se puede comparar, con todo el respeto que merecen las víctimas, la pérdida de miles de vidas humanas en campos de exterminio con un hecho puntual que afecta la libertad sexual. Las magnitudes que determina el legislador no pueden ser comparables en esos contextos.

Esa sinonimia no puede ser aceptada, la pérdida de miles de vidas humanas versus hechos puntuales que están regidos por regla general en un estatuto común.

Bajo esa perspectiva, la propia legislación que establece los crímenes contra la humanidad regula ciertos ámbitos de atentados contra la libertad sexual, donde si se dan los presupuestos, esas conductas pueden estar sujetas a esas reglas, pero acá el problema es otro y no debemos desatender que el Código penal desde su origen tipificó los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y siempre tuvieron aparejada una pena que no era menor en el contexto de la codificación, donde las reglas de prescripción tenían plazos mayores. Comentó que estos delitos siempre estuvieron sujetos a reglas como la interrupción de la prescripción y la suspensión de la prescripción, de modo que cada nuevo delito "hace perder" el tiempo transcurrido, y además se aplica la regla de la reiteración porque en general las acusaciones por estos delitos siempre existe una imputación de delitos reiterados, ha existido interrupción y han operado las reglas que el mismo código tenía.

Otra regla relevante es la de **suspensión**, es decir, la legislación penal chilena introdujo una regla que es excepcional para el resto de los delitos, incluso por ejemplo respecto de un homicidio. Esa regla está en el artículo 374 quáter estableciendo un plazo diferenciado prescripción, en virtud del cual desde que la víctima alcanza la mayoría de edad se empieza a computar el plazo de prescripción. Estima que esa es la mejor regla para resolver el problema, puesto que se bien establece una regla excepcionalísima y de plazo diferenciado, se puede llegar a una solución razonable determinando cuales son los plazos que requieren las víctimas.

Este último además ha sido el criterio del legislador en otros casos, tales como delitos de corrupción en la ley N° 21.121 de noviembre del año 2018 que establece una regla análoga de suspensión de la prescripción según la cual los delitos de corrupción no prescriben mientras quien detenta la posición de poder no cesa en el cargo, y es la fórmula que autores liberales han planteado para ciertos proyectos de codificación como el anteproyecto de código penal del Ecuador redactado por Rivacoba y Zaffaroni que propone reglas de suspensión mientras quien ejerce esta posición de prevalimiento detenta esa circunstancia no puede correr prescripción alguna, pero eso no significa acabar con el instituto de la prescripción.

El proyecto es deficitario porque establece un régimen diferenciado entre delitos en que la magnitud de los bienes jurídicos es discutible, ello porque el propio legislador ha establecido un *quantum* objetivo, generando un absoluto desorden.

Agregó que en el catálogo que propone el artículo 94 bis hay inconsistencias porque estando de acuerdo que el secuestro calificado con resultado de violación es un delito bastante grave, y así lo establece el legislador con la pena de 15 años y un día, presidio mayor en su grado máximo a perpetuo calificado, pero si se compara con las penas que podría tener algunas hipótesis de abuso sexual o de favorecimiento de la

prostitución, en que la pena es el presidio menor en cualquiera de sus grados o en su grado máximo, tres años y un día y cinco años, ese *quantum* objetivo no se entiende, no se explica cómo una regla como esa puede estar sujeta a una regla imprescriptibilidad, y, por su parte, un femicidio o un grave atentado contra la vida una persona, que es el bien jurídico por antonomasia, quede desprovisto de una regla de esta naturaleza.

Todo lo anterior no se explica desde el punto de vista de la proporcionalidad que tiene que existir o el equilibrio entre la conducta que se incrimina y la sanción que se le atribuye, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Va a ser un debate constante en caso de control preventivo o de inaplicabilidad determinar si esta regla puede satisfacer la noción de una diferenciación razonable, porque lo que dice la Constitución en su artículo 83, a propósito de la víctima, es que el ofendido por el delito y las demás personas que señala o que determina la ley podrán ejercer igualmente la acción penal, esa es la regla de acceso y las reglas vigentes en nada lo impiden, de hecho ya existe una regla que establece un plazo de suspensión de la acción penal diferenciada para ciertos delitos, por lo tanto, el punto es que no hay una consistencia en relación a la magnitud de los bienes jurídicos que se quieren proteger en relación a su *quantum* objetivo de pena y la solución que se propone que es la imprescriptibilidad.

Existen otros mecanismos más razonables que pueden ser tan o más efectivos que establecer una regla de imprescriptibilidad como la que se propone, porque este tipo de cuestiones siempre empiezan de esta manera y después se van extendiendo a otros ámbitos.

No aparece nítido ni prístino que se pueda sostener que esta clase de delitos en sí mismos, en su estructura, tengan que tener un régimen diferenciado del resto y, eventualmente, se puede proponer una solución alternativa pero también hay otros problemas prácticos, tales como el caso del delito cometido antes de la reforma del año 1999 que modificó estructuralmente los delitos contra la libertad sexual, la pena que se va a aplicar a ese delito es notoriamente inferior a la que actualmente tienen los tipos penales que ofenden la libertad sexual, y razonablemente no se podría sostener que se van a aplicar los delitos que están en el catálogo del artículo 94 bis, porque se tienen que aplicar los que estaban vigentes al momento del hecho y la punibilidad de ese hecho tiene una diferencia sustantiva en las penas. Por ello es que el transcurso del tiempo tiene una lógica y un sentido porque las valoraciones no son las mismas, y no por eso se están legitimando pues acaba de demostrar que estos delitos fueron sancionados gravemente desde que el código se dictó, sino que la intensidad o el *quantum* de la pena siempre fue distinto y fue distinto al momento que ocurrieron los hechos y naturalmente ha ido variando con el transcurso del tiempo, las reformas de 1999 y de 2001 son las más intensas y sucesivas que se han ido incorporando a este cuerpo de delitos.

Desde lo procesal penal nada de esta regla satisface una auténtica expectativa de justicia porque el estándar de convicción que debe fijarse el tribunal al momento de dictar una condena hace que en estas condiciones sea muy difícil establecer responsabilidad con estos condicionamientos temporales. Ello se puede ver en los juicios que se desarrollan día a día, las personas a tres meses de ocurridos los hechos olvidan cosas, olvidan detalles, hay inconsistencias en los relatos y el sistema procesal penal actual se estructura sobre la base de los testimonios que efectúan

terceros respecto de un hecho, eso es lo que legitima que el juez condene a una persona.

Desde el punto de vista de la expectativa de funcionamiento del sistema penal es necesaria una reflexión más detenida.

El régimen de la acción civil tiene problemas porque el régimen de la responsabilidad extracontractual por regla general tiene plazo de cuatro años para todos los hechos que tengan como origen un hecho ilícito, pero este tipo de ilícitos tiene un régimen preferente en el cual se posibilita renovar una acción y retoma una regla que ya es problemática en el Código procesal penal pues se da un plazo después de 60 días para renovar una acción cuando el fiscal toma la decisión de no perseverar u otro tipo de salida que no permita desarrollar la acción civil en el juicio penal. Ello requiere una revisión porque la regla, incluso desde el punto de vista la víctima, podría ser muy injusta porque se puede renovar una sola vez y no se resuelve qué ocurre si en esa acción renovada ocurre un abandono del procedimiento que no impide iniciar nuevamente el procedimiento.

#### **Una vez finalizadas las exposiciones se produjo el siguiente debate.**

El diputado **Saffirio** preguntó al profesor Aldunate qué opciones diferentes a la imprescriptibilidad puede sugerir respecto de este grupo de delitos.

El diputado **Hirsch** coincidió con el diputado Saffirio en el sentido de preguntar al profesor Aldunate cuáles serían los mecanismos opcionales, considerando por ejemplo la postergación hasta los 28 años o más la suspensión de la prescripción y aumentar el plazo de 10 a 20 años de prescripción, sin incorporar la imprescriptibilidad pero acomodar los números de modo que las víctimas dispongan de una gran cantidad de años. Pidió además a la Defensora de la Niñez que explicara el alcance de su comentario respecto de la necesidad de incluir en el catálogo el artículo 372 bis, violación con homicidio, por cuanto aun tratándose de formas imperfectas de homicidio de todos modos al consumarse la violación sí queda dentro del catálogo de delitos que propone el proyecto.

Agregó que en proyectos como este siempre es complicado escuchar a las víctimas pues sus testimonios conmueven, más aun cuando las víctimas son cercanas como es su caso con el señor Helmut Kramer, pero hay que preguntarse desde dónde y cómo se legisla, si desde la situación más personal de alguien, desde la casuística puntual o no, puesto que tiene dudas respecto del catálogo de delitos, que si bien son todos graves, hay una diferencia enorme entre unos y otros y podría considerarse la imprescriptibilidad sólo para los más graves.

Señaló que también le generaba dudas el tema de la de la deficiente eficacia jurídica y las expectativas que eso puede generar, entendiendo que el niño que no pudo en su momento pueda acudir a la justicia, ello es muy comprensible desde lo humano, pero puede que desde lo jurídico genere muchas expectativas luego de 30 o más años a las que no sea posible satisfacer. Instó a reflexionar sobre la eficacia o ineficacia, y hasta qué punto ello es relevante, pues puede no serlo.

La diputada **Nuñez** preguntó al profesor Aldunate qué otras alternativas pueden haber, tomando en consideración que el gran argumento del proyecto es la edad de la víctima, porque el debate del proyecto no se centra en incorporar otros delitos de gran connotación social como imprescriptibles. Instó a volver al objetivo de este proyecto que es dar la posibilidad a que aquellos que fueron víctimas de delitos sexuales siendo menores puedan ejercer la acción penal.

El diputado **Gutiérrez** señaló que estimaba que en la legislación debe existir un catálogo de delitos imprescriptibles y ello basado en su propia experiencia profesional y en que la prescripción en ocasiones dificulta la persecución de muchos ilícitos.

Recordó que hace tiempo presentó un proyecto que agregaba al artículo 93 del Código penal, que contiene las causales de extinción de la responsabilidad penal, una norma que dijera que esas causales no se aplican tratándose de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Estima que, más allá de lo puntual del proyecto en tabla, si en algún momento se hiciera un catálogo de delitos imprescriptible, sin duda los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra deberían estar allí.

Luego de escuchar los testimonios es posible empezar a ver a los sacerdotes como agentes de un estado extranjero, esto es, el Vaticano que los ampara, y ligar estas situaciones con la justicia universal, de modo mientras Chile mantenga la norma de prescripción dota de impunidad y aparece una especie de violación de derechos humanos, pero no en el contexto que señala el profesor Aldunate de crímenes masivos, generalizado o atentados a población civil pues allí está la regla de imprescriptibilidad.

Por lo anterior sugirió que se invite al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que ilustre al respecto, si es que los abusos de niños, niñas y adolescentes caben dentro del contexto de delitos de lesa humanidad, considerando que el Comité de los derechos del niño se ha pronunciado al respecto. Estimó que ese es un camino que vuelve viable este proyecto.

El diputado **Walker (Presidente)** preguntó a los expositores si hacen alguna distinción desde la idea de retroactividad, respecto de la acción penal para perseguir la sanción penal del delito de la investigación del mismo, porque hay casos como el de Karadima o del ex obispo Cox en que los tribunales superiores de justicia han adoptado la doctrina, tal como alguna vez se resolvió respecto a los crímenes contra los derechos humanos de lesa humanidad, que la irretroactividad no alcanza la investigación, y es lo que entiende determinó también la justicia respecto del ex diputado Patricio Hales, distinguiendo la prescripción de la acción penal respecto de la acreditación de los hechos. La pregunta entonces como legisladores es si de resolverse la irretroactividad, ésta alcanza o no la investigación de estos delitos. Para esclarecer aquello resulta relevante la opinión de las víctimas, en el sentido que ello satisface o no sus expectativas.

Pidió al señor Estradé-Brancoli que desarrollara un poco más el principio in dubio pro víctima, distinguiendo la regla procesal respecto de la pena.

Todo lo anterior con miras a ver si se puede llegar más allá de lo que hizo el Senado.

Planteó que era necesario explorar la posibilidad de considerar estos delitos como aquellos de lesa humanidad, y ello porque de los relatos como los de Helmut Kramer se desprende que no se trata de hechos aislados, sino reiterados en el tiempo. Todo lo que se ha conocido en Chile y en el mundo comprende miles de casos, por los cuales la máxima autoridad del estado Vaticano ha tenido que pedir perdón una y mil veces, y hay fallos judiciales que dan cuenta de esto como el caso de la acción civil que ganaron los denunciantes del caso Karadima. Se trata de una acción reiterada en el tiempo por parte de una institución que tiene una serie de privilegios.

El centro de atención aquí es la situación especial de las víctimas del delito, que son menores de edad, en contraposición a los delitos de lesa humanidad donde la distinción se hace porque el victimario es el Estado premunido de todo su poder.

Preguntó si era necesario hacer asimilable la situación de los abusos sexuales contra menores con los delitos de lesa humanidad para fundamentar la imprescriptibilidad, pues aun cuando tengan naturaleza distinta, uno en razón de la víctima y el otro del victimario, pueden ser considerados delitos de lesa humanidad y hay razones de peso para ello, confirmando con ello la excepción a la imprescriptibilidad que el profesor Aldunate ha confirmado que ha existido respecto de aquellos delitos, y que se puede seguir aplicando de acuerdo a la valoración subjetiva que tenga el legislador porque finalmente es una decisión como legisladores determinar si esto que ya se ha hecho puede aplicarse o no a este delito.

El diputado **Gutiérrez** señaló que el *in dubio pro víctima* no es desconocido en el derecho internacional, particularmente en los derechos humanos, la interpretación es en favor de la víctima, preguntó si en el derecho internacional se considera como una regla adjetiva o sustantiva.

El diputado **Hirsch** destacó que luego de conocer la información aportada por la Red de Víctimas de Abuso Eclesiástico es dable reconocer allí todas las características de una organización criminal, organizaba para delinquir, encubrir, mantener un manto impunidad. Ahí lo que corresponde es ver cómo se controla una organización de ese tipo pero hay miles de casos en que no hay una organización de este tipo detrás sino que hay un pariente, un vecino o un desconocido y hay que considerar aquello para ver si es posible estimar ambas situaciones o solo la primera como delito de lesa humanidad.

Estimó que ambas situaciones merecen un tratamiento distinto.

La señora **María Luisa Montenegro, Defensora de la Niñez subrogante**, explicó que respecto del artículo 332 bis la mayoría de doctrina estima que no se podría cometer de forma imperfecta, es decir, que si hay una violación y no se alcanza a cometer un homicidio, habría que penar por los dos delitos, pero eso puede variar la jurisprudencia y algún tribunal podría considerar que se podría cometer de forma imperfecta y eso genera una gran diferencia entre las penas, porque la violación tiene presidio mayor en su grado mínimo a medio, cinco años y un día a quince años, y la violación con homicidio va de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado.

Así, de no considerar este delito en el catálogo efectivamente está la violación, pero sería imprescriptible el delito menos grave y no así el más grave aunque procediera rebaja de penas.

Respecto de los catálogos de delitos recordó que el objeto del proyecto es para proteger a un grupo determinado, los niños que no pueden o no están en condiciones de denunciar o denuncian mucho después, porque el proceso para llegar a denunciar es lento y puede estar sometido a otros factores externos. Puede tratarse de un delito sexual cometido por única vez por una persona conocida, o puede tratarse de abusos sexuales y violaciones dentro de la iglesia o una organización criminal.

Planteo que posiblemente no era posible considerar una organización criminal a la familia, que es el mayor encubridor de los delitos sexuales, entonces la distinción hay que hacerla en función de la víctima pues no se puede discriminar a un niño que fue violado por ejemplo por una persona de su familia versus alguien que fue violado por una persona de una iglesia o de una comunidad en particular.

Lo que se protege no es un delito más o menos grave sino que un bien jurídico protegido en general. El mismo informe de la Corte Suprema señala que no podría extenderse a todos los delitos porque generaría alguna incertidumbre, pero los delitos sexuales son un englobe. Se ataca a un niño en la esfera de su indemnidad sexual con un abuso, una violación u otro tipo de delitos y la transgresión es la misma.

El diputado **Díaz** preguntó qué pasaría si se tratara de maltrato, si la regla tendría que ser la misma o no.

La señora **Montenegro** explicó que en su opinión sí aplicaría, de hecho la definición de maltrato que utiliza la Unicef señala que los abusos sexuales son una forma de violencia, viendo la visión del Comité se podría aplicar, sin perjuicio de que no hay una recomendación de declararlos imprescriptibles.

Agregó que todos los casos de reglas especiales de prescripción, como el caso de los delitos de corrupción, están mirados desde el punto de vista del imputado, y no desde el punto de vista de la víctima, que es el fundamento del proyecto. La justificación de la interrupción en ese caso es porque la persona que cometió el delito todavía está en una posición de poder y no un beneficio hacia una víctima.

Respecto de los delitos de lesa humanidad precisó que estos delitos sexuales pueden o no estar insertos en aquellos pero en este caso la justificación es la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, puede estar inserto o no pero la justificación es otra.

Respecto de la retroactividad respecto de la acción penal y la investigación del delito, precisó que a su juicio no basta con investigar, además las expectativas que se pueda tener de la investigación son las mismas que se puede tener al día uno o al día 100, no se pone una querrela o denuncia para ganarla sino para que se investigue y es la justicia la que tiene que determinar si condena o no, por lo mismo es necesario que se hagan ciertas precisiones, porque por ejemplo para la acción civil se requiere que haya una formalización que tiene que cumplir un estándar penal que es bastante alto.

Ahí además hay un problema práctico en el sentido que si se sabe que un delito está prescrito y el ministerio público es el que investiga y el titular de la acción penal y se debe regir por el principio objetividad, si sabe que está prescrito ¿debe seguir investigando?, el problema práctico es que podría no seguir investigando sabiendo que el hecho está prescrito, y la reparación también es muy importante, no solo la investigación.

El señor **Helmut Kramer, vocero de la Red de Víctimas de Abuso Eclesiástico**, señaló que había investigaciones como la los sobrevivientes de Karadima o del ex diputado Hales que logran asentar una verdad, que existió el delito. Al respecto, han planteado como Red tres puntos fundamentales que se extrapolan a sobrevivientes de abuso de menores de edad en otros ámbitos, esto es, que no se trata de asentar solamente la verdad del hecho sino que también la justicia y la reparación que debe ir acompañados después de asentar la verdad. Consideran que es importante que haya una investigación que diga el abuso existió bajo determinado contexto, que fue producido por tal o tales personas y que se reconozca esa verdad hacia las víctimas, pero ese es solo un primer paso, si ese círculo no se cierra con un proceso de justicia y de reparación queda incompleto. De qué sirve asentar la verdad si no existe un proceso de reparación que ayude a sobrevivientes de abuso sexual de cualquier índole a llevar a cabo procesos médicos, un tratamiento con psicólogo más medicamento a un adulto que sufrió abuso sexual bordea más o menos los 300 mil pesos mensuales.

Cuando se apunta al cierre completo implica verdad, justicia y reparación. Al no permitir la imprescriptibilidad del delito queda el proceso en un comienzo, también tomando en cuenta que no necesariamente va a ser investigado porque hay casos donde ha habido denuncias y al haber prescripción el juez resuelve que no tiene la obligación de investigar, es decir, una cosa no obliga a la otra, por eso es importante avanzar con este proyecto, lo que es extrapolable más allá del contexto eclesiástico.

El diputado **Díaz** preguntó al señor Kramer qué expectativas tenían respecto del proyecto en cuanto se pudiera alcanzar con éste situaciones ocurridas con anterioridad a su promulgación, a propósito de la necesidad de cierre completo y no solo de asentar una verdad, sino también justicia y reparación.

El señor **Kramer** explicó que uno de sus planteamientos tiene que ver con la generación de procesos que vayan creando una sociedad donde no exista una relación de poder que es la primera puerta para el abuso sexual, todo abuso sexual parte con una relación de abuso de poder, así, no ven la ley de imprescriptibilidad como el único punto sino que es una parte de un proceso mayor. La ley de imprescriptibilidad pone en primer lugar el proceso de la víctima, de dar ese espacio que desde el momento del abuso permite pasar desde el abuso a su aceptación y poder verbalizarlo con todo lo que eso implica, no pone el punto en si se logra ganarle o no al abusador, que en su caso tiene más de 90 años y no tiene ninguna instancia de poder, pero no tiene que ver con eso sino con el respeto a ese proceso interno y esa es la importancia de esta ley, porque tiene que existir ese proceso de reconocimiento del abuso que tiene que ver con un tema psicológico.

El señor **Leonardo Estradé-Brancoli**, en torno a precisar lo que es el *in dubio pro víctima*, señaló que hay dos esferas, una es el sentido de la comisión constituyente que estableció expresamente para reconocer los derechos de la víctima en

lo sustantivo, esto es, se refiere a los principios de igualdad y de protección, pero también en lo procesal respecto a asegurar la acción y defensa jurídica a efecto de ejercer la acción penal, ese es el ámbito en que la comisión constituyente abarcó el principio *in dubio pro víctima*. Allí no se refirieron a un delito en particular sino que es esta comisión, con este proyecto y respecto de la evidencia empírica que señala que los delitos sexuales contra menores tienen ciertas características muy especiales especialmente desde el punto de vista de la víctima que no reconoce al abusador como el sujeto activo de un delito.

Esto es un asunto del legislador independiente que en las defensas de los victimarios se pueden hacer valer los recursos que estimen pertinentes, a lo que no hay que temer.

Se habla mucho del *in dubio pro reo*, pero la Comisión constituyente se puso también por el **in dubio pro víctima** y desde ese punto de vista el legislador puede establecer la imprescriptibilidad para adelante o ampliar los plazos y eso equipara el concepto de igualdad íntimamente relacionado con de protección y eso en su conjunto en base a la evidencia empírica es lo que nos da el principio *in dubio pro víctima*.

El señor **Enrique Aldunate**, frente a la posibilidad de construir una alternativa a la idea de imprescriptibilidad, planteó que las reglas de suspensión siempre son una buena herramienta y, por ejemplo, se podría plantear que el plazo de prescripción se suspende mientras la víctima menor de edad se encontrare bajo el control de ascendiente, guardador, maestro o eclesiástico, etc., o aquel que con abuso de la situación de vulnerabilidad del menor o dependencia o autoridad ejerciere sobre víctima algún grado influencia, de modo que si procesalmente se puede acreditar la circunstancia que ha cesado ese estado de dependencia de la víctima, se puede establecer una regla especial de suspensión de la acción penal en esos casos.

Análoga respuesta pueden tener los casos planteados por los diputados Gutiérrez y Hirsch a propósito de la estructura organizacional. En ese ámbito Chile tiene una deuda definitiva respecto de la regulación de la organización criminal como una hipótesis delictiva, la regulación es insuficiente, la estructura actual de la asociación ilícita no da el ancho, pero existe una regla respecto de los delitos sexuales en el artículo 369 ter que establece la habilitación de ciertas medidas procesales especiales para investigar esta clase de delitos cuando se está en presencia de una organización, pero la organización se tiene que determinar en el contexto de una investigación y no porque exista la incriminación de una organización criminal.

Respecto de otras de las preguntas del diputado Gutiérrez insistió que no puede vincularse el crimen de Estado con esta clase de crímenes porque no existe ese elemento constitutivo que es precisamente que es el Estado quien viola los derechos fundamentales, quien ejerce el terrorismo sobre sus ciudadanos, así, solo podría extrapolarse quizás respecto del Estado Vaticano, y no respecto de otros contextos.

Si queremos regular la organización criminal y que una hipótesis agravada de organización criminal sea la que ha ocurrido en este contexto, hay una herramienta legislativa para hacerse cargo de ese problema, pero no pueden no pueden mantener esa misma fisonomía porque tienen la misma estructura y naturalmente no son los mismos medios, que pueden resultar discriminatorios cuando la acción civil se dirige

contra quien no tiene recursos. El proyecto tiene que hacerse cargo de esa descompensación que existe más cuando hay procesos abiertos.

Respecto de lo señalado por el señor Estradé-Brancoli acotó que estimaba que ni siquiera existe el *in dubio pro reo*, no hay ninguna norma expresa que lo establezca, se creó a nivel de interpretación en relación a ciertas normas que establecían que en determinados contextos se podía fallar en favor del imputado como era la aplicación de la pena de muerte cuando existía a una equiparación de votos se inclinaba una posición respecto de evitar su aplicación. La regla que está en la Constitución es otra cosa, se refiere a la retroactividad en favor del imputado entendiendo que la regla general es que no hay irretroactividad penal pero si lo hay cuando está favorezca al imputado.

A propósito de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular respecto del Fallo Almonacid Arellano, precisó que como precedente se refiere al caso en que se dictó una ley de auto amnistía, el decreto ley 2.178, señalando que bajo esas condiciones conducen a la indefensión de la víctima y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y espíritu la Convención Americana e indudablemente afectan los derechos consagrados en ella, es decir, parte la base de un acto de poder estatal que es la auto amnistía, se crean condiciones materiales para que el Estado y sus agentes queden en la impunidad, con lo que se confirma la convicción de que no se puede extrapolar sin más esta categoría a esta clase de delitos.

Instó a tener presente que la prescripción no es la única forma de extinguir la responsabilidad penal, la muerte del imputado también la extingue, por ende, ningún fiscal va a perseguir un delito en el cual el responsable ya haya muerto.

El diputado **Gutiérrez** solicitó se traigan a la vista los proyectos de ley presentados relativos a la extinción de la responsabilidad penal, artículo 93 del Código penal.

El diputado **Walker (Presidente)** señaló que aparentemente ese proyecto fue rechazado en el Senado en general.

El señor **Aldunate** precisó que se trataba dos proyectos, uno de ellos establecía una limitación a propósito de aplicación de las causales de extinción de responsabilidad para los crímenes de Estado que fue declarado inadmisibles por el Senado. El otro proyecto interpretaba el artículo 93 en materia de extinción de responsabilidad penal en crímenes internacionales que pasó al Senado pero no ha avanzado. Se comprometió a aportar los números de boletín.

El diputado **Walker (Presidente)** propuso invitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a aquellos invitados que debieron excusarse el día de hoy, y escuchar a algún penalista que pueda sostener la tesis de la retroactividad en línea con lo que han señalado las víctimas.

#### **Sesión N° 98 de 7 de mayo de 2019.**

La Comisión recibió las siguientes exposiciones:

**1.- Señoras Ymay Ortiz, Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público y Catalina Duque, asesora de la misma unidad.**

La señora **Ortiz, Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público**, agradeció la invitación puesto que se trata de un tema muy especial tanto Fiscal Nacional y para los fiscales adjuntos que ejercen su trabajo día a día.

La prescripción es un límite al ejercicio de la acción punitiva del Estado y es un instituto que cede o renuncia a la persecución en pos del bien jurídico de la seguridad, sin embargo hay otros bienes jurídicos de mayor importancia como es la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Respecto del proyecto existen ciertos aspectos que pueden perfectibles, que dicen relación con la forma de entender la valoración del tiempo que hacen los niños, niñas y adolescentes que es distinto a cómo lo hacen los adultos.

Estos delitos además se cometen durante la etapa de desarrollo de los niños y los adolescentes y muchas veces es necesario que transcurra mucho tiempo o que lleguen a adultos o incluso mucho tiempo después para que se den cuenta que han sido sujetos de una situación abusiva y por eso es tan importante el proyecto. De hecho fue un tremendo avance la reforma del 2007 que estableció límites especiales de prescripción respecto a estos delitos y ahora la imprescriptibilidad claramente es un tremendo instrumento para labor de persecución de los fiscales.

Como Ministerio Público valoran que se haya ampliado el **catálogo**, sin embargo, aún queda fuera la incorporación del **artículo 374 bis**, esto es, **producción, distribución y almacenamiento de material pornográfico**. Estuvo en el proyecto del Senado sin embargo se entendió que no existía una vinculación directa con la víctima, sin embargo, es relevante tener presente que de la experiencia como fiscales han observado que normalmente, o muchas veces, estos son delitos que no van separados, es decir, muchas veces los autores de las violaciones y abusos sexuales a los niños y adolescentes son también autores de la producción de material fotográfico, además en las comunidades o asociaciones de pedófilos, y así se ha visto en las investigaciones muchas veces, una de las condiciones para entrar a ellas es que aporten este material, por lo tanto son también autores.

Existen muchas causas en que se ha investigado, se ha perseguido y los fiscales han obtenido condena en que se acusa por cada delito por separado y se ha condenado así, tanto por el delito sexual propiamente tal como por la producción como por la distribución. Lo que se ha discutido a veces es la consideración además del almacenamiento porque se entiende que la distribución también incluye un necesario almacenamiento.

Estiman que no quedó bien regulada la situación de la **víctima que no puede ejercer estos derechos**, proponen que tal y como está el artículo 64 es plenamente aplicable y que podría hacerse una remisión directa al actual artículo 54 del Código

procesal penal en el caso en que la víctima no pueda libremente denunciar estos ilícitos a la justicia, al Ministerio Público o a la policía.

Por su parte, respecto de los **adolescentes infractores**, esto es, cuando los imputados son adolescentes, señalan que la jurisprudencia se ha dividido señalando que se aplica el estatuto adolescente o el estatuto especial de prescripción que está regulado en el Código penal respecto de los delitos sexuales. Proponen el establecimiento de un estatuto especial, es decir, que pondere ambas situaciones, por una parte los imputados adolescentes que están en una situación especial, tienen una motivación especial y por eso que hay una ley especial que lo regula, y la situación de la víctimas menores de edad. La propuesta es el establecimiento de un estatuto especial de prescripción pero con plazos más amplios que los que hoy día existen en la ley de responsabilidad penal adolescente que son brevísimos.

En relación a la **aplicación temporal** es necesario tener presente que vamos a tener tres estatutos aplicables, uno para los hechos cometidos antes del año 2007, otro intermedio para hechos cometidos entre el 2007 y la entrada en vigencia de la ley en debate, y un tercero desde la fecha de la entrada en vigencia. Ello podría ocasionar algunos problemas, pero es lo que siempre sucede cuando se modifica un estatuto penal.

La señora **Duque, asesora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público**, precisó que respecto del catálogo de delitos valoran la incorporación de los artículos 142, 150B, 150C, el catálogo de los delitos sexuales, como también el 433 N°1 y la trata de personas, lo consideran bastante inclusivo y coherente con la ley N° 21.057 sobre entrevistas investigativas videograbadas en relación a niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, recomiendan la incorporación del **374 bis**, relativo a la comercialización, distribución y difusión de material pornográfico infantil y su inciso segundo relativo al almacenamiento malicioso de dicho material. Durante la discusión en el Senado se justificó su exclusión por falta de correlación con el imputado de manera directa, sin embargo, ello no es así, e incluso la generación de este material se asocia no solo con la violación o el abuso sexual, sino que también con el *grooming*, abuso sexual a distancia.

Por su parte, llama la atención la figura del **372 bis**, esto es, la violación con homicidio, que también considera la ley 21.057. Se ha dicho que en ese caso la víctima falleció y que sería inútil su inclusión, sin embargo existen las situaciones imperfectas de comisión, es decir, grado tentado o frustrado, y como la penalidad asignada al 372 bis es altísima, presidio perpetuo simple a calificado, igual en estos estadios imperfectos la penalidad sigue siendo mayor que la que podría obtenerse por una simple violación. Sugieren la incorporación de esta figura no en grado de consumado.

En relación al nuevo **369 quinquies** es bastante positivo, suprime el 369 quater y señala que respecto del catálogo que incorpora existirá acción pública previa instancia particular conforme a lo dispuesto en artículo 54 del Código procesal penal una vez que la víctima alcance la mayoría de edad, sin embargo su inciso segundo prescribe que: "Siendo delitos de acción pública previa instancia particular, el Ministerio Público no podrá actuar de oficio en los términos del inciso cuarto del artículo 54 del Código Procesal Penal, cuando el ofendido pueda libremente denunciar estos ilícitos a la justicia, al

Ministerio Público o a la policía.”, ello resulta confuso porque la hipótesis da cuenta del caso en que la víctima libremente lo puede hacer, sin embargo el artículo 54 en su inciso segundo habla específicamente de las víctimas que no están libres, que por una imposibilidad física o cognitiva no pueden denunciar y por eso la acción se vuelve de oficio para el Ministerio Público o cuando las personas que podrían denunciar por ella están involucrados en el hecho. La normativa entonces choca con lo realmente dispuesto en ese inciso. Sugieren que se considere expresamente que debería operar cuando las víctimas no pueden libremente denunciar aún cuando sean mayores de edad, por ejemplo, víctimas con trastornos graves a nivel cognitivo, físico, personas que pueden haber quedado en un estado vegetal, personas con esquizofrenia. Son los más vulnerables, de niños no pudieron hacerlo y pasando a la adultez tampoco, no se les puede probar de la oportunidad que el Ministerio Público, conociendo del hecho, actué.

En cuanto al **adolescente infractor** recordó la vigencia de dos estatutos, el artículo 5° de la ley 20.084 y el 369 quater vigente, en circunstancias que ambos tienen como fundamento el privilegiar la situación de los niños, niñas y adolescentes. Ello ha generado jurisprudencia contradictoria, lo que produce incerteza. Sugieren que toda vez que se encuentra en tramitación la modificación a la ley 20.084, debería regularse este punto de manera orgánica y establecer una preinscripción de carácter especial, pero que no se reenvíe al 369 quater del Código penal porque éste va a desaparecer.

En cuanto a la **aplicación temporal**, el hecho que el artículo transitorio señale que para los hechos delictivos cometidos con anterioridad a la publicación de esta ley continuará vigente el artículo 369 quater del Código penal, zanja un tema que fue bastante discutido en el Senado, y deja vigentes tres estatutos que con el correr del tiempo irá sólo quedando el nuevo 369 quinquies.

## **2.- Señor Juan Pablo Hermosilla, abogado, académico y miembro del directorio de la Fundación para la Confianza.**

El señor **Hermosilla** agradeció la invitación y precisó que asistía desde una triple perspectiva, como abogado que conoce de estos casos de hace muchos años, como profesor de derecho penal que se ha especializado en el tema, y también como ciudadano que se sigue impresionando con las cosas que suceden y las denuncias que salen a la luz pública, que interpelan no solo a la sociedad sino que al Estado que es la sociedad organizada.

Acotó que no creía que el derecho fuera neutro, sino que siempre es ideológico, y que se situaba en lo particular desde la izquierda, desde creer que los poderosos se defienden solos y que las personas que son más vulnerables y más frágiles a las que se debe el contrato social en forma primordial.

Dijo no entender cómo no le llamó la atención cuando estudiaba derecho penal el hecho de que el abuso sexual de infantil prácticamente no existiera desde el punto de vista criminológico no dogmático, y que hasta el día de hoy los profesores de derecho penal ni la literatura reciente especializada no citan la Convención Internacional de los

Derechos del Niño que crea un estatuto especial para los menores que, en parte, es el origen de lo que se está discutiendo en esta Comisión, es una convención de derechos humanos, una derivación de la Declaración Universal de derechos humanos, de hecho Eleanor Roosevelt planteó desde un principio que había que crear un estatuto especial para los niños por su particular situación de vulnerabilidad.

El tema central no es un preciosismo dogmático sino que hay vidas que han sido cambiadas, ni los abogados ni los profesores derecho penal han entendido lo que es el abuso sexual infantil, tanto así que el anteproyecto de Código penal que presenta el gobierno señale que el bien jurídico en el abuso sexual infantil es la libertad de autodeterminación sexual, en circunstancias que ello es efectivo solo en cuanto representa el 5% del problema que tiene que ver realmente con la afectación de la dignidad global.

Precisó que el principal responsable de esto es el Estado chileno que lo ha validado e instó a recordar que cuando el año 79 tuvo su primer curso de derecho penal le enseñaron que el hombre podía golpear a los niños, y eso es una potente señal política y jurídica, hasta producirle lesiones menos graves por el derecho corrección, entonces, si podía golpear y producir hematomas, un agarrón en los genitales no se apartaba mucho de aquello. También recordó que antes del año 2007 corrían las reglas de prescripción general, se abusaba de un niño a los 5 años y a los 10 estaba prescrito.

Todo lo anterior llevó a que este fuera el delito con mayor cifra negra, por sobre el aborto.

Explicó que la única forma de frenar la violencia en la sociedad es tratando bien a los niños y el estado chileno tenía un modelo autoritario y oligárquico del derecho en que expresamente el Código civil y el Código penal consideraba más importante la autoridad del padre que era designado jefe de la familia que los bienes jurídicos más fundamentales del niño.

Se trata de una cuestión ideológica del estado chileno de la cual recién estamos saliendo.

El Estado ha sido corresponsable, a partir del año 90 nos rige la Convención Internacional de derechos del niño que establece obligaciones para el Estado y crea en sus artículos 1º, 2º, 3º, 19 y 23 un protocolo especial y fija el interés superior del menor como criterio. Así, ante la pregunta si estos delitos deben prescribir, debe responderse a la luz del interés superior del niño.

Hizo notar que los abogados valoran más la prescripción que el acceso a la justicia y que la protección de los menores.

El contrato social es la base de legitimidad del Estado en general y del derecho, los penalistas están de acuerdo en que la legitimidad del derecho penal se fundamenta en el contrato social donde se renuncia a la autotutela, se confía en una autoridad que vamos a auto designar y que nos va a proteger, ahora bien, en orden jerárquico los primeros en ser protegidos en una sociedad democrática son las personas, y no el estado en sí mismo, pero en primer lugar está al servicio de los más vulnerables, esa es la primera obligación del estado.

El primero deber de un estado democrático es defender a sus niños.

Agregó que, en segundo lugar, de los artículos 19 y 23 de la Convención Internacional de derechos del niño, el estado está obligado no sólo a proteger al niño sino que en caso de ser vulnerado en sus derechos a producir los mecanismos correctivos inmediatamente.

La prescripción es una institución que se ha transformado en un dogma o fetiche que repiten los profesores de derecho penal bajo los argumentos de que transcurrido el tiempo desaparece el sentido del castigo, que aquí hay que estabilizar las relaciones sociales y es una especie de cuestión incivilizada cuestionarla.

La necesidad de estabilizar en cierto punto las relaciones sociales es cierto en relación con delitos menores pero respecto de otros delitos no resulta tan claro, como en el homicidio, tanto así que países como España hace no muchos años atrás establecieron la imprescriptibilidad de los delitos contra la vida después de una reflexión muy interesante en lo político, ideológica, sobre la función del contrato social sobre si primaba el acceso a la justicia y la justicia materialmente o la decisión de estabilizar la situación después de pasado el tiempo.

Esa es una discusión muy interesante que está surgiendo en todas partes de occidente a lo menos, repensar la prescripción como elemento más propio de un derecho vertical donde se busca más bien dominar y controlar ciertos grupos sociales y no de una sociedad de derecho que protege bienes jurídicos y establecer un sistema de pacificación social por la vía la administración de justicia con igualdad de acceso.

El debate se acaba y desaparece cuando se trata de menores de edad por el estatuto señalado y por el interés superior del menor contenido en el artículo 1º y 3º de la Convención Internacional de derechos del niño, no hay opción, es mandatorio.

La situación ha llegado a este punto porque no sabemos cómo enfrentar el tema, detrás de esta ley debiera haber un acto de reparación a todas las víctimas silenciosas que el Estado ha aplastado, ha habido un doble impacto, el del abuso, el del estado chileno, se trata de una doble traumatización.

La violación en un adulto o en un menor afecta la libertad de determinación pero no es equiparable, porque en el menor provoca un impacto en su mundo emocional de tal magnitud que afecta su dignidad y le afecta todo, tal como lo ha demostrado y medido la epigenética, con información científica sobre la afectación fisiológica e incluso en la disminución de expectativa de vida.

El Estado no sólo hace lo adecuado en un estado constitucional de derecho al establecer la imprescriptibilidad sino que está reparando una herida grave.

El Estado esta no sólo genéricamente incumpliendo su obligación básica cuando no protege a los menores de abuso sexuales y no los acoge, sino que además está incumpliendo desde el punto de vista el derecho positivo, del derecho internacional público, las obligaciones contenidas en la Convención Internacional de los derechos del niño.

Planteó que además la imprescriptibilidad debiera aplicarse retroactivamente, del modo en que lo entiende la doctrina alemana, es decir, no hay vulneración de garantías constitucionales porque se trata de una cuestión formal y no material.

Advirtió que a lo menos a partir de las obligaciones contraídas por Chile en la Convención Interamericana de derechos humanos y en la propia Declaración Universal de derechos del hombre, se requiere que se investigue, y eso es relevante aunque este prescrito el hecho porque destruye el principio de inocencia, y el hecho de que la justicia diga que puede acreditar la responsabilidad de una persona, que el sujeto es culpable pero no puede aplicarle sanción, es un evento de reparación enorme. Es necesario plantearlo porque el número de víctimas que rebotan en el sistema es enorme, y constituye un incumplimiento grave a una convención de derechos humanos.

Sugirió a la Comisión revisar la retroactividad como opción pese a lo que resolvió el Senado.

### **3.- Juan Peña Libuy, abogado.**

El señor **Peña** comentó que era asesor del diputado Díaz pero que su exposición del día de hoy era a título personal y agradeció la invitación a la Comisión.

Explicó que el proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad tiene tras él un debate fundamental a resolver, esto es, si acaso se busca una justicia meramente simbólica o acaso una justicia efectivamente reparadora, es decir, preguntarnos si la imprescriptibilidad es el arma para el objetivo que se busca.

Aseveró que si tras el proyecto está la búsqueda de la justicia simbólica la imprescriptibilidad tiende a ser una herramienta adecuada y si, por el contrario, lo que se busca es una justicia efectivamente reparadora este proyecto de ley resulta ser el paroxismo de la ineficacia.

Esta discusión, que pareciera ser más propia de la filosofía del derecho, en realidad tiene una aplicación bastante práctica porque lo que hay detrás de los delitos sexuales contra menores es el daño que sufren las víctimas, entonces, respecto de ese daño hay que preguntarse si merece o aspira a ser reparado o requiere efectivamente ser reparado. Precisó que era de la postura de que el daño que sufren las víctimas debe ser reparado.

Mencionó que la imprescriptibilidad para los delitos comunes resulta ser una medida ineficaz porque la presencia del tiempo en las investigaciones penales tiene un sentido relevante, ya que cualquiera pudiera pensar que las garantías del debido proceso que están establecidas en nuestra Constitución, entre ellas la garantía de un procedimiento e investigación racional y justa, están pensadas exclusivamente para el imputado pero en realidad están pensadas para todas las personas e incluso para las víctimas. Así, la necesidad del tiempo es una garantía para las víctimas de que al menos los fiscales del Ministerio Público en ese determinado tiempo van a tener que realizar su

trabajo. Por el contrario, de declararse imprescriptible la acción penal o la investigación de un delito no tendrán incentivos objetivos para investigar y tampoco contarán con medios probatorios para poder acreditar la ocurrencia de un delito y la inocencia o culpabilidad de una persona a la cual se le imputa.

Desafortunadamente en más de 120 años de historia procesal chilena los medios de prueba no han evolucionado, se mantienen la prueba testimonial, la confesional y la documental, y el establecimiento de la imprescriptibilidad no es una innovación a ese respecto.

De acuerdo a la Constitución el Estado tiene la obligación de establecer siempre las garantías para un procedimiento e investigación racional y justo, así, al establecer una medida ineficaz como la imprescriptibilidad se vulnera ese deber y se deja de lado la preocupación al respecto.

En segundo lugar, la imprescriptibilidad de los delitos comunes es ineficaz porque no se puede en caso alguno equiparar a los delitos de lesa humanidad donde la imprescriptibilidad si es efectivamente eficaz porque quién comete los delitos de lesa humanidad es el Estado y sus agentes que están en una posición de evidente superioridad frente al ser humano, tanto así que al cometer el delito se hace de todas las herramientas para evitar la justicia y garantizar su impunidad, por eso en el caso chileno durante la dictadura militar se dictó el decreto de amnistía, que en el fondo perdonaba a futuro a quienes cometían los delitos.

No es equiparable la imprescriptibilidad en los casos de delitos de lesa humanidad a los casos que se están discutiendo porque el agente que comete un delito sexual no es el estado ni un agente del estado, es una persona común y corriente que no cuenta con los mecanismos para poder evitar la justicia, no hay ningún impedimento externo como si ocurre en el caso de los delitos de lesa humanidad para evitar la justicia, probablemente no va a obtener una amnistía, ni un indulto ni se va a valer de alguna inmunidad diplomática para poder zafar la justicia, ni va a acceder a ningún beneficio carcelario ni a ningún régimen especial, y tampoco se va a poder valer de la lentitud de los procesos de justicia transicional.

Si el parlamento decide incorporar herramientas ineficaces para la persecución de estos graves delitos, de este grave daño que merece y debe ser reparado, está obviando el deber de establecer garantías adecuadas.

Agregó que, además, el proyecto adolece de falencias que lo vuelven aún más ineficaz.

En primer lugar, el proyecto establece un artículo **94 bis** que solamente declara imprescriptible la acción penal pero no así la pena, como si ocurre y se justifica que ocurra en el caso de los delitos de lesa humanidad, donde también es imprescriptible la pena. Para dar cuenta de por qué es ineficaz explicó que una persona condenada por estos delitos pero que es hallare prófuga de la justicia puede evadir su responsabilidad penal.

Por su parte, el proyecto introduce un artículo **369 quinquies** nuevo que declara estos delitos como delitos de acción penal pública previa instancia particular. El

fundamento que hay tras la acción penal pública es el hecho de que a la sociedad completa le interesa la persecución de esos delitos y es atendible el hecho de que la víctima tenga que decidir cuándo acceder a la justicia o recurrir a los tribunales, sin embargo, ese argumento que carece del peso suficiente como para incorporar esta norma, se constituye como una suerte de “vista gorda” de la sociedad respecto a estos delitos, pues al establecer que estos delitos sean de acción penal pública previa instancia particular cuando sean menores de edad en el fondo es decirle a los niños como sociedad hágase cargo solos.

Si no fuera esa la interpretación correcta, el artículo 369 quinquies incurre en una confusión de reglas procesales que lo único que hace es confundir a quien está llamado a interpretar la norma jurídica y a aplicarla.

Acto seguido el proyecto suprime el artículo **369 quater** que establece una regla especial de suspensión de la prescripción. Propuso que lo apropiado sería adecuar esta norma de manera que puedan hacerse calzar los plazos que en se han señalado, los señalados como necesarios para que las víctimas puedan entenderse como tales y decidir acudir a la justicia.

Luego, el proyecto entrega la posibilidad de **renovar las acciones civiles** contra el imputado siguiendo las normas del juicio sumario y contra el tercero civilmente responsable siguiendo las normas del juicio ordinario, pero el proyecto nada dice en cuanto a la posibilidad de que éstas se pueden interponer conjuntamente, pues si se pudieran interponer conjuntamente surge la duda respecto de qué reglas procesales se aplican, las del juicio sumario o acaso las del juicio ordinario. Sugirió subsanar aquello.

Finalmente, el proyecto de ley en nada se manifiesta en cuanto a la posibilidad de establecer programas de acompañamiento para las víctimas para la recuperación de su salud biológica, psicológica, ética, moral, etcétera, lo que probablemente es lo más importante. Se aleja totalmente de la posibilidad de reparar efectivamente el daño. Recordó que en legislaciones como la del aborto, donde se despenaliza una conducta que hasta antes de la entrada en vigencia de la ley estaba penada, también se incorporan programas de acompañamiento.

Añadió que en cuanto a las acciones civiles y la reparación de carácter indemnizatorio tiene desafortunadamente un sesgo clasista porque quien va a poder pagar la indemnización va a ser aquél que tiene los recursos para hacerlo, pero si una persona no tiene cómo pagar una indemnización en la que ha sido condenada va a ser solamente justicia simbólica.

En resumen, este proyecto de ley en los términos planteados no es una respuesta eficaz para una justicia efectivamente reparadora, la justicia reparadora es de la cual hay que hacerse cargo, y el legislador al establecer una medida procesal ineficaz como la imprescriptibilidad está abandonando el deber de establecer siempre garantías para un procedimiento e investigación racional y justo.

El derecho es político y el derecho penal lo es aún más, por lo tanto hay que propender a reparar como corresponde a las víctimas.

#### **4.- Edison Gallardo, abogado, invitado por el diputado Rene Saffirio.**

El señor **Gallardo** señaló que se dirigiría al señor Peña para precisarle que el informe de la ONU califica estos delitos en contra del niño, sobre todo el abuso sexual, como de lesa humanidad e incluso similares a la tortura.

Hizo notar que tampoco era posible restarle responsabilidad al Estado, en su caso había sido abusado dentro de una institución del Estado de Chile que era quien tenía que propender a su protección. Comentó que era uno de los denunciantes de Francisco Jose Cox.

En cuanto a la reparación explicó que se ha discutido con el Ministerio Público, y que lo relativo a programas de acompañamiento requieren de plata y por ello de iniciativa del Presidente de la Republica.

Destacó que en la sala había víctimas que lo escucharon y que se sintieron doblemente vulnerados, que como él sienten que la imprescriptibilidad debe ser un hecho en nuestro derecho penal y que a sus 41 años todavía sufre las devastadoras consecuencias de haber sido abusado a los 6 años y medio por Francisco José Cox. El daño es tan potente que solo 35 años después pudo enfrentar su situación y de nada sirve exponerse públicamente si cuando se pide justicia ésta no existe y los tratamientos y terapias son carísimos.

Mientras tanto su abusador disfruta de todos los beneficios clericales que la iglesia le da, protegido por un Estado, en circunstancias que ha aparecido un listado con 45 de sus compañeros que fueron abusados por esta misma persona.

Mencionó que buscando justicia llegó hasta aquí, que la imprescriptibilidad va a ser una forma de obtener justicia, y paradójicamente los que están luchando exponiéndose no la van a tener, pero cada niño de nuestro país a partir de ahora quedará protegido, que no exista abusador sexual que se atreva a tocarlos, a través de este proyecto de ley va a encontrar justicia y depende de esta Comisión marcar una diferencia en el día del mañana. Nadie va recordar el proyecto de ley e la reforma tributaria, pero si vamos a recordar quienes se dedicaron a proteger a nuestros niños. Esta sería la primera muestra real de que Chile está preocupado de la infancia.

Agregó que resultaba lacerante tener que exponerse públicamente, que la imprescriptibilidad es importante para obtener justicia.

Respecto de la falta de medios para cumplir con las indemnizaciones señaló que las personas siempre tienen un bien y cuando se trabaja jurídicamente los bienes pueden ser embargables en son de una reparación.

La imprescriptibilidad traerá paz y justicia, paz para las víctimas de hoy y justicia para las nuevas víctimas que día a día están apareciendo.

**Una vez finalizadas las exposiciones surgió el siguiente debate en la Comisión.**

El diputado **Saffirio** comentó que la histórica discusión acerca de la naturaleza de la prescripción vuelve a aparecer inevitablemente, se trata de instituciones que los abogados internalizaron profundamente durante su formación que se transforman en inamovibles, en fetiches, tratando luego de salvar situaciones como las que plantea el señor Gallardo buscando que el derecho cumpla su rol en la sociedad, que es responder como sociedad frente a este tipo de abusos y no perpetuarlos, tanto desde el punto de vista de la comisión del delito como del daño que se extiende mucho más allá del momento en que el delito se comete.

Hizo notar que a raíz del convenio de colaboración celebrado entre el Ministerio Público, institución responsable de la persecución del delito, y la iglesia católica, extrañó de las víctimas una postura mucho más coherente y fuerte.

Mientras se suponía que se estaba preparando la formalización de dos cardenales que debían en el plazo de nueve días ser imputados por su participación como encubridores en delitos de abusos sexuales a menores, ocurre una sucesión de hechos que dan a entender que estamos en presencia de una maniobra aberrante para proteger a dos cardenales, el Errázuriz y el cardenal Ezzati, por su rol de encubridores, de la peor forma aun a riesgo de destruir la credibilidad de una de las instituciones más importantes como es el Ministerio Público, sacando al fiscal a cargo de la investigación, generando una disputa interna entre dos fiscales recíprocamente acusados entre sí y con ausencia de liderazgo de un Fiscal Nacional incapaz de conducir los procesos que se dan dentro una institución tan relevante.

Podemos debatir en profundidad sobre la prescripción pero no vaya a ser cosa que aún declarando imprescriptible los delitos sexuales a menores, la corrupción esté tan internalizada en el Ministerio Público que la norma no pase a ser más que una buena declaración de intenciones.

El proyecto está bien acotado respecto de declarar la imprescriptibilidad de un conjunto determinado de delitos pero tendrá que aplicarse en el contexto de un Estado, y el espectáculo visto durante la última semana lo alarma porque puede ser un factor que afecte aún más la persecución de este tipo de delitos aún contando con la imprescriptibilidad.

El diputado **Boric** comentó que a propósito de lo dicho por el diputado Saffirio, como Frente Amplio tenían la intuición correcta cuando intentaron la destitución del Fiscal Nacional por parte de la Corte Suprema debido a esta pulsión permanente que tiene de defender ciertas instituciones aún a costa de la justicia y de la propia destrucción en prestigio y credibilidad de estas instituciones en el largo plazo. Hay una visión cortoplacista por parte del Fiscal Nacional que se ratifica con este acuerdo frustrado con la iglesia católica de la que había dado cuenta también en los casos de corrupción de la política y en sus declaraciones en su cuenta pública anual.

Comentó que a partir del testimonio del señor Gallardo se podía visualizar cómo la declaración de imprescriptibilidad colabora en un aspecto psicológico a la sensación de

que, se logre o no una condena, existe la posibilidad de hacer justicia, es posible intentarlo, y eso ya es sanador en cierta perspectiva.

Eso no es algo propiamente jurídico pero es un elemento fundamental de este proyecto y concordó con el diputado Saffirio y el señor Hermosilla en que quienes estudian derecho pueden poner las normas como dogma. Pidió al señor Peña que indicara cuál era su propuesta, la solución que propone para conseguir la reparación.

Sugirió que el proyecto se vote prontamente pues es probable que los argumentos se repitan.

El diputado **Gutiérrez** recordó una querrela que había presentado a mediados de los 90 por una persona que había desaparecido y por la muerte de otra, en la que explicó a la magistrado a cargo de la causa que iba a aplicar la prescripción la importancia que tenía investigar la causa. Durante esa conversación la magistrado dijo que ella había aprendido que todos los delitos prescriben y que los tratados internacionales que le citaba tampoco había sido objeto de estudio en la universidad. A propósito de eso descubrió que la dogmática iba a representar un problema e insistió en que al menos le permitieran investigar.

La dogmática penal a veces muy potente e impide ver que el Estado es responsable de muchos delitos y sobre todo los de lesa humanidad, y a propósito de este debate se preguntaba qué pasaría si este proyecto de ley hubiese sido con respecto a los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra y se planteara el mismo artículo transitorio que tiene este proyecto de ley, sería inútil, no habría justicia.

El proyecto no va a tener eficacia sobre las vidas de las personas que han dado su testimonio, de cierto modo es ineficaz si se sigue mirando desde la perspectiva sustantiva, ello impide hacer justicia.

Instó a buscar la forma de hacer ciertas distinciones, puesto que si la Convención de los derechos del niño entró en vigencia en septiembre del 90, a lo menos esos delitos deberían ser imprescriptibles de ahí en adelante, desde que la prioridad está en los niños y niñas. Que a lo menos se establezca que de ahí para adelante se pueden investigar todos estos ilícitos, puesto que desde ahí está establecido constitucionalmente el interés superior del niño.

Estimó que si hay autores que operan dentro de una organización que les puede asegurar impunidad, aunque no sea el Estado y sus agentes el hechor, se trata de un autor especial y es dable considerarlos delitos de lesa humanidad. Los sacerdotes han contado con el resguardo de la iglesia católica y no se trata de un autor aislado.

Finalmente, exhortó a la Comisión a buscar una solución para el caso de los abusadores sexuales de menores que fueron a su vez abusados siendo niños o adolescentes, pues fueron víctimas a su vez y nadie los defendió. Propuso buscar alguna forma que considere aquello, como una atenuante o alguna otra fórmula, más aun si se está explorando la posibilidad de dotar de retroactividad a la imprescriptibilidad.

El diputado **Hirsch** consideró que se trataba de un tema muy importante que dice relación con un daño profundo y, entendiendo que el proyecto está acotado al tema

de la imprescriptibilidad, se trata de algo mucho más complejo y profundo que no es sólo un tema legislativo, sino que es un tema de sociedad. Todos comparten las palabras del señor Gallardo en el sentido que nuestros niños estén protegidos, pero no van a estar protegidos por la existencia de esta ley sino que va a existir la posibilidad de que se investigue si llega a suceder algo tan terrible como los casos que hemos conocido como sociedad, estarán protegidos cuando se produzca un cambio profundo en que no se proteja a los poderosos bajo un manto de impunidad que no dice solo relación con que no se investigue, sino que con los acontecimientos que hemos visto entre la Fiscalía y la jerarquía de la iglesia católica.

Estarán protegidos si es que además de una ley de este tipo hay cambio cultural, educacional, de formación, de valores, etcétera, que eviten este tipo de situaciones o que al menos las disminuyan o que si se producen tengamos la garantía de que va a haber la debida investigación y que no va a haber acuerdo entre los poderosos como estamos acostumbrados este país en cualquiera de los temas que tocamos. La protección definitiva va mucho más allá de tener o no tener esta ley, sin perjuicio de ello no le quita mérito a lo que se está discutiendo.

Entendiendo que el proyecto apunta a la imprescriptibilidad para la denuncia, preguntó qué ocurría en los casos en que se inicia una investigación y luego se archiva, si es que se podría reabrir esa investigación permanentemente hasta la muerte el imputado, o es razonable que si hay un tiempo establecido para investigar y condenar o sobreseer en definitiva al imputado.

El diputado **Alessandri** acotó que disiente de muchos de los planteamientos expuestos por el señor Peña pues muchas de las cosas que dijo pueden haber sido muy hirientes para las víctimas, porque cuando asevera que para los delitos comunes la imprescriptibilidad es ineficaz olvida que no solamente existe la persecución jurídica del delito sino que también el hecho de poder presentar la denuncia y poder concurrir a los tribunales ya es sanador más allá del resultado, el solo hecho de poder interpelar al victimario, de poder denostarlo, de poder contarle a la opinión pública que lo que ocurrió. Instó a ser cuidadosos con las opiniones especialmente cuando hay víctimas presentes.

Pidió al señor Hermosilla que, más allá de sus deseos de justicia, precisara el sustento jurídico y legislativo a la posibilidad de introducir retroactividad a esta norma.

Concordó con el diputado Boric en cuanto a solicitar celeridad para este proyecto, sugirió empezar a vota en particular lo antes posible.

El diputado **Walker (Presidente)** recordó que este proyecto esta con suma urgencia, y propuso que en la sesión del próximo martes 14 de mayo se cite a votar este proyecto hasta total despacho. Se fijó como plazo para presentar indicaciones el lunes 13 de mayo a las 17:00 horas. **Acordado.**

Preguntó al señor Hermosilla como regularía el artículo transitorio si fuera legislador toda vez que hizo notar la posibilidad de dotar de retroactividad a la norma, y que el proyecto que viene del Senado establece que para los hechos delictivos cometidos con anterioridad a la publicación de la ley continuará vigente el artículo 369 quater, y ello luego de una lata de discusión por cuanto este punto fue muy controvertido allí, donde finalmente no se dotó de retroactividad a la imprescriptibilidad, sin perjuicio que los

hechos cometidos durante la vigencia del artículo 369 quater siguen teniendo expresamente esa regla de suspensión de la prescripción. Pidió que sugiriera una redacción que no inhiba en ningún punto la posibilidad de investigar los delitos y los abusos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

La señora **Ortiz, Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público**, en relación a que la imprescriptibilidad podría constituir una falta de incentivo, precisó que ello no ha sido así, muy por el contrario, y respecto a la argumentación que pueden hacer los fiscales en base a las convenciones y el derecho internacional de los derechos humanos comentó que incluso sin normas existen algunos fallos que ofreció aportar en que los fiscales han alegado con la argumentación de la Convención de los derechos del niño que el nuevo estatuto del artículo 369 quater se puede aplicar a hechos anteriores a su entrada en vigencia el año 2007. Puntualizó que no se trataba de todos los fiscales y que no siempre tienen resultados favorables, pero que es parte de un proceso nuevo y que todos están aprendiendo.

Respecto de la pregunta relativa a los archivos, hizo notar que la propuesta no establece nada respecto de ello, y agregó que las causas permanecen archivadas mientras no hay nuevos antecedentes, de modo que cuando los hay se reabre y se investiga.

Fue enfática en señalar que el Fiscal Nacional recientemente había señalado que todos los hechos se investigan aunque estén prescritos, la indicación desde la Fiscalía Nacional es que se investigue todo, sin perjuicio que después finalmente se decrete el sobreseimiento o la prescripción lo que constituye una decisión del tribunal.

En cuanto a considerar estos delitos de lesa humanidad, señaló que más allá de la declaración de la ONU al respecto, que es bien clara, estos delitos tienen una estructura similar a los delitos de lesa humanidad en cuanto se trata una sociedad de una sociedad estructuralmente discriminatoria, heredera de una sociedad muy patriarcal, donde las familias reproducen el modelo del estado y el modelo jerárquico de sociedad. Al interior de la familia se vive entonces una situación muy similar, al igual que en el estado dictatorial se hace todo para que esto no se sepa. La ONU es clara en su planteamiento porque analiza el contexto en que se dan estos delitos y por eso los consideran de lesa humanidad, tal y como lo hace Fiscalía, porque estos delitos y su asesoría están radicados precisamente en esta unidad que es de derechos humanos, violencia de género y delitos sexuales como parte de una decisión del Fiscal Nacional que incorporó estas otras dos temáticas a una unidad que originalmente era de sólo delitos sexuales.

Como representante del Ministerio Público, y a propósito del convenio con la iglesia católica que se ha mencionado, reiteró el compromiso del Fiscal Nacional y de todos los abogados y abogadas de la unidad de investigar estos delitos hasta la última instancia.

El señor **Juan Pablo Hermosilla, abogado, académico y miembro del directorio de la Fundación para la Confianza**, comentó como consideración general que se ha reparado en el tema del poder durante el debate de hoy, y afirmó que el sistema judicial no está hecho para juzgar gente poderosa, se encarcela a los pobres, a

los poderosos se les aplican medidas alternativas. Recordó que a quienes vendían películas pirateadas se aplicaban normas relativas a delitos tributarios, y que a nadie ha escandalizado que en el marco de las investigaciones a los cardenales Errazuriz y Ezzati se hayan ocultado burdamente documentos en el Arzobispado de Valparaíso y presentado recursos que fueron resueltos a su favor por los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que están siendo investigados.

Se preguntó hasta qué punto el garantismo no ha sido una construcción de defensa para las garantías de los poderosos.

En lo concreto, respecto de la retroactividad, precisó que no se afecta ninguna garantía si es que expresamente se establece una norma que prescriba que en las causas anteriores a la entrada en vigencia de esta la investigación será obligatoria, y eso es lo que está haciendo la mitad de la jurisprudencia fundándose en que existe un derecho reconocido internacional que es el acceso a la justicia que no prescribe y esas personas tienen derecho a la investigación.

Quien es inocente y se le acusa de hechos muy antiguos, también va a querer que se investigue, la prescripción juega para ambos lados, al único que protege es al que cometió el delito.

Desde el punto de vista de la obligación de investigar no requiere más que una norma que lo diga expresamente de modo de evitar la incertidumbre de la jurisprudencia contradictoria, aun cuando teóricamente no lo requeriría. De otro modo se invita a la autotutela.

En cuanto a la retroactividad de la prescripción estimó que se trata de un tema de fondo en que hay problemas con el Tribunal Constitucional, sin perjuicio que es posible estimar que la prescripción, en tanto entidad formal que impide la persecución, no se infringe el principio de retroactividad penal porque no se establece una responsabilidad penal, no se establecen hechos base de responsabilidad penal ni penas, por eso los temas de prescripción pueden ser retroactivos.

El problema que habrá será práctico con el Tribunal Constitucional, porque técnicamente no es difícil, bastaría con decir y respaldarse que la prescripción es una cuestión formal o adjetiva que no es fundante de responsabilidad penal y que, por lo tanto, puede ser retroactiva. No existe garantía a ser juzgado, la garantía del debido proceso es para las víctimas y para el imputado en tanto no se afecten las pruebas, y justamente en este caso no hay problema de prueba.

Solamente si se sostiene que la prescripción contiene elementos sustantivos fundantes de responsabilidad no puede ser retroactiva.

No hay problema con la prueba, no se afecta ninguna garantía con el tema de la imprescriptibilidad porque estos delitos no tienen prueba, no hay testigos no está filmado, no hay fotos, aun cuando haya ocurrido recién. El problema de falta de prueba o dificultades está presente en todos estos delitos y más allá del tema el tiempo. Incluso el principio inocencia no se ve debilitado, y nadie pretendería hacerlo tampoco, así, si se juzga según esta ley con efecto retroactivo a una persona por un abuso que ocurrió hace 40 años, no significa que se le condenará por sospecha, al revés, sigue teniendo el

derecho a defensa y el principio de inocencia a su favor, y será la parte acusadora que tendrá que acreditar los hechos. Destacó que desde el punto de vista de la criminalística se ha avanzado mucho respecto de encontrar indicios tanto en la conducta del acusado y de la víctima.

Hizo hincapié que en ningún caso se pretende rebajar el estándar de garantías, el principio de inocencia es fundamental nadie puede ser condenado por un delito si no tenemos la convicción más allá de la duda razonable de que ocurrió el delito, de hecho, técnicamente la defensa se fortalece con los años y no al revés.

Finalmente, respecto de la reparación, señaló que para poder mantener la libertad en las sociedades liberales necesitamos la herramienta penal, y como ejemplo instó a observar que ocurrió como sociedad cuando se le dio, de hecho, a la religión católica un manto de impunidad, porque eso es un incentivo a la comisión de delitos.

Las personas buscan en primer lugar reparaciones simbólicas, primero ser escuchadas, que se investigue.

Respecto del archivo, precisó que si se decreta la imprescriptibilidad y empieza periódicamente a reabrirse hay una forma de detenerlo si se está haciendo de mala fe que es mediante una petición de sobreseimiento definitivo que produce efecto cosa juzgada. Hay formas de evitar que la herramienta sea pervertida de mala fe. Ofreció enviar una propuesta por escrito.

El señor **Sebastián Valenzuela Agüero, Jefe División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**, hizo notar que el proyecto aborda un solo aspecto respecto de este tipo de delitos y no pretende ser una solución integral a este fenómeno.

Respecto del caso en que se trate de un adolescente quien perpetra estos delitos, recordó que durante la discusión en el Senado se debatió al respecto y se zanjó el asunto excluyendo del proyecto una regulación especial respecto al régimen penal adolescente pero a condición de que en el proyecto que actualmente también está viendo el Senado sobre el nuevo servicio de reinserción social juvenil donde se modifica la ley de responsabilidad penal adolescente se explore ahí una norma especial que no sea la imprescriptibilidad, porque también atenta contra principios de la convención de no perseguir indefinidamente responsabilidades por hechos que se cometieron siendo menores de edad pero donde claramente los plazos de prescripción se amplíen, porque los actuales son insuficientes para este fenómeno.

Agregó que es posible considerar estos delitos como de lesa humanidad, el relator para la tortura en su informe del año 2016 así lo considera, y desde el punto de vista de la ciencia hay aspectos que día a día se están descubriendo sobre estos delitos que claramente los ubican fuera de los delitos comunes. Es eso y no la gravedad lo que subyace a una regulación especial, y por ello ésta no es extrapolable a delitos como el homicidio. La real ineficacia parte cuando develada la situación no hay más que enfrentarse a la prescripción.

El gran tema, más que la imprescriptibilidad es el de la retroactividad. En este punto instó a distinguir entre la voluntad real de hacer aplicación del acceso a la justicia versus los efectos que se pueden producir a la hora de declarar la retroactividad, pues tal

como se tuvo en cuenta en el Senado para no incorporarla, nueve profesores se opusieron a ella y solo uno de ellos estuvo a favor, e incluso ese profesor dijo que su análisis chocaba con una prognosis negativa porque declarar la retroactividad puede conllevar a que en los casos que el día de mañana se conozcan retroactivamente, esta norma sea declarada inaplicable y se paralizen los juicios, caso a caso. El efecto inverso que se puede producir entonces es que gatilladas las denuncias vayan a parar al Tribunal Constitucional donde puede haber una paralización. Y más aún, yendo a la opinión que podría tener de fondo el Tribunal Constitucional, se tuvo a la vista un fallo de agosto del 2018 donde abordó, a propósito de otro caso, el tema de la imprescriptibilidad y reconoció que ésta era una garantía incorporada en la Constitución.

Incluso se exploró la opción de desarrollarlo en una ley interpretativa pero se desechó en cuanto no se estaba en presencia de la hipótesis de aquellas leyes, esto es que norma interpretada sea confusa, o de hacer una reforma constitucional, pero se topaba con el estatuto constitucional aplicable a los hechos cuando sucedieron, es decir, una especie de irretroactividad constitucional.

El análisis final del Senado no dice relación con una cuestión de voluntad sino con una cuestión de efectos. Incluso se analizaron otras hipótesis que fueron mencionadas por profesores respecto de que de abordar expresamente la retroactividad, algunas personas asesoradas jurídicamente podrían autodenunciarse para que se declarara el término de la causa en virtud de la prescripción días antes de la entrada en vigencia de la ley.

Con todo, queda claro que el proyecto nos pone a la altura de lo que está sucediendo en algunas legislaciones en materia delitos sexuales o incluso en delitos contra la vida.

El señor **James Hamilton, médico**, agradeció todas las intervenciones puesto que en realidad las posturas a favor y en contra en la realidad son todas posturas a favor porque están buscando el bien común.

Desde lo práctico, precisó que la ley en discusión va a regir para el futuro, y operará en un país que será diferente, puesto que el cambio ya lo van a haber logrado.

Instó a dotar de retroactividad la ley, el momento es ahora, porque es algo que tarde o temprano va a ocurrir, y más allá de los problemas que se puedan avizorar respecto de que se recurra o no al Tribunal Constitucional, pidió que dejaran ese espacio a la ciudadanía para que pelee por sus derechos.

El señor **Juan Peña** quiso dejar en claro que no quería que quedara la sensación respecto de las víctimas de que su postura tenía por objeto defender a los agresores sino todo lo contrario, de hecho desde el equipo de trabajo con el diputado Díaz las propuestas legislativas que más orgullo le generan son la reforma constitucional en materia de infancia que esta misma comisión fortaleció y el proyecto de ley que reemplaza al Sename en cuanto a la protección especializada donde se abordaron muchos temas relativos a abusos.

Respecto de cuál es su propuesta concreta para garantizar de mejor forma el derecho al tiempo, sugirió establecer programas de acompañamiento para la

recuperación de la salud de las víctimas, además de modificar los artículos 94 y 97 del Código penal. El primero de ellos establece la prescripción de la acción penal y el segundo de la pena de manera que se amplíe el plazo de prescripción para estos delitos pero tanto de la acción penal como de la pena, y que se establezca un plazo especial, por ejemplo, de 15 años como está establecido para los crímenes que tienen una pena de presidio perpetuo.

Además sugiere mantener el artículo 369 quáter y modificar el plazo actual de suspensión hasta los 18 años de edad y extenderlo hasta los 28. Si se hacen cálculos es posible dar con plazos relativamente razonables.

El derecho penal es útil pero tiene el defecto de llegar siempre, las soluciones que hay que abordar para proteger a las víctimas tienen que llegar antes del derecho penal.

### **Sesión N° 101 de 14 de mayo de 2019.**

El diputado **Walker (Presidente)** recordó que la Comisión estaba citada para votar hasta total despacho el proyecto.

#### **Proyecto de ley**

**Artículo 1°.-** *Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:*

1) *Agrégase el siguiente **artículo 94 bis**:*

*“Artículo 94 bis.- No prescribirá la acción penal respecto de los crímenes y simples delitos descritos y sancionados en el artículo 142, inciso final, en relación con la violación; los artículos 150 B y 150 E, ambos en relación con los artículos 361, 362 y 365 bis; los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter; el artículo 411 quáter en relación con la explotación sexual; y el artículo 433, N° 1, en relación con la violación, cuando al momento de la perpetración del hecho la víctima fuere menor de edad.”.*

#### **Indicaciones**

1.- Del diputado Meza al numeral 1 del artículo 1° para modificar el artículo 94 bis propuesto intercalando entre la frase “367 ter” y la palabra “el”, la frase “**372 bis**”.

2.- De los diputados Walker y Saffirio al numeral 1 del artículo 1° para modificar el artículo 94 bis propuesto agregando a continuación de “367 ter” lo siguiente: “, **372 bis y 374 bis, inciso primero**”.

3.- Del diputado Walker para reemplazar la frase “en el artículo 142, inciso final, en relación con la violación” por el siguiente texto: “en los artículos **141 inciso final** y 142 inciso final, ambos en relación a la violación”.

El diputado **Walker (Presidente)** explicó que estas indicaciones recogen las observaciones que habían hecho algunos abogados penalistas y la representante del Ministerio Público respecto de algunos artículos que estaban excluidos y que contemplan violación con homicidio en el artículo 372 bis, comercialización de pornografía infantil en el artículo 374 bis inciso primero y secuestro en el artículo 141 inciso final.

El señor **Hernan Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos**, recordó que al reactivar este proyecto en el Senado, el Ejecutivo tenía contemplado un amplio número de delitos, como los que se sugiere incorporar ahora, pero producto del debate ahí generado se excluyeron algunos por razones de carácter técnico que Sebastián Valenzuela explicará.

El señor **Sebastian Valenzuela, Jefe División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**, precisó que del tenor de las indicaciones hay tres delitos que se está proponiendo incorporar al catálogo, esto es, el artículo 372 bis violación con homicidio, artículo 374 bis comercialización de material pornográfico infantil y el artículo 141 inciso final que está relacionado con el secuestro calificado.

Reiteró que estos tres delitos estuvieron incorporados en el proyecto que estaba tramitando el Senado donde fue objeto de análisis, y producto de ese debate se decidió no considerarlos por las siguientes razones.

Respecto del **artículo 372 bis, esto es, violación con homicidio**, se argumentó que en caso de estimarse un delito consumado hay una evidencia del delito donde no está subyacente el problema de la invisibilidad de ese delito. No obstante ello, la indicación que sugiere incluirlo se plantea sobre la hipótesis de que pudiese haber frustración o grados imperfectos del delito, pero ello también fue objeto de debate y lo que se señaló es el artículo 372 bis no es un delito autónomo sino que simplemente regula un concurso material de delitos, es decir, no hay un delito nuevo sino que regula la penalidad cuando concurren conjuntamente el delito de violación y el delito de homicidio, y siendo así señala la doctrina conteste al respecto, sólo opera cuando está consumado. Si hubiese una violación consumada seguida de un homicidio frustrado no es aplicable el artículo 372 bis porque solamente está construido para solucionar problemas de penalidad cuando ambas figuras son cometidas en grado de consumadas.

Por ende, al tener solo aplicación respecto de delitos consumados ambos, y dada la evidencia del delito, no está subyacente el fenómeno que justifica el catálogo excepcionalísimo de delitos imprescriptibles, el homicidio es el más evidente de los delitos. Si se trata de homicidio frustrado no tiene aplicación el artículo 372 bis, se aplica el delito de violación, 361 ó 362 del Código penal, y el delito de homicidio.

Respecto del delito del artículo **374 bis, esto es, comercialización de material pornográfico infantil**, comentó que el Senado finalmente lo eliminó puesto que se argumentó que en este caso tampoco está subyacente el problema que justifica el

régimen especial ya que es muy difícil imaginar casos en que este tipo de delitos sea recién descubierto 10 o 15 años después de su ocurrencia. Este es un típico delito de flagrancia, frente a quien es sorprendido poseyendo material pornográfico o comercializándolo no hay un problema consistente en que la prescripción atente contra la investigación. Al hacerse el allanamiento la persona es sorprendida teniendo material pornográfico o comercializándolo.

En lo que concierne a la incorporación del artículo **141 inciso final** hay una explicación de la doctrina, porque que el artículo 141 regula el **secuestro** y el artículo 142 la sustracción de un menor de edad. Este 142, que sí está en el catálogo, no se refiere a la privación de libertad como el 141, sino que habla de sustracción. Esa diferencia que emplea el código, esto es, que respecto del adulto tipifica la privación de libertad y respecto al menor de edad la sustracción, lleva a que una parte minoritaria de la doctrina diga que en el caso de los menores de edad como lo que se sanciona es la sustracción, se requiere que ese menor esté dentro de una esfera de resguardo, lo que quiere decir que si un menor es privado de libertad pero es un menor de edad indigente no operaría el artículo 142 de la sustracción de menores, sino que operaría el artículo 141 en base a esa doctrina minoritaria.

Al respecto, el Ejecutivo propuso incorporar también el artículo 141 previendo cualquier caso en que se aplicara esa interpretación, sin embargo todos los profesores en la discusión en el Senado plantearon que una doctrina muy minoritaria y que se entiende la sustracción como una privación de libertad simplemente en los mismos términos del artículo 141 y que, por lo tanto, siempre iba a aplicar el artículo 142, sustracción de menores, quedando la figura cubierta.

Comentó que el Ejecutivo instó a que el debate quedara plasmado en la historia de la ley para que no quepa duda que se consideró el artículo 142 en cuanto sanciona la privación de libertad a un menor de edad tenga o no una esfera de resguardo o un ámbito de protección.

La señora **Catalina Duque, asesora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público**, comentó que durante la sesión anterior el Ministerio Público abogó por la inclusión en el catálogo de imprescriptibilidad el artículo 372 bis, violación con homicidio, y pese a que se ha dicho que es parte de la doctrina el concepto de que sólo estaríamos ante una situación consumada, es necesario dar la posibilidad que ello se intente en caso de frustración o tentativa, y no que se bloquee de plano la posibilidad porque existe una doctrina que no se puede aplicar.

Acotó que han intentado en algunos casos aplicación en caso de frustración, con aciertos o desaciertos, pero se ha establecido como una posibilidad, más allá que en doctrina pueden haber algunas discusiones, hay posiciones mayoritarias y minoritarias, pero incluso éstas cambian en el tiempo por parte de un mismo autor. Como Ministerio Público persisten en la incorporación de este delito.

En relación al 374 bis, relativo al material pornográfico infantil, precisó que hay dos incisos, el primero se refiere a la comercialización y el segundo al almacenamiento malicioso, esto es, con dolo directo.

Planteó que se ha dicho que es un delito de flagrancia, pero hay muchas víctimas cuyas imágenes llevan 25 años dando vueltas, hay mucha pornografía que hoy vemos de personas que hoy son adultas hace mucho tiempo. Ocurre muchas veces que a partir de una develación tardía surge de la investigación este material y no parece adecuado privar a las víctimas el poder perseguir esos otros delitos de los cuales fue objeto.

En cuanto al artículo 141, secuestro, mencionó que la doctrina que señaló el Ministerio de Justicia como minoritaria, es la doctrina que el Ministerio Público aplica para distinguir sustracción de secuestro, entendiendo que hay sustracción de un niño, niña o adolescente si se lo saca de la esfera de resguardo. Por ello sí es posible y aplicable en esta materia un secuestro, en su inciso final.

Concluyó que la postura del Ministerio Público es que estos delitos sean incluidos, esto es, los artículos 372 bis, 374 bis en sus dos incisos, y el 141 inciso final, puesto que además están contemplados en la Ley N° 21.057 que regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, recientemente aprobada por el Congreso, de modo de dotar de coherencia al sistema.

El diputado **Díaz** pidió que se explicara nuevamente la diferencia entre secuestro y sustracción de menores.

Respecto del artículo 374 bis, relativo al material pornográfico infantil, señaló que todas las hipótesis que plantea el Ministerio Público siguen siendo casos de flagrancia, así el material lleve 20 años almacenado, sigue siendo material pornográfico infantil y al descubrirse hay flagrancia y por ende no tendría problemas con la prescripción.

En cuanto al 372 bis, acotó que no se trataba de un tipo penal distinto sino un concurso material de delitos, por ende, no se entiende la incorporación de este concurso material de delito en calidad frustrado de manera autónoma, porque la violación ya está dentro de los delitos que se declaran imprescriptibles.

El diputado **Soto, don Leonardo**, precisó que el artículo 374 bis contempla varios delitos con distintas penalidades, algunas muy bajas. Preguntó si la penalidad de los delitos, es decir, su gravedad es relevante en este punto, porque el Tribunal Constitucional ha tratado la relación entre la gravedad los delitos y los tratamientos seccionales que se le dan.

El señor **Valenzuela** reiteró la explicación respecto del secuestro y la sustracción de menores, precisó que el artículo 141 que regula el secuestro simple y calificado habla de la privación de libertad, y luego el artículo 142 al hablar de un menor de edad no emplea el término privar de libertad sino que se refiere al que sustrae, ahora bien, como hay una diferencia la doctrina ha interpretado que al haber sustracción ésta solo es posible cuando el menor está dentro de una esfera de resguardo, lo que se sustrae se extrae de un ámbito de protección. Se ha dicho entonces que el tipo penal del 142 requiere que el menor esté en una esfera de resguardo, y si ese menor no tiene ninguna condición material ni orgánica dentro de una estructura familiar, cierto sector de la doctrina minoritario, y también el Ministerio público como se ha señalado, entienden

que no hay una sustracción del artículo 142 sino que se aplica el 141, discusión que para efectos de resultado es bien baladí porque las penas son las mismas. El debate consiste en si se incorpora el secuestro en el catálogo, y recordó que el Ejecutivo lo incluyó originalmente para no tener problema de interpretación y que se argumentara de ese modo por la defensa.

Si efectivamente el Ministerio Público tiene esa tesis y para lograr el resguardo efectivo, recomendó que se incorpore. Para parte de la doctrina será superfluo y para otra es adecuado para contemplar todas las hipótesis.

En cuanto a la duda del diputado Soto en relación a la penalidad, reiteró que es un tema central el considerar que la gravedad del delito no es lo que justifica este régimen excepcional sino las características que subyacen a la condición de víctima como tal, y eso es independientemente de la pena, pues de otro modo no habría objeción a que incluyera también el homicidio.

Agregó que ese fenómeno aparentemente no se da en los delitos del 374 bis, relacionados con pornografía infantil, porque lo que se sanciona no es una conducta sexual frente a otro, que es un menor de edad, sino que la tenencia, distribución o comercialización de ese material. Además, los casos que menciona el Ministerio Público son delitos actuales y tampoco está presente el problema práctico que subyace en los otros delitos en cuanto los tribunales dicen que están prescritos. Aquí basta que se incaute a quien tiene pornografía infantil para que esté actualmente cometiendo el delito.

En cuanto al artículo 372 bis y los tipos penales complejos insistió en que no es un tipo penal nuevo sino una regla de concursos y habla directamente de la violación y del homicidio, y la violación ya queda siempre cubierta, sea del artículo 361 o 362, por ende no hay necesidad de incorporar el 372 bis.

La señora **Duque** insistió en que las normas legales deben concordar y ser sistemáticas, pues se vuelve complejo luego a nivel jurisprudencial estas diferencias en cómo abordamos a la víctima y cuáles son los catálogos de la protección que se le da. No hay sistematicidad en relación al trato a la víctima.

En relación a la consulta del diputado Soto en cuanto a la penalidad del artículo 374 bis, compartió lo expuesto por el señor Valenzuela, y acotó que si bien pueden considerarse bajas las penas, la protección adicional es coherente con los bienes jurídicos que se protegen, y en relación a la flagrancia o no precisó que no ha habido mayor análisis en relación a este tema a nivel jurisprudencial, pero no le cabe duda que el día que se dicte esta ley se van a levantar los espacios de duda si es que no se incorpora.

El señor **Leonardo Estradé-Brancoli, asesor del diputado Meza**, precisó que la incorporación del artículo 372 bis, violación con homicidio, era adecuada, incluso el catálogo considera el robo con violación, por ende, la violación con homicidio también tendría que contemplarse más allá de que se trate de un concurso material, pero lo primero que va a decir la defensa de un violador homicida es que se trata de una violación con homicidio y no de una violación. Hay que incorporarlo y así evitar una interpretación que vaya en contra del *in dubio pro victima*.

En lo concreto comentó un caso de una violación con homicidio de una niña descubierto al límite de la prescripción al que los tribunales le aplicaron la media prescripción, por ende es importante incluirlo en el catálogo. No daña incorporar el artículo 372 bis y puede dañar a las víctimas el no incorporarlo.

Sometidas a votación la **indicación del diputado Meza** al numeral 1 del artículo 1° para modificar el artículo 94 bis propuesto intercalando entre la frase “367 ter” y la palabra “el”, la frase “372 bis”, **con la parte de la indicación de los señores Walker y Saffirio, que agrega igualmente el mismo artículo 372 bis**, se tuvieron por **rechazadas** por no reunir mayoría de votos. (5-4-3)

Votaron a favor los señores diputados Matías Walker (Presidente) Gabriel Boric, Hugo Gutiérrez, Rene Saffirio y Leonardo Soto.

Votaron en contra las señoras y señores diputados Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Tomas Hirsch y Paulina Nuñez.

Se abstuvieron los señores diputados Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz y Gonzalo Fuenzalida.

Sometida a votación la **indicación de los diputados Walker y Saffirio** al numeral 1 del artículo 1° para modificar el artículo 94 bis propuesto en la parte que agregan a continuación de “367 ter” el artículo “374 bis, inciso primero”, fue **rechazada** por mayoría de votos. (5-7-0)

Votaron a favor los señores diputados Matías Walker (Presidente) Gabriel Boric, Hugo Gutiérrez, Rene Saffirio y Leonardo Soto.

Votaron en contra las señoras y señores diputados Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida, Tomas Hirsch y Paulina Nuñez.

Sometida a votación la **indicación del diputado Walker** para reemplazar la frase “en el artículo 142, inciso final, en relación con la violación” por el siguiente texto: “en los artículos 141 inciso final y 142 inciso final, ambos en relación a la violación”, fue **aprobada** por unanimidad. (12-0-0).

Votaron a favor las señoras y señores diputados Matías Walker (Presidente), Jorge Alessandri, Gabriel Boric, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Tomas Hirsch, Paulina Nuñez, René Saffirio y Leonardo Soto.

Sometido a votación el **artículo 1°, numeral 1**, fue **aprobado** por unanimidad. (12-0-0).

Votaron a favor las señoras y señores diputados Matías Walker (Presidente), Jorge Alessandri, Gabriel Boric, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Tomas Hirsch, Paulina Nuñez, Rene Saffirio y Leonardo Soto.

#### **Numeral 4)**

El **artículo 1° numeral 2** que corresponde votar, actualiza la referencia del artículo 369 vigente, incorporando referencia al artículo 369 quinquies nuevo. Por ende la Comisión decide votar primero el **numeral 4** del artículo 1° del proyecto que incorpora el artículo 369 quinquies nuevo.

#### **Proyecto de ley**

**Artículo 1°.-** *Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:*

**4)** *Agrégase, a continuación del artículo 369 quáter, el siguiente artículo 369 quinquies:*

*“Artículo 369 quinquies.- Tratándose de los delitos establecidos en el artículo 142, inciso final, en relación con la violación; los artículos 150 B y 150 E, ambos en relación con los artículos 361, 362 y 365 bis; los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter (\*); el artículo 411 quáter en relación con la explotación sexual; y el artículo 433, N° 1, en relación con la violación, perpetrados en contra de una víctima menor de edad, se considerarán delitos de acción pública previa instancia particular y se registrarán por lo dispuesto en el artículo 54 del Código Procesal Penal desde que el ofendido por el delito haya cumplido los dieciocho años de edad, si no se ha ejercido antes la acción penal.*

*Siendo delitos de acción pública previa instancia particular, el Ministerio Público no podrá actuar de oficio en los términos del inciso cuarto del artículo 54 del Código Procesal Penal, cuando el ofendido pueda libremente denunciar estos ilícitos a la justicia, al Ministerio Público o a la policía.”.*

#### **Indicaciones**

**1.-** Del diputado **Walker** al numeral 4 del artículo 1°, para reemplazar la frase “en el artículo 142, inciso final, en relación con la violación” por el siguiente texto: **“en los artículos 141 inciso final y 142 inciso final, ambos en relación a la violación”**.

**2.-** De los diputados **Walker y Saffirio** al numeral 4 del artículo 1°, para agregar a continuación de “367 ter” lo siguiente: **“,372 bis y 374 bis inciso primero”**.

**3.-** Del diputado **Boric** para **eliminar el inciso final del artículo 369 quinquies**.

La **indicación N°2 de los diputados Walker y Saffirio** es incompatible con lo ya aprobado, por cuanto se rechazó incorporar los artículos que señala en el catálogo del nuevo artículo 94 bis. Se tiene por **rechazada** por el mismo quórum anterior. (5-7-0)

Votaron a favor los señores diputados Matías Walker (Presidente), Gabriel Boric, Hugo Gutiérrez, Rene Saffirio y Leonardo Soto.

Votaron en contra las señoras y señores diputados Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida, Tomas Hirsch y Paulina Nuñez.

El diputado **Boric** comentó que la redacción aprobada por el Senado del artículo 369 quinquies propuesta es confusa e incorrecta. El inciso 4° del artículo 54 del Código procesal penal establece que pese a tratarse de una acción previa instancia particular, si el ofendido está imposibilitado de realizar libremente la denuncia o cuando quienes pudieran formular por él se encontraren implicados en el hecho, el Ministerio Público podrá proceder de oficio, y el inciso 2° del 369 quinquies se contradice y dice que no operará el inciso 4° del artículo 54 cuando el ofendido pueda libremente denunciar estos ilícitos. Corresponde entonces eliminar el inciso 2° del 369 quinquies de modo de permitir al Ministerio Público actuar en el caso de excepción y así impedir la impunidad del hecho.

El diputado **Walker (Presidente)** señaló que ese inciso se enmarca dentro del objetivo del proyecto que dice relación con la confidencialidad para la víctima del delito y por eso es el derecho al tiempo se considera siempre en relación a la víctima y su familia como dueña de ejercer la acción para evitar la victimización secundaria.

El señor **Valenzuela** precisó que el problema radica en que la regla general en Chile es que respecto de delitos contra menores de edad siempre hay acción penal pública y el Ministerio Público apenas tenga noticia puede ejercer de oficio la acción sin esperar una denuncia. Dado que el proyecto establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales hubo un acuerdo que en estos casos, cuando la víctima alcance la mayoría de edad, dado que no tiene ahora una presión sobre la prescripción, quedará exclusivamente en poder de la víctima la decisión de iniciar o no un proceso penal dado que lo puede iniciar en cualquier momento, y mientras eso no ocurra el Ministerio Público no podría intervenir.

Sin embargo el artículo 54 del Código procesal penal señala que en caso de delito de acción penal pública previa instancia particular, o sea, cuando se requiere la denuncia previa de la víctima, si el ofendido se encontrare imposibilitado de realizar libremente la denuncia o cuando quienes pudieran por él se encontraren imposibilitados de hacerlo o aparecieren implicados por el hecho, el Ministerio Público puede proceder de oficio. Se señalaron dos puntos, por una parte que a diferencia del artículo 54 aquí no hay que hacer una referencia necesaria a quienes puedan formularla por él porque la imprescriptibilidad dice relación directa con la víctima ofendida por el delito, por lo tanto el artículo 54 no opera completamente. Por otra parte, surge el problema que según la redacción del artículo 54 el Ministerio Público podría entender que se encuentra imposibilitada de realizar la denuncia la víctima que recién está en un proceso de

reparación y en una terapia, que no está en condiciones psicológicas de enfrentar a la justicia y denunciar el hecho, y ejercer la acción penal en su lugar, en circunstancias que lo que se busca es quede el poder de decisión en manos de la víctima.

Con todo, la redacción no es la más feliz y propuso una redacción alternativa del inciso segundo del siguiente tenor: "Siendo delitos de acción pública previa instancia particular, para efectos de lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 54 del Código procesal penal en ningún caso se considerará que existe imposibilidad de realizar libremente la denuncia de estos ilícitos por la circunstancia que el ofendido no se encuentra en condición psicológica para denunciar los hechos." Con ello se resguarda que cuando la imposibilidad es la condición psicológica no se permita al Ministerio Público ejercer la acción, pero sí puede en otros casos como discapacidad.

El diputado **Boric** propuso explorar una fórmula en que el Ministerio Público éste obligado a preguntar a la víctima para actuar de oficio, pues de otro modo el hecho que el ofendido está imposibilitado de realizar libremente la denuncia no quita que la denuncia sea deseable, y le estamos quitando la facultad al Ministerio Público de iniciarla y, en el fondo, protegiendo al victimario.

El espíritu es evitar la revictimización pero eso no puede ser a costa de la misma justicia.

El señor **Felipe Rayo, asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**, explicó que se busca velar por dos valores, que no exista impunidad y resguardar las facultades que el artículo 54 inciso 4º le entrega al Ministerio Público en esas tres hipótesis, ya sea porque la víctima está imposibilitada de realizar libremente la denuncia, porque quienes lo representan están imposibilitados, o porque están implicados en los hechos. Las dificultades surgen con la primera en cuanto a qué se entiende porque la víctima está imposibilitada de realizar libremente la denuncia.

Debe estarse por una redacción que dé sentido al inciso primero del 369 quinquies que convierte la acción penal pública en una acción pública previa instancia particular entregándole a la víctima el poder de resorte de la acción judicial, de decidir si está o no capacitado o en condiciones de enfrentar un juicio o si eso puede ser incluso contrario a sus intereses. La propuesta del Ejecutivo pretende que no se entienda que el no estar en condiciones psicológicas es un impedimento para realizar libremente la denuncia, pero sí en las otras hipótesis.

La fórmula de solución de requerir el consentimiento de la víctima es una medida incluso más restrictiva, pues si el Ministerio Público tiene noticias de que una persona fue víctima de un delito sexual pero no se conoce su paradero, tendría que obtener su consentimiento para poder actuar. La propuesta del Ejecutivo no requiere ello porque no excluye las otras hipótesis.

La señora **Duque** en cuanto a la propuesta del Ejecutivo, precisó que el término "condición psicológica" es muy amplio en cuanto a las interpretaciones que permite. La propuesta del Senado es confusa, y el incorporar este texto va a generar más confusión que beneficios a la hora de interpretar la norma. Proponen eliminar el inciso segundo del 369 quinquies, pues hasta ahora el artículo 54 en general no ha tenido ninguna complicación y entienden que la entidad de la que habla su inciso cuarto se

refiere a una entidad importante física o psicológica, no así el término “condición psicológica” que no delimita desde qué momento el Ministerio Público puede actuar, genera incertidumbre.

El señor **Valenzuela** precisó que lo que se busca es evitar casos en que las víctimas no quieran iniciar un proceso a lo menos por el momento y el Ministerio Público, ahora bien, si operan los mecanismos internos del Ministerio Público para resguardar ello de manera que la acción penal no vaya en contra los intereses de la víctima, que es el fundamento que está detrás de todo el proyecto, están llanos a que se elimine el inciso segundo, que se recurra a la regla general del artículo 54, pero es importante que en la historia la ley quede establecido que el Ministerio Público tiene que velar en estos casos para que no vaya a ir en contra los intereses de la víctima.

**(3.- Del diputado Boric para eliminar el inciso final del artículo 369 quinquies.)**

Sometida a votación la **indicación del diputado Boric** para eliminar el inciso final del artículo 369 quinquies, fue **aprobada** por mayoría de votos. (9-0-4)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Jorge Alessandri, Gabriel Boric, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Paulina Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto.

Se abstuvieron las señoras y señores diputados **Matías Walker (Presidente)**, Camila Flores, Marcelo Díaz y Tomas Hirsch.

**(1.- Del diputado Walker al numeral 4 del artículo 1°, para reemplazar la frase “en el artículo 142, inciso final, en relación con la violación” por el siguiente texto: “en los artículos 141 inciso final y 142 inciso final, ambos en relación a la violación”.)**

Sometido a votación el **numeral 4 del artículo 1°, con la indicación N°1 del diputado Walker** fue **aprobado** por unanimidad. (13-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados **Matías Walker (Presidente)**, Jorge Alessandri, Gabriel Boric, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Diaz, Camila Flores Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Tomas Hirsch, Paulina Nuñez, Rene Saffirio y Leonardo Soto.

\*\*\*\*\*

**Proyecto de ley**

*Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:*

**2)** *Intercálase, en el inciso tercero del artículo 369, a continuación de la palabra “dispuesto”, la siguiente expresión: “en el artículo 369 quinquies de este Código y”.*

**3)** *Suprímase el artículo 369 quáter.*

Los **numerales 2 y 3 del artículo 1°** del proyecto se tienen por **aprobados** por la misma votación anterior por ser ello coherente con lo aprobado precedentemente. (13-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados **Matías Walker (Presidente)**, Jorge Alessandri, Gabriel Boric, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz, Camila Flores Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Tomas Hirsch, Paulina Nuñez, Rene Saffirio y Leonardo Soto.

\*\*\*\*\*

### **Proyecto de ley**

**Artículo 2°.- Renovación de la acción civil.** *Tratándose de los delitos establecidos en el artículo 142, inciso final, en relación con la violación; los artículos 150 B y 150 E, ambos en relación con los artículos 361, 362 y 365 bis; los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter ; el artículo 411 quáter en relación con la explotación sexual; y el artículo 433, N° 1, en relación con la violación, todos del Código Penal, perpetrados en contra de una víctima menor de edad, la acción civil reparatoria podrá ser deducida por una sola vez, en contra del imputado o del responsable del hecho ajeno, transcurrido el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, entendiéndose renovada la acción civil, cumpliéndose las condiciones señaladas en los dos artículos siguientes.*

**Artículo 3°.- Renovación de la acción civil contra el imputado.** *Se entenderá renovada la acción civil reparatoria en contra del imputado por los delitos señalados en el artículo anterior, si la demanda es interpuesta por la víctima, considerándose por tal sólo aquella establecida en el inciso primero del artículo 108 del Código Procesal Penal, en la tramitación del respectivo procedimiento penal, una vez formalizada la investigación y hasta quince días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del juicio oral.*

*Renovada la acción en los términos señalados en el inciso anterior, ésta se tramitará conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, en particular, las*

contenidas en el Párrafo 2° del Título III del Libro Primero, en todo lo que no sea modificado en este artículo.

Asimismo, también se entenderá renovada la acción civil reparatoria, si es deducida por la víctima del inciso primero del artículo 108 del Código Procesal Penal, respecto del imputado formalizado, cuando el procedimiento penal continuare en conformidad a las normas que regulan el procedimiento abreviado, o que por cualquier causa terminare o se suspendiere sin que sea posible emitir un pronunciamiento acerca de la acción civil, háyase o no interpuesto ésta en el procedimiento penal, siempre que la víctima presente la demanda ante el juzgado de letras con competencia en lo civil en el término de sesenta días contado desde que quede ejecutoriada la resolución que dispusiere la suspensión o terminación del procedimiento penal. Sin perjuicio de lo anterior, una vez que se fije fecha para audiencia preparatoria y transcurra la oportunidad indicada en el inciso primero, sin que la víctima hubiere interpuesto la demanda civil ante el juzgado de garantía competente, se tendrá por extinguida la acción civil reparatoria de forma definitiva, sin poder renovarse más, ni aún si se fija nueva fecha de audiencia.

A su vez, si se procede en los términos del artículo 390 o del artículo 235, ambos del Código Procesal Penal, la acción civil reparatoria se entenderá renovada si la víctima presentare su demanda ante el tribunal civil competente dentro del término de sesenta días siguientes al requerimiento, o a la dictación de la resolución que dispusiere la continuación del procedimiento según las reglas del Título I del Libro Cuarto del Código Procesal Penal, o a la dictación del auto de apertura del juicio oral, según el caso. En esta última situación, la circunstancia de deducirse apelación en contra del auto de apertura del juicio oral no suspenderá el cómputo del plazo señalado.

Cuando se procediere conforme a los incisos tercero o cuarto, la demanda y la resolución que recayere en ella se notificarán por cédula al demandado, y el juicio se sujetará a las reglas del procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

**Artículo 4°.- Renovación de la acción civil contra el responsable por el hecho ajeno.** Podrá renovarse la acción civil reparatoria en contra del responsable del hecho ajeno, por los daños derivados de la perpetración de los delitos señalados en el artículo 2°, si se cumplen las siguientes condiciones:

a) Que el tribunal con competencia penal haya dictado sentencia condenatoria en contra del autor del daño por la comisión de alguno de estos delitos y ésta quede ejecutoriada.

b) Que la acción civil sea deducida por la víctima del inciso primero del artículo 108 del Código Procesal Penal en contra del responsable del hecho ajeno, por los hechos que fundan la condena penal, ante el juez de letras con competencia en lo civil y dentro del término de sesenta días desde que la sentencia condenatoria penal se encuentre ejecutoriada.

*Renovada la acción civil en los términos señalados en este artículo, ésta se tramitará conforme a las disposiciones del juicio ordinario, debiendo acreditarse respecto del demandado todos los presupuestos de la responsabilidad civil por el hecho ajeno.*

**Artículo 5°.- De la responsabilidad penal adolescente.** *Las disposiciones de esta ley no tendrán aplicación respecto de los delitos perpetrados por adolescentes, sujetos a la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.”*

### **Indicaciones**

1.- Del diputado **Meza** al artículo 2° para modificarlo de la siguiente forma: Intercálase entre la frase “367 ter” y la palabra “el”, la frase “372 bis”.

2.- Del diputado **Walker** al artículo 2° para intercalar entre “artículo” y “142” la frase “141 inciso final”.

La **indicación del diputado Meza** es incompatible con lo ya aprobado, por cuanto se rechazó incorporar los artículos que señala en el catálogo del nuevo artículo 94 bis. Se tiene por **rechazada** por el mismo quórum anterior. (5-4-3)

Votaron a favor los señores diputados Matías Walker (Presidente) Gabriel Boric, Hugo Gutiérrez, Rene Saffirio y Leonardo Soto.

Votaron en contra las señoras y señores diputados Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Tomas Hirsch y Paulina Nuñez.

Se abstuvieron los señores diputados Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz y Gonzalo Fuenzalida.

El señor **Valenzuela** acotó que dado que en el ámbito penal se incorporó en el catálogo el artículo 141 inciso final, es conveniente incorporarlo también respecto de la renovación de la acción civil.

Sometidos a votación los **artículos 2°, 3°, 4° y 5°, con la indicación del diputado Walker (N°2)**, son **aprobados** por unanimidad. (13-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados **Matías Walker (Presidente)**, Jorge Alessandri, Gabriel Boric, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Diaz, Camila Flores Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Tomas Hirsch, Paulina Nuñez, Rene Saffirio y Leonardo Soto.

### **Proyecto de ley**

**Artículo transitorio.-** *Para los hechos delictivos cometidos con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente el artículo 369 quáter del Código Penal.”.*

### Indicaciones

1.- Del diputado **Walker** para reemplazar el artículo transitorio por el siguiente: “Las acciones derivadas de lo establecido en esta ley, cuyo plazo de prescripción se encontrare suspendido conforme al artículo 369 quáter, corriendo o cumplido, serán consideradas imprescriptibles.”.

2.- De los diputados **Saffirio, Boric, Gutiérrez y Walker** para sustituir el artículo transitorio por el siguiente: “Artículo transitorio.- Lo dispuesto en el artículo 94 bis del Código Penal, se aplica también a los hechos punibles cometidos desde la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República.”.

3.-Del diputado **Walker** para reemplazar el artículo transitorio por el siguiente: “La acción penal derivada de los delitos señalados en esta ley, cuyo plazo de prescripción no haya sido declarado judicialmente a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley será considerada imprescriptible, para efectos de su investigación y declaración.”.

El diputado **Walker (Presidente)** explicó que la propuesta que viene del Senado contiene un artículo transitorio que señala que para los hechos delictivos cometidos con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente el artículo 369 quáter del Código Penal, que es la norma que suspende el plazo de prescripción hasta que la víctima cumple 18 años.

Señaló que la Comisión recibió la opinión de distintos invitados, entre ellas la del abogado penalista Juan Pablo Hermosilla quien aportó diversos argumentos por los cuales se podía incorporar normas de retroactividad, puesto que se trata de una norma procesal y no sustantiva que no afecta el principio de irretroactividad de la ley penal, e hizo llegar una minuta, que se envió a todos los diputados, con tres propuestas alternativas, unas en subsidio de las otras, para reemplazar el artículo transitorio, las cuales suscribió como indicaciones:

1.- “Las acciones derivadas de lo establecido en esta ley, cuyo plazo de prescripción se encontrare suspendido conforme al artículo 369 quáter, corriendo o cumplido, serán consideradas imprescriptibles.”.

2.- “La acción penal derivada de los delitos señalados en esta ley, regirá también para todos aquellos casos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del niño y de la niña en nuestro país.”.

3.- “La acción penal derivada de los delitos señalados en esta ley, cuyo plazo de prescripción no haya sido declarado judicialmente a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley será considerada imprescriptible, para efectos de su investigación y declaración.”.

La primera de todas es la más amplia, extiende la imprescriptibilidad a delitos ocurridos con anterioridad a la publicación de esta ley salvo aquellos casos en que se hubiera declarado judicialmente de manera expresa la prescripción.

La segunda se funda en que a partir de la consagración del interés superior del niño en un tratado internacional de derechos humanos, como es la Convención de Derechos del niño, armónicamente debe considerarse que debe regir la imprescriptibilidad para todos los hechos constitutivos de los delitos señalados en este proyecto de ley ocurridos desde que Chile ratificó la Convención, en armonía con el inciso 2º artículo 5º de la Constitución.

El diputado **Saffirio** comentó que presentó una indicación relacionada con la segunda propuesta del abogado Hermosilla que sustituye el artículo transitorio por otro del siguiente tenor: “Lo dispuesto en el artículo 94 bis del Código Penal, se aplica también a los hechos punibles cometidos desde la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política de la República.”.

Explicó que se enlaza con el artículo 5º para precaver cualquier duda que pueda establecerse respecto de una posible inconstitucionalidad, puesto que no se trata de establecer un tiempo arbitrariamente, sino de establecer un hito desde el punto de vista de las responsabilidades del estado de Chile en materia de protección de los derechos de la infancia, y qué mejor hito para poder desde cuándo poner en vigencia esta ley que el momento en que el estado de Chile asume las responsabilidades que conlleva la Convención sobre Derechos del niño, a partir de este instrumento se comienza a asentar la doctrina de la protección integral de los derechos del niño que concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, asunto relativamente nuevo en nuestra cultura jurídica.

Agregó que el profesor Fernando Atria dice que la prescripción es una cuestión de decisión exclusivamente legislativa, corresponde al legislador, y solo al legislador, determinar si ella existirá, y en caso afirmativo el modo en que ésta se computa y el lapso que toma, es de toda evidencia que el legislador puede modificar los plazos de prescripción, eliminarla o declarar imprescriptibles ciertos delitos, al hacerlo, por cierto, debe respetar otros derechos y reglas constitucionales, pero nada hay en principio en la prescripción misma que tenga estatuto constitucional.

No hay nada que impida establecer que esta ley comienza a regir desde la fecha en que el estado de Chile suscribió la Convención internacional de Derechos del niño.

El diputado **Díaz** comentó que esta materia le genera muchas dudas. Está de acuerdo con el profesor Atria respecto del carácter procedimental de la prescripción, pero no le resulta tan claro que él diga lo mismo respecto de la retroactividad, y de lo que se trata la discusión en este punto es sobre retroactividad y no sobre prescripción.

Preguntó al diputado Gutiérrez, en virtud de su anterior desempeño como abogado en causas de derechos humanos, si es posible hacer analogía en esos casos con una norma como la que se pretende introducir, esto es, que los derechos humanos garantizados por tratados internacionales tienen carácter de imprescriptibles a partir de su incorporación en Chile, pues podría ser preocupante que alguien pudiera intentar una interpretación así.

El diputado **Gutiérrez** explicó que toda la disquisición que hizo la Corte respecto de considerar imprescriptibles, no amnistiabiles y no indultables los delitos de lesa humanidad es a partir del artículo 3° común del Convenio de Ginebra y entendiendo que esos convenios están aprobados y ratificados por Chile con mucha antelación a la comisión de los mismos después del golpe de estado de 1973.

El señor **Valenzuela** pidió que respecto de los problemas sobre una declaración expresa de la retroactividad de la imprescriptibilidad penal se incorporara en el acta la siguiente minuta:

#### *"I. ANTECEDENTES*

*La posibilidad de que las reglas excepcionalísimas que propone el proyecto se apliquen inmediatamente a delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma (retroactividad) ha sido latamente estudiada, y pese a la voluntad de que así sea, cabe señalar que en las distintas instancias de la tramitación finalmente siempre se ha terminado por descartar. Así, tanto en el proyecto que aprobó la Comisión Especial de Infancia , en el Proyecto que aprobaron las Comisiones Unidades Especial de Infancia y de Constitución, Legislación y Justicia , así como en el propio proyecto aprobado por la Sala del Senado por unanimidad se omitió cualquier regla que declarase la retroactividad. No obstante, durante el año 2018 en el Senado se invitó a diversos profesores del ámbito constitucional, penal y civil a exponer sobre el punto, quienes concordaron ampliamente en la inconveniencia (sino ilegitimidad) de una regla como la pretendida. Incluso se presentaron dos indicaciones sobre la materia, las cuales no obstante, luego de escuchar a los diversos profesores, fueron retiradas por las senadoras que presentaron la indicación.*

*Los argumentos y consideraciones que se tuvieron a la vista, expuestas tanto por los profesores como por los asesores del Ejecutivo han sido las siguientes:*

#### *II. ASPECTOS CONSTITUCIONALES*

*El primer problema radica en resolver si la prescripción tiene o no una garantía constitucional basada en el artículo 19 N° 3, inciso 8°, de la CPR, que consagra el principio de irretroactividad de la ley penal, estableciendo que: "Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado", principio que radica en la certeza y seguridad jurídica que deben existir en los ciudadanos sobre las reglas*

existentes y sus respectivas consecuencias, razón por la cual todas las leyes penales deben regir sobre situaciones futuras.

De la norma anterior existe un amplio consenso en cuanto a que esa garantía cubriría la regulación de la prescripción.

1) Tal como señalaron los profesores que participaron del análisis, la doctrina mayoritaria considera a la prescripción una institución penal, o a lo más de naturaleza mixta (procesal/penal), y que por ende se incluye en la garantía de la irretroactividad de la Constitución, que se constituye en un mandato tanto para el legislador como para el juez.

2) Si es tan claro que en virtud de este principio constitucional de irretroactividad penal NO se puede modificar la intensidad del reproche de la responsabilidad penal (por ejemplo, aplicar una ley retroactivamente que cambia la pena de 5 a 10 años de pena por un delito), con mayor razón NO sería posible aplicar una ley retroactivamente que no modifica la intensidad del reproche, sino que lo hace revivir (se encontraba prescrita la responsabilidad penal y ahora renace por una nueva ley).

3) Además de todo lo anterior, se tiene a la vista lo que ha sido la práctica jurisprudencial en situaciones anteriores. Así, cuando se modificó el plazo de prescripción con la introducción del art. 369 quáter en el año 2007, se constató que los tribunales mayoritariamente aplicaron sólo para el futuro la ampliación del plazo, contemplada en ese nuevo artículo, dada esa garantía constitucional.

### III. ASPECTOS PROCESALES

Si eventualmente se esgrimiera la concepción minoritaria, esto es, que la prescripción tiene una naturaleza procesal, aún estipulándolo la ley, permanece la incerteza jurídica de su aplicación, pues existen otras normas procesales que le otorgarían al imputado un derecho preferente para ampararse en un plazo procesal más favorable. Así, el Código Procesal Penal, que permite que al imputado se le aplique la ley con el plazo más favorable, y la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, que da la oportunidad de elección al prescribiente, aunque sólo tratándose de plazos en curso. Así, si a quien aún no lo vence el plazo puede elegir el régimen más favorable, con menor razón se le podrá aplicar al prescribiente un régimen más desfavorable si ya se extinguió el plazo.

### IV. ASPECTOS LEGALES

Como se ha señalado, un aspecto que complejiza desde el punto de vista legal (probablemente también constitucional) la aplicación retroactiva, se refiere a la cantidad de modificaciones legales que han sido objeto los delitos sexuales. Así por ejemplo, en los últimos años las leyes 19.617 (1999), 19.874 (2003), 19.927 (2004), 20.480 (2010), 20.507 (2011), 20.526 (2011), 20.594 (2012), 20.685 (2013). Todas ellas han creado, modificado o derogado delitos, modificado las penas, cambiado, suprimido o incorporado nuevos artículos, lo que genera una incerteza respecto a cuál legislación será la aplicable y de qué manera, si por ejemplo, el tipo penal ya no existe en la legislación, a un nivel formal.

*En efecto, a modo meramente ilustrativo, antes de la reforma del 1999 (Ley N°19.617), era pacífico en doctrina que “yacer” con una mujer sólo admitía la penetración vaginal, considerándose el acceso por otras cavidades como hipótesis de “abusos deshonestos”. En igual sentido, antes de esa reforma, el Código Penal sancionaba el estupro (art 363) según la siguiente fórmula: “El estupro de una doncella, mayor de doce años y menor de dieciocho, interviniendo engaño, será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados.”. Conforme a la regulación y la jurisprudencia vigente a la época de esa norma, el significado de la voz “doncella” era particularmente complejo, exigiéndose no sólo que se tratase de una mujer, sino que, por aplicación del término estupro, que implica engaño, que la adolescente carezca de experiencia sexual.*

*En términos formales, antes de la misma ley, la violación de menor de 12 años se tipificada en el artículo 361 N°3 del Código Penal; actualmente la figura de la violación impropia se encuentra en el artículo 362. Entonces, si en la actualidad se toma conocimiento de un acceso carnal a una menor de 11 años ocurrido en 1998, esa conducta es atípica. El hechor no podrá ser condenado por la norma prevista en 1999, porque “ese” artículo 361 N° 3 se encuentra derogado (la derogación es ley penal más favorable), y tampoco podrá ser sancionado por el actual artículo 362, dado que no estaba vigente a la fecha de la comisión de los hechos.*

#### V. RIESGOS CONTRAPRODUCENTES A LOS INTERESES DE LAS VÍCTIMAS

*Si aún el proyecto de ley contemplase una redacción que explícitamente la haga aplicable retroactivamente, existen 3 riesgos que deben tenerse presente.*

*1) Riesgo de Inaplicabilidad.- El primero de ellos desde luego corresponde a que, conociendo de un caso particular, en que se ejerza la acción penal contra un imputado por un delito que de acuerdo a la anterior legislación se encontrare prescrito, el Tribunal Constitucional (TC) declare la inaplicabilidad de la norma por inconstitucionalidad, basada en la garantía ya referida del art. 19 N°3 de la CPR. Si bien el Tribunal no se ha pronunciado expresamente sobre este punto, hay luces sobre el criterio que pudiese seguir, no sólo por la doctrina mayoritaria ya comentada de la concepción de la prescripción, sino porque en fallos recientes ha recogido esta doctrina para fundamentar sus resoluciones. Así por ejemplo, en sentencia de agosto de 2018, para fundar su concepción sobre el contenido de la irretroactividad penal, cita a Díez-Picazo: “...la irretroactividad de la ley penal desfavorable ha de regir no sólo para la definición del delito y de la pena propiamente dichos, sino también para todos aquellos otros elementos de la legislación penal que pueden resultar determinantes de la responsabilidad criminal (reglas sobre prescripción, utilización de antecedentes penales, cumplimiento de condena, etc.)...”. El problema radica entonces en que eventualmente publicándose una ley que establece la imprescriptibilidad con carácter retroactivo, dándose legítimas expectativas a víctimas de estos delitos, en que decide denunciar y enfrentar un proceso penal, esto se frustre por estas consideraciones y finalmente se atente contra los procesos de reparación, al declarar la inaplicabilidad de la norma. Y no debe olvidarse que una vez declarada la inaplicabilidad del precepto legal, puede el Tribunal Constitucional, de oficio o a petición de cualquier persona –hay acción pública-,*

declarar su inconstitucionalidad, entendiéndose derogada la norma a partir de ese instante.

2) *Riesgo de paralización de los procesos.- Si aún frente a estos antecedentes el TC pudiese efectivamente avalar la aplicación retroactiva de la ley, eso no impide que las defensas reclamen por esta vía al TC, suspendiendo transitoriamente los juicios, por plazos superiores a 1 año, generándose un efecto similar al anterior, frente a la frustración en la obtención de un resultado judicial oportuno. Y una solución constitucional, de reforma a la CPR, tampoco solucionaría esto, ya que como se ha señalado reafirmaría el estatuto constitucional actual (anterior). Sin embargo tampoco se solucionaría vía ley interpretativa, dado que el presupuesto para una ley interpretativa radica en que la norma a interpretar debe ser oscura, ambigua, contradictoria, y como se ha señalado, con los antecedentes expuestos no hay luces de que así considere el TC la garantía de irretroactividad.*

3) *Riesgo de incentivo perverso.- Un serio inconveniente operativo lo representa el hecho de considerar que actualmente la mayoría de los delitos sexuales contra menores de edad que no prosperan dada la prescripción, terminan por aplicación de la facultad de no inicio de la investigación, establecida en el Código Procesal Penal. Entonces, cabe preguntarse, como se ha cuestionado, qué sucede con esos casos, ¿es posible reabrirlos? Si se opta por reabrirlos, es cuestionable la constitucionalidad de la medida, basada en el art. 76 de la CPR, que prohíbe hacer revivir procesos ya concluidos. Si por el contrario, se establece que no se permite revivir esos procesos, se produce un incentivo perverso, pues fomenta que culpables se autodenuncien durante la tramitación del proyecto, a fin de solicitar su sobreseimiento.*

## VI. LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

*Un último aspecto se relaciona con la capacidad del sistema para poder conocer de la cantidad de casos que se denuncien dada la aplicación retroactiva, especialmente vinculadas al sistema procesal antiguo, dada la eliminación de los jueces del crimen, siendo ahora competencia de los jueces de letras de jurisdicción común, pero sin la injerencia del Ministerio Público a cargo de la investigación. Si bien no se trata de un cuestionamiento legal pues los tribunales y la jurisdicción son anteriores, el problema operativo pone en entredicho la capacidad, en los términos actuales, de poder llevar con éxito las investigaciones, en tribunales que carecen de la expertise y las competencias para llevar la investigación criminal.*

*En efecto, la reforma procesal penal reemplazó el sistema de justicia criminal inquisitivo que regía en Chile desde 1906, por uno de corte acusatorio, en el que se separan totalmente las competencias institucionales de investigar y acusar, por una parte, y juzgar por otra. En términos orgánicos, los antiguos juzgados del crimen debieron ceder ante la creación de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal, que conocerían de las materias asociadas a la criminalidad en el seno del nuevo sistema.*

*Este cambio orgánico, gradual y planificado, debía por fuerza considerar además el hecho de que el nuevo procedimiento penal sólo resultaba aplicable a aquellas conductas ilícitas cometidas a partir de la entrada en vigencia del nuevo sistema, tal como se establecía explícitamente en el artículo 483 del Código Procesal Penal. Desde esta perspectiva, la reforma procesal penal planteaba el desafío de posibilitar la aplicación progresiva y eficaz del nuevo sistema de justicia procesal penal; mantener un estándar adecuado de acceso a la justicia respecto de aquellos casos que debían regirse por el antiguo proceso ante los tribunales del crimen, y posibilitar la paulatina eliminación de estos juzgados. Es lo que se regula en los artículos 4° y 5° transitorio de la Ley N°19.665, disposiciones que encargaron a las Cortes de Apelaciones respectivas las siguientes funciones:*

*a) Determinar la supresión de los juzgados del crimen, según la carga de trabajo de los mismos y las necesidades de funcionamiento; y,*

*b) Distribuir las causas pendientes entre los juzgados de letras o del crimen de la misma jurisdicción, entendiéndose para todos los efectos constitucionales y legales que los juzgados a los que sean asignadas son los continuadores legales del suprimido.*

*En la actualidad, y en razón de la carga de trabajo de los respectivos juzgados, el único tribunal antiguo del crimen que subsiste en Chile es el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, el cual ha absorbido la competencia que restaba a los antiguos tribunales del crimen ya extintos del respectivo territorio jurisdiccional (inciso final del art. 4° transitorio de la Ley N°19.665). En el resto del país –incluyendo la jurisdicción de San Miguel- todos los tribunales del crimen ya se encuentran extintos, siendo reasignadas estas causas a un juzgado de letras de la misma jurisdicción, conforme a lo dispuesto por la Corte de Apelaciones respectiva. Para poder hacer el mapeo de los tribunales que en cada territorio jurisdiccional han absorbido la competencia criminal antigua, sería necesario consultar por cada Corte de Apelaciones las resoluciones que dicho tribunal ha adoptado al respecto.*

*La pregunta que necesariamente debe formularse es la siguiente: ¿Qué capacidad tiene un juzgado de letras, de competencia civil y comercial, de investigar, procesar y juzgar delitos sexuales perpetrados hace varios años atrás en contra de menores de edad?*

*Cabe considerar que durante la tramitación del proyecto de ley en el Senado, las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, Unidas, acordaron consultar la opinión de la Excma. Corte Suprema sobre las implicancias prácticas que podría tener la aplicación retroactiva de las normas de imprescriptibilidad de la acción penal, en particular, “cuál sería el tribunal competente para conocer estos ilícitos, a qué procedimiento se sometería su investigación y cuál sería el órgano encargado de realizarla. Todo lo anterior, teniendo en vista que el nuevo procedimiento procesal penal sólo rige para hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigor”.*

*Si bien la respuesta del Pleno de la Corte Suprema señala que, atendido que la consulta que “se efectúa a este tribunal supremo escapa a lo que dispone el artículo 77 de la Constitución Política de la República, única oportunidad en la cual el texto constitucional consulta la opinión de este tribunal, toda vez que no dice relación con la*

organización y atribuciones de los tribunales de justicia, de modo que no corresponde emitir decisión al respecto”, a continuación agrega:

*“Sexto: Que en todo caso, cabe hacer presente que si bien el Código Procesal Penal fue explícito en señalar en su título final que las disposiciones de dicho Código “sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia” (artículo 483 del Código Procesal Penal), nunca se puso en el caso de especificar a quien correspondía la competencia de conocer las causas nuevas por hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia que se generaran tras la eliminación de los respectivos juzgados del crimen. Esta última cuestión sólo fue definida por el legislador en los artículos 4°, 5° y 7° transitorios de la ley N° 19.665, que encargaron a las respectivas Cortes de Apelaciones del país la potestad de estipular cuáles tribunales habrían de funcionar como continuadores legales de los antiguos tribunales del crimen, para la tramitación de causas pendientes.”*

*Al final del informe de la Corte Suprema sin embargo se consignan las disidencias y fundamentos particulares de varios Ministros, situación que da cuenta de la disparidad de criterios que suscita la materia, tanto en el fondo como respecto de los aspectos operativos de índole orgánica consultados.*

*Sobre el fondo, están los votos disidentes del Presidente (S) sr. Sergio Muñoz y de los Ministros Dolmestch, Künsemüller, Cisternas, Blanco y Dahm. Los Ministros Dolmestch, Künsemüller, Cisternas, Blanco y Dahm, quienes “estuvieron por informar, emitiendo opinión desfavorable” respecto de la imprescriptibilidad, postura que es fundamentada extensamente. En el caso del Presidente (S) sr. Sergio Muñoz, éste parece rechazar sólo la retroactividad, sosteniendo a su respecto que “debe tenerse en consideración lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia N°46 de 21 de diciembre de 1987 especialmente en los motivos 15° y siguientes, que determinan la inconstitucionalidad del artículo 8° de la Constitución Política de la República en cuanto regula, con efecto retroactivo, la conducta que sanciona, por atentar en contra de los derechos esenciales de la naturaleza humana”.*

*En lo que respecta a los aspectos operativos de índole orgánica consultados, también se observan prevenciones particulares, que dan cuenta de una disparidad de criterios. Así por ejemplo, el ministro sr. Cisternas, quien estuvo por opinar desfavorablemente la imprescriptibilidad señala que “sin perjuicio de estimar que lo requerido corresponde a una materia de fondo, por consideraciones de naturaleza práctica estuvo por emitir la opinión solicitada, señalando que, en la eventualidad de aprobarse la aplicación retroactiva de las normas señaladas, por aparecer que el sistema de enjuiciamiento penal actualmente vigente resulta más beneficioso para el imputado al otorgar mejores garantías de respeto de sus derechos, el tribunal y el procedimiento aplicable sería el actualmente en vigencia”. En cambio, el Ministro sr. Blanco, adhiriendo a esta postura, la restringe sólo a la aplicación del procedimiento penal reformado, quedando sometido el conocimiento del asunto al tribunal señalado por la ley a la época de ocurrencia de los hechos.*

*De todo lo anterior se desprende que una pretendida aplicación retroactiva generaría incertidumbre respecto de la forma como debiese la judicatura conocer de*

*estos, respecto de los cuales, basados en el sistema antiguo procesal penal, carece de las competencias necesarias para realizar la debida investigación.”*

El diputado **Gutiérrez** comentó que las propuestas del abogado Hermsilla van desde la más amplia, irretroactividad total, la segunda desde que entró en vigencia la Convención de los derechos del Niño, y la mínima según la cual se investiga todo donde no haya una sentencia judicial que declare la prescripción.

La tercera de ellas ya está operando, pero algunos tribunales investigan y otros no, con la introducción de la norma se evitan interpretaciones contradictorias, y constituye una medida reparatoria hacia la víctima de un abuso sexual infantil para que al menos tengan la reparación de que su causa se investigue y se llegue a establecer que los hechos son verídicos y al menos haya un reproche en la sentencia que diga que hubo delito pero hay prescripción.

El problema es hasta dónde se llega con la retroactividad porque lo anterior está operando en los hechos.

El *in dubio pro reo* fue una gran conquista de la historia porque evitó la venganza y la autotutela, pero la dogmática penal tradicional ha ido siendo superada y la víctima va siendo cada vez más puesta en el medio, *in dubio pro victima*, es decir, que cuando se va a interpretar una norma lo haga desde la víctima.

Todos los problemas que el señor Valenzuela hace ver se pueden presentar incluso sin retroactividad, la imprescriptibilidad va a ser tema cuestionado como lo es en las causas por violaciones a los derechos humanos.

Instó a que la Comisión concordara en que por lo menos la última de las opciones del abogado Hermsilla, como regla interpretativa, debería existir, nadie podría estar en desacuerdo que los tribunales investiguen y que declaren después la prescripción.

Pero de todos modos, la opción del diputado Saffirio es la que parece más razonable, fijando como hito la Convención de los derechos del niño porque desde ahí se puede hacer el reproche.

El diputado **Saffirio**, respecto de las dudas de la postura del profesor Atria frente a la retroactividad, señaló que el profesor dijo en el mismo artículo que citó anteriormente que quienes creen que la prescripción es parte de la pena no pueden aprobar una disposición que modifica retroactivamente lo que ellos consideran una pena penal, por ende, a contrario sensu, se puede entender que quienes no creen que la prescripción es parte de la pena pueden aprobar una disposición que modifica retroactivamente. Atria dice además que no cree sea correcto decir que la prescripción es parte de la pena, por lo que cree que es una cuestión de decisión legislativa si se hace regir la nueva ley *in actum* o no.

Instó a aprobar su indicación y señaló que hay una colisión entre la justicia y el derecho, que es necesario hacer es justicia con las víctimas y utilizar el derecho común como un instrumento al servicio de un fin que es la justicia.

El diputado **Walker (Presidente)** señaló que no hay duda de que los sobrevivientes de abuso sexual infantil en nuestro país han ido corriendo las fronteras de lo posible. Cuando se planteó este proyecto que propuso la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil hace nueve años se tomó muy poco en serio, fue objeto de muchas críticas por parte de los penalistas, y los mismos abogados penalistas que cuando se planteó tipificar como delito la producción y almacenamiento material pornográfico infantil fueron muy críticos incluso de muchos delitos que sancionan la pedofilia. Han sido las víctimas las que han logrado de generar conciencia respecto del derecho al tiempo, respecto de la imprescriptibilidad.

En el Senado hubo mucho interés de los senadores de poder incorporar la retroactividad y el temor que generó en muchos senadores el poder aprobar esta norma tiene que ver con el Tribunal Constitucional e instó a no legislar con temor porque esta es una decisión del legislador, netamente procesal, no se está creando delitos nuevos para aplicarlos de manera retroactiva, sino que tal como ya lo está haciendo la justicia, se habilite a los tribunales de justicia y al ministerio público a poder investigar los delitos ocurridos con anterioridad a la aprobación de este proyecto de ley.

Ni el Presidente de la república ni un grupo de diputados se va a atrever a recurrir al Tribunal Constitucional reclamando porque se está tratando de extender el ámbito de aplicación a los delitos sexuales ocurridos con anterioridad, y si se plantea algún recurso de inaplicabilidad que tiene efectos relativos respecto a una causa determinada, no va a tener efectos generales, va a ocurrir de todos modos, con o sin retroactividad, por el solo hecho de declarar que estos delitos como imprescriptibles.

El escuchar a las víctimas ha sido muy relevante.

El señor **Valenzuela** acotó que respecto de la opción de solo investigar subsisten los mismos problemas en términos operativos que explicamos respecto de la justicia antigua, llegue o no hasta una etapa de condena, en la mera investigación está el problema porque van a hacer los jueces civiles quienes van a estar a cargo de esta investigación, pero hay un efecto también que se puede producir contrario, porque se refiere a los delitos indicados en esta ley, y *a contrario sensu*, puede interpretarse que los delitos que no están en esta ley no deben investigarse si es que están prescritos, y además, si viene una denuncia con un delito respecto de un hecho del año 2002 que ha sido modificado hay un buen argumento legal para decir que la ley se refiere a los delitos actuales, que esos son los que tienen que investigarse y que por lo tanto no procede la investigación.

Sometida a votación la **indicación N°1 del diputado Walker** para reemplazar el artículo transitorio por el siguiente: "Las acciones derivadas de lo establecido en esta ley, cuyo plazo de prescripción se encontrare suspendido conforme al artículo 369 quáter, corriendo o cumplido, serán consideradas imprescriptibles.", fue rechazada por mayoría de votos. (1-12-0)

Votó a favor el diputado Matías Walker (Presidente).

Votaron en contra las señoras y señores diputados Jorge Alessandri, Gabriel Boric, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz, Camila Flores, Gonzalo

Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Tomas Hirsch, Paulina Nuñez, Rene Saffirio y Leonardo Soto.

Sometida a votación la **indicación N°2 de los diputados Saffirio, Boric, Gutiérrez y Walker** para sustituir el artículo transitorio por el siguiente: “Artículo transitorio.- Lo dispuesto en el artículo 94 bis del Código Penal, se aplica también a los hechos punibles cometidos desde la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República.”, fue **aprobada** por mayoría de votos.(7-6-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Matías Walker (Presidente), Gabriel Boric, Marcelo Diaz, Hugo Gutiérrez, Tomas Hirsch, René Saffirio y Leonardo Soto.

Votaron en contra las señoras y señores diputados Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida y Paulina Nuñez.

El diputado **Gutiérrez** precisó que la tercera propuesta del abogado Hermsilla era complementaria, de modo que dispone la investigación al menos de los hechos anteriores a septiembre de 1990, fecha de la entrada en vigencia de la Convención de los derechos del niño. Estima que es compatible y que debe votarse de todos modos en ese sentido.

El diputado **Diaz** sugirió debatir ese punto en la Comisión Mixta para debatirlo con calma, porque además se trata de una decisión de los tribunales investigar o no.

La Comisión decide tener por rechazada la **indicación N° 3 del diputado Walker** por el mismo quórum anterior, lo mismo el **artículo transitorio** del proyecto.

Despachado el proyecto, diputado **informante** señor **Gabriel Boric**.

#### **IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.**

##### **Indicaciones rechazadas:**

##### **1.- Indicación del diputado señor Fernando Meza:**

Al artículo 1°, numeral 1, en el artículo 94 bis propuesto, para agregar entre la frase “367 ter” y la palabra “el”, la frase “372 bis”.

Al artículo 2°, para agregar entre la frase “367 ter” y la palabra “el”, la frase “372 bis”.

##### **2.- De los diputados señores Walker, Boric y Saffirio:**

Al artículo 1°, numeral 1) para agregar a continuación de “367 ter” lo siguiente:”, 372 bis y 374 bis inciso primero”.

Al artículo 1°, numeral 4) para agregar a continuación del “367 ter” lo siguiente :”,372 bis y 374 bis inciso primero”.

3.- Del diputado señor Walker, para reemplazar el artículo transitorio por el siguiente:

“Artículo transitorio.- Las acciones derivadas de lo establecido en esta ley, cuyo plazo de prescripción se encontrare suspendido conforme al artículo 369 quáter, corriendo o cumplido, será considerada imprescriptible.”.

4.- Del diputado señor Boric, para reemplazar el artículo transitorio por el siguiente:

“Artículo transitorio.- La acción penal de los delitos señalados en esta ley, cuyo plazo de prescripción no haya sido declarado judicialmente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley será considerada imprescriptible, para efectos de su investigación y declaración.”.

#### **V.- ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN PARTICULAR.**

1.- Indicación del diputado señor Walker, al artículo 1°, numeral 1), en el artículo 94 bis propuesto, para sustituir la frase “en el artículo 142, inciso final, en relación con la violación” por la siguiente:” en los artículos 141, inciso final, y 142, inciso final, ambos en relación a la violación”.

2.- Indicación del diputado señor Walker, al artículo 1°, numeral 4) para sustituir la frase “en el artículo 142, inciso final, en relación con la violación” por la siguiente:” en los artículos 141, inciso final, y 142, inciso final, ambos en relación a la violación”.

3.- Indicación del diputado señor Boric, al artículo 1°, numeral 4) para eliminar el inciso final del artículo 369 quinquies.

4.- Del diputado señor Walker, al artículo 2°, para reemplazar la frase “en el artículo 142, inciso final,” por “ en los artículos 141,inciso final, y 142, inciso final, ambos”.

5.- De los diputados señores Saffirio, Boric, Gutiérrez y Walker, para sustituir el artículo transitorio por el siguiente:

“Artículo transitorio.- Lo dispuesto en el artículo 94 bis del Código Penal, se aplica también a los hechos punibles cometidos desde la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República.”.

\*\*\*\*\*

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

## P R O Y E C T O D E L E Y

### “Título I

#### De la imprescriptibilidad de la acción penal

Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Agrégase el siguiente artículo 94 bis:

“Artículo 94 bis.- No prescribirá la acción penal respecto de los crímenes y simples delitos descritos y sancionados en **los artículos 141, inciso final, y 142, inciso final, ambos en relación con la violación**; los artículos 150 B y 150 E, ambos en relación con los artículos 361, 362 y 365 bis; los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter; el artículo 411 quáter en relación con la explotación sexual; y el artículo 433, N° 1, en relación con la violación, cuando al momento de la perpetración del hecho la víctima fuere menor de edad.”.

2) Intercálase, en el inciso tercero del artículo 369, a continuación de la palabra “dispuesto”, la siguiente expresión: “en el artículo 369 quinquies de este Código y”.

3) Suprímese el artículo 369 quáter.

4) Agrégase, a continuación del artículo 369 quáter, el siguiente artículo 369 quinquies:

“Artículo 369 quinquies.- Tratándose de los delitos establecidos en **los artículos 141, inciso final, y 142, inciso final, ambos en relación con la violación**; los artículos 150 B y 150 E, ambos en relación con los artículos 361, 362 y 365 bis; los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter; el artículo 411 quáter en relación con la explotación sexual; y el artículo 433, N° 1, en relación con la violación, perpetrados en contra de una víctima menor de edad, se considerarán delitos de acción pública previa instancia particular y se regirán por lo dispuesto en el artículo 54 del Código Procesal Penal desde que el ofendido por el delito haya cumplido los dieciocho años de edad, si no se ha ejercido antes la acción penal.”.

### Título II

#### De la renovación de la acción civil

Artículo 2°.- Renovación de la acción civil. Tratándose de los delitos establecidos en **los artículos 141, inciso final, y 142, inciso final, ambos en relación con la violación**; los artículos 150 B y 150 E, ambos en relación con los artículos 361, 362 y 365 bis; los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter; el artículo 411 quáter en relación con la explotación sexual; y el artículo 433, N° 1, en relación con la violación, todos del Código Penal, perpetrados en contra de una víctima menor de edad, la acción civil reparatoria podrá ser deducida por una sola vez, en contra del imputado o del responsable del hecho ajeno, transcurrido el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, entendiéndose renovada la acción civil, cumpliéndose las condiciones señaladas en los dos artículos siguientes.

Artículo 3°.- Renovación de la acción civil contra el imputado. Se entenderá renovada la acción civil reparatoria en contra del imputado por los delitos señalados en el artículo anterior, si la demanda es interpuesta por la víctima, considerándose por tal sólo aquella establecida en el inciso primero del artículo 108 del Código Procesal Penal, en la tramitación del respectivo procedimiento penal, una vez formalizada la investigación y hasta quince días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del juicio oral.

Renovada la acción en los términos señalados en el inciso anterior, ésta se tramitará conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, en particular, las contenidas en el Párrafo 2° del Título III del Libro Primero, en todo lo que no sea modificado en este artículo.

Asimismo, también se entenderá renovada la acción civil reparatoria, si es deducida por la víctima del inciso primero del artículo 108 del Código Procesal Penal, respecto del imputado formalizado, cuando el procedimiento penal continuare en conformidad a las normas que regulan el procedimiento abreviado, o que por cualquier causa terminare o se suspendiere sin que sea posible emitir un pronunciamiento acerca de la acción civil, háyase o no interpuesto ésta en el procedimiento penal, siempre que la víctima presente la demanda ante el juzgado de letras con competencia en lo civil en el término de sesenta días contado desde que quede ejecutoriada la resolución que dispusiere la suspensión o terminación del procedimiento penal. Sin perjuicio de lo anterior, una vez que se fije fecha para audiencia preparatoria y transcurra la oportunidad indicada en el inciso primero, sin que la víctima hubiere interpuesto la demanda civil ante el juzgado de garantía competente, se tendrá por extinguida la acción civil reparatoria de forma definitiva, sin poder renovarse más, ni aún si se fija nueva fecha de audiencia.

A su vez, si se procede en los términos del artículo 390 o del artículo 235, ambos del Código Procesal Penal, la acción civil reparatoria se entenderá renovada si la víctima presentare su demanda ante el tribunal civil competente dentro del término de sesenta días siguientes al requerimiento, o a la dictación de la resolución que dispusiere la continuación del procedimiento según las reglas del Título I del Libro Cuarto del Código Procesal Penal, o a la dictación del auto de apertura del juicio oral, según el caso. En esta última situación, la circunstancia de deducirse apelación en contra del auto de apertura del juicio oral no suspenderá el cómputo del plazo señalado.

Cuando se procediere conforme a los incisos tercero o cuarto, la demanda y la resolución que recayere en ella se notificarán por cédula al demandado, y el juicio se sujetará a las reglas del procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 4°.- Renovación de la acción civil contra el responsable por el hecho ajeno. Podrá renovarse la acción civil reparatoria en contra del responsable del hecho ajeno, por los daños derivados de la perpetración de los delitos señalados en el artículo 2°, si se cumplen las siguientes condiciones:

a) Que el tribunal con competencia penal haya dictado sentencia condenatoria en contra del autor del daño por la comisión de alguno de estos delitos y ésta quede ejecutoriada.

b) Que la acción civil sea deducida por la víctima del inciso primero del artículo 108 del Código Procesal Penal en contra del responsable del hecho ajeno, por los hechos que fundan la condena penal, ante el juez de letras con competencia en lo civil y dentro del término de sesenta días desde que la sentencia condenatoria penal se encuentre ejecutoriada.

Renovada la acción civil en los términos señalados en este artículo, ésta se tramitará conforme a las disposiciones del juicio ordinario, debiendo acreditarse respecto del demandado todos los presupuestos de la responsabilidad civil por el hecho ajeno.

#### Título final

#### De la responsabilidad penal adolescente

Artículo 5°.- De la responsabilidad penal adolescente. Las disposiciones de esta ley no tendrán aplicación respecto de los delitos perpetrados por adolescentes, sujetos a la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

**Artículo transitorio.- Lo dispuesto en el artículo 94 bis del Código Penal, se aplica también a los hechos punibles cometidos desde la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República.”.**

\*\*\*\*\*

Tratado y acordado en sesiones de fechas 16 y 24 de abril; 7 y 14 de mayo, todas de 2019, con la asistencia de los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio, y

Leonardo Soto. Asimismo, asistieron la diputada señora Erika Olivera (por la señora Flores) y Marcos Ilabaca (por el señor Díaz).

Sala de la Comisión, a 14 de mayo de 2019.



**PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE**  
Abogado Secretario de la Comisión